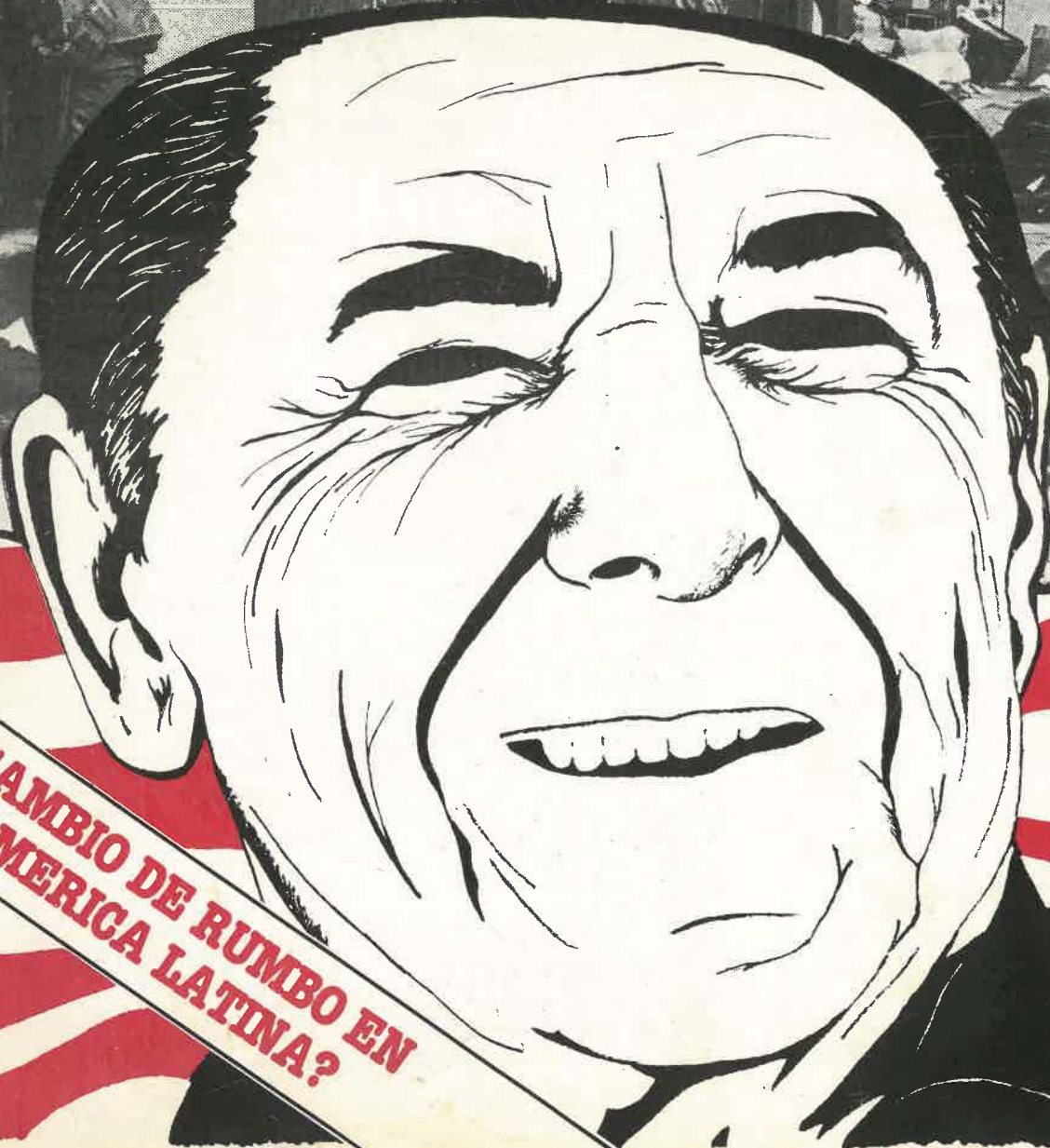
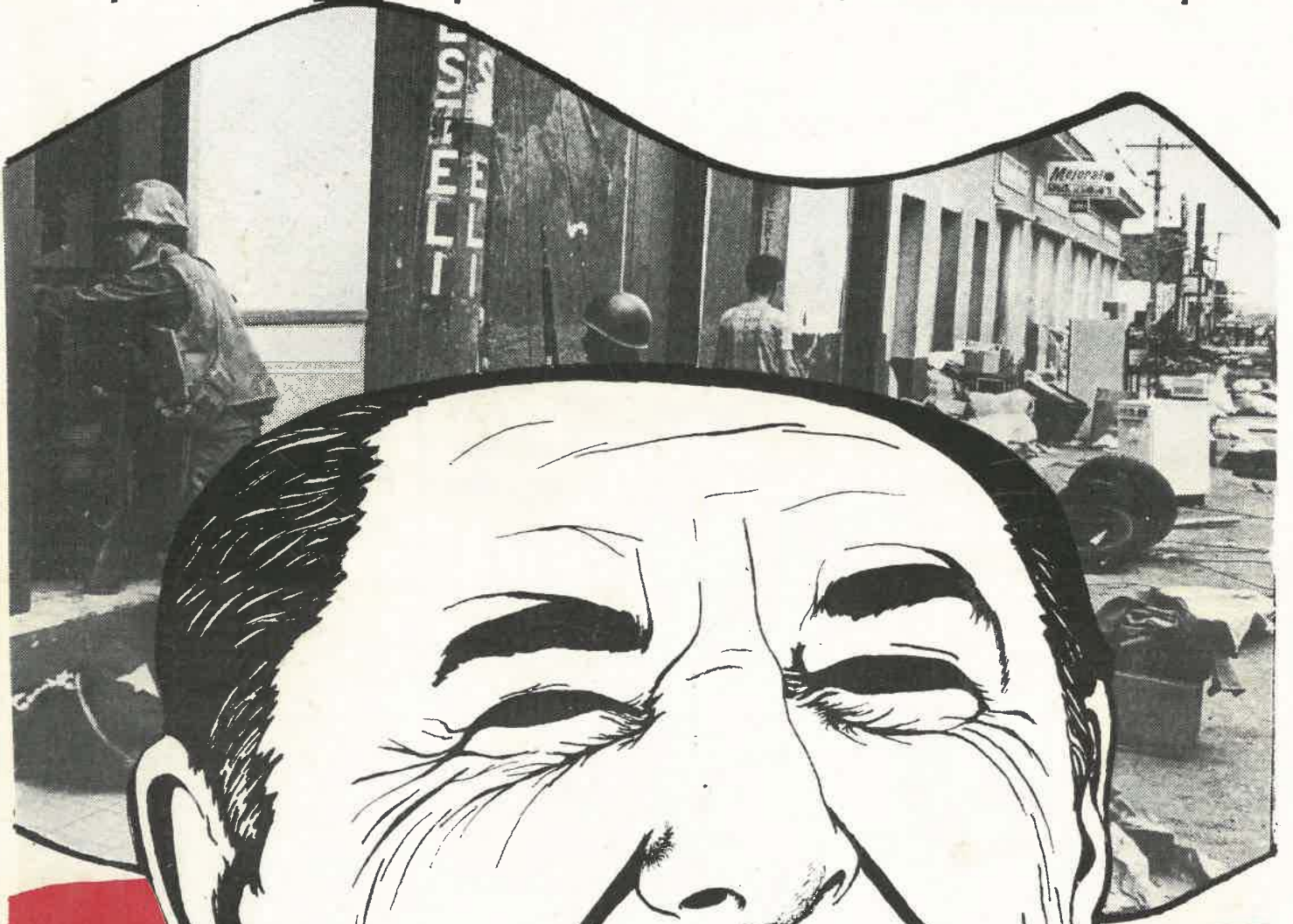


mensual / diciembre 1980
nueva serie / número 18

COSTA RICA: 7 Colones/ESPAÑA: 75 Ptas./FRANCIA: 5 F/PANAMA: B/1.
PERU: 100 Soles/REP. DOMINICANA: RDS1.-/SUECIA: 5 Kr./VENEZUELA: 5 Bs.

Imprecor

correspondencia de prensa internacional / intercontinental press



**¿CAMBIO DE RUMBO EN
AMERICA LATINA?**

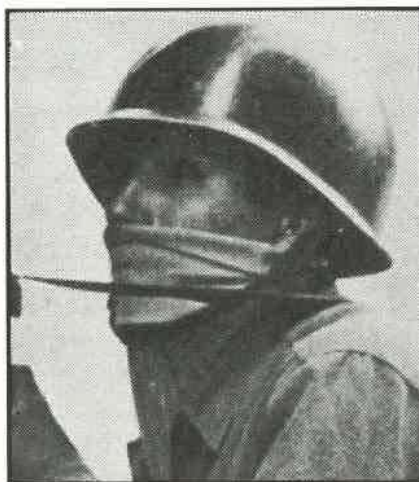
Sumario

América Latina

El pueblo boliviano bajo las botas: ¿un cambio en la situación política latinoamericana?

"Este golpe de Estado es el primero de la era Reagan", escribía poco después del 18 de julio —fecha del golpe de Estado de la "drogajunta" de García Meza— un diario argentino. Este comentario refleja la perspectiva en que se sitúan las dictaduras del Cono Sur, cuyo papel fue determinante de los acontecimientos de La Paz. En cualquier caso, es mucho más significativo el hecho de que este golpe de Estado ha sido el primero después de la victoria de la revolución nicaragüense... •

página 5



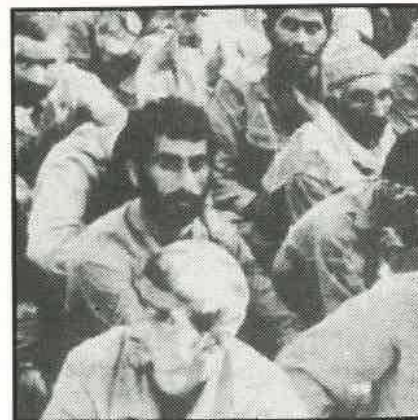
Nicaragua

Un nuevo avance de la revolución

Desde el derrocamiento de la dictadura somocista hasta ahora, la revolución nicaragüense ha dado muchos pasos adelante, que se reflejan en las medidas económicas y sociales tomadas por el FSLN y en su voluntad de no ceder a las presiones de la burguesía. La situación específica de doble poder creada en julio de 1979 aún no ha quedado resuelta. Sin embargo, el desenlace se aproxima. Ya se perfila la

prueba de fuerzas con la burguesía, en un contexto marcado por la extensión de la guerra civil en El Salvador y por la determinación del imperialismo norteamericano a quebrantar el ascenso revolucionario en América Central. •

página 13



La guerra Irán-Irak

Por la defensa de la revolución iraní

La primera constatación que se impone tras el estallido de la guerra abierta entre Irán e Irak, es que el conflicto sirve de pretexto y de cobertura a una intervención militar aún mayor del imperialismo en la región. La guerra desencadenada por Irak es un intento de aplastar la revolución iraní que acabó con el régimen del sha y el principal bastión del imperialismo en la zona. Frente a ello, la tarea de los revolucionarios está en la defensa de la revolución iraní frente a todas las agresiones del exterior —y del interior. •

página 17

Edita:

Liga Comunista Revolucionaria
(IV Internacional)

apdo. de Correos, 50.370
(Cibeles) Madrid

Imprime Ratlles. Mallorca, 206
Barcelona Dep. Leg. 40029/79

Polonia

El proletariado polaco pone en tela de juicio el poder de la burocracia

Por vez primera desde la instauración de la dictadura burocrática en la URSS y de su ulterior extensión a Europa oriental, la clase obrera ha arrancado, mediante un combate directo, el derecho a la existencia de organizaciones obreras autónomas, el derecho de huelga y toda una serie de otras conquistas. Se trata de una victoria de alcance histórico, que tiende objetivamente a minar no sólo el régimen burocrático en Polonia, sino todo el orden establecido en Europa del Este, subrayando el creciente papel que desempeña la revolución antiburocrática en el proceso de la revolución mundial. La clase obrera internacional debe estar atenta a los acontecimientos de Polonia, pues la solidaridad con el proletariado polaco adquiere ahora una importancia crucial. ●

página 23



Europa

Italia

FIAT, un primer tanto para la patronal

El acuerdo de regulación de empleo firmado entre la patronal de FIAT y los dirigentes sindicales de la FLM es una traición y un golpe para el movimiento obrero. La patronal italiana ya prepara ofensivas similares en la siderurgia y en la petroquímica. Sin embargo, del mismo modo que en la FIAT se manifestó una viva oposición a los acuerdos, estas reestructuraciones no podrán producirse sin un enfrentamiento cada vez más duro con la clase obrera. ●

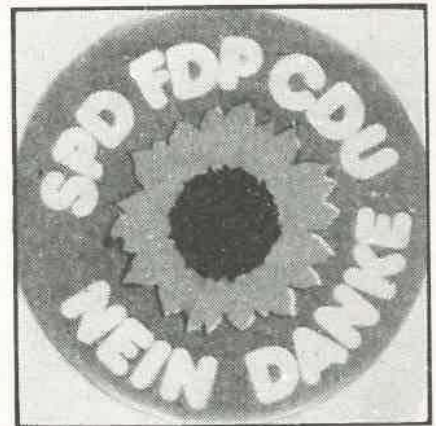
página 31

Alemania

Tras la derrota de Strauss

Strauss no ha logrado convertirse en canciller. Sin embargo, los resultados electorales constituyen una derrota para los que se movilizaron para impedir la victoria de Strauss: el verdadero vencedor de las elecciones del 5 de Octubre fue el FDP, aliado burgués y representante de los intereses de la patronal en el gobierno presidido por el socialdemócrata Schmidt.

página 34



Gran Bretaña

Los avances de la izquierda en el Congreso del Partido Laborista

Las decisiones adoptadas por el reciente congreso del Partido Laborista —donde el ala izquierda, encabezada por Tony Benn logró la mayoría en una serie de mociones importantes— significan un cambio en la vida política de Gran Bretaña. Sobre todo en el actual contexto de duros ataques de la patronal y de creciente resistencia del movimiento obrero. ●

página 36

**Declaración del Secretariado
Unificado de la IV Internacional**

¡Solidaridad con el pueblo boliviano!

¡Libertad para todos los presos políticos!

**¡Libertad para nuestros camaradas Felipe
Caballero, Amadeo Vargas y
José A. Pérez!**



EL comienzo de una resistencia organizada a la dictadura, y el aislamiento internacional de ésta, permiten que una campaña de solidaridad del movimiento obrero internacional pueda ejercer un impacto importante en la propia Bolivia. Esta es una de las conclusiones que extraemos del análisis de la situación boliviana, pocas semanas después del golpe de estado (ver el artículo publicado más adelante).

La evolución reciente de esta situación hace que sea más urgente que nunca desarrollar la solidaridad con los trabajadores y el pueblo boliviano, y confirma las posibilidades de incidir en el interior del país.

Pese a la censura, al estricto control de las comunicaciones entre las principales ciudades del país y el aislamiento en que se encuentran

las zonas mineras, las informaciones recogidas por las organizaciones obreras bolivianas coinciden: la represión sigue siendo generalizada, sistemática y extremadamente brutal; pese a algunas liberaciones, el número de presos aumenta, así como el de los desaparecidos; todos los dirigentes políticos y sindicales de la izquierda que aún están en libertad son buscados activamente.

Puesto que no han logrado aplastar al movimiento obrero, puesto que en el seno de éste se organiza la resistencia, García Meza y sus hombres intensifican la actividad de su aparato represivo.

Además, la base social de la dictadura sigue siendo igual de estrecha, y su aislamiento internacional se ha acentuado aún más.

El intento particularmente de los militares argentinos, de llegar a un acuerdo entre el

antiguo dictador Banzer, su partido, la Alianza Democrática Nacional, y el equipo militar en el poder, ha fracasado. El descrédito de este último es tan grande —particularmente después de las revelaciones hechas en el Senado norteamericano en torno a sus estrechos lazos con el tráfico de drogas y la mafia—, que Banzer y sus partidarios prefieren continuar presentándose de momento como una solución de recambio, en lugar de prestar su apoyo a un régimen cuya orientación política sin embargo, es próxima a la suya...

Este es el mejor indicador del aislamiento político de esta dictadura. Es un aislamiento catastrófico, en un momento en que la deuda exterior boliviana está renegociándose, y que se necesitan urgentemente nuevos préstamos para evitar una situación de bancarrota. La misma dictadura argentina empieza a encontrar más bien molesta la actitud provocadora de algunos miembros del gobierno García Meza y la factura a pagar por el mantenimiento a flote de este régimen le resulta un poco demasiado alta. Así, el gobierno de Buenos Aires se ha negado a conceder estas últimas semanas un nuevo préstamo de un millón de dólares a Bolivia, y las negociaciones del precio del gas boliviano vendido a Argentina vuelven a estar en un atolladero.

La Junta, aislada y económicamente al borde del abismo, no debe ser reforzada discretamente por los expertos del fondo monetario internacional.

No debe ser sustituida por una dictadura más... presentable en el exterior de Bolivia y con los mismo objetivos en el interior; debe ser derribada. Deben respetarse los resultados de las elecciones generales del 29 de Junio pasado.

Siles Suazo, el candidato que recogió una mayoría de votos, y cuya elección en el parlamento era cosa hecha, debe poder gobernar sin que esto signifique por parte nuestra ningún apoyo a sus orientaciones políticas y a su gobierno.

¡Deben cesar las detenciones masivas, las desapariciones!

¡Libertad para Juan Lechín, Simón Reyes y todos los militantes obreros bolivianos!

¡Libertad para nuestros camaradas Felipe Caballero, Amadeo Vargas y José A. Pérez!

Dirigentes del POR-Combate (partido obrero revolucionario-combate), la sección boliviana de la IVª Internacional, dirigentes sindicales. Felipe Caballero es secretario de la COB de Santa Cruz—, fueron arrestados en La Paz, el 16 de Octubre, su lugar de detención es desconocido, sus vidas están en peligro, como las de millares de presos que llenan las cárceles, los estadios y los campos de concentración en los bosques de la Amazonia boliviana.

¡Hay que salvarlos!

¡Solidaridad con el pueblo boliviano, con la resistencia a la siniestra dictadura de García Meza!

El pueblo boliviano bajo las botas

¿Un cambio en la situación política latinoamericana?

NO habían transcurrido todavía tres semanas desde las elecciones generales del 29 de junio —saludadas por todas las potencias imperialistas como un paso adelante hacia la estabilización de la situación boliviana—, cuando los militares se apoderaron nuevamente del poder en La Paz.

Este golpe de estado, la feroz dictadura del general García Meza, no pueden ser analizados como la simple reedición de los múltiples “pronunciamientos” y regímenes militares que ha conocido este país, en particular durante los últimos quince años.

Se combinan factores tan variados como los métodos empleados, los objetivos definidos, el contexto nacional, regional e internacional, para conferir al régimen de García Meza unas características que, en parte, son relativamente nuevas en Bolivia y toda América Latina.

“Este golpe de Estado es el primero de la era Reagan”, escribía poco después de los acontecimientos de La Paz un editorialista argentino al servicio de Videla. Este comentario, a pesar de basarse en una anticipación arriesgada de los resultados de las próximas elecciones norteamericanas, revela la perspectiva en que se sitúan las dictaduras del

“Cono Sur” latinoamericano, y cuyo papel es hoy determinante en La Paz.

No obstante, sería mucho más significativo recordar que este golpe de Estado victorioso es el primero después del triunfo de la revolución nicaragüense...

I. LA MARCHA AL GOLPE DE ESTADO

Proceso democrático y descomposición política

El golpe de Estado del 17 de julio sanciona y expresa el fracaso de una tímida tentativa de “democratización”, abierta a comienzos de 1978, en la fase final de la dictadura del general Banzer.

Este último había tomado el poder en agosto de 1971, para poner término, sangrientamente, a la crisis prerrevolucionaria que vivía entonces Bolivia (1970-1971).

Los siete años que duró su régimen conformaron uno de los periodos más difíciles conocidos por la clase obrera y el pueblo boliviano.

La apertura sistemática del país a los capitales imperialistas, a las multinacionales y sus

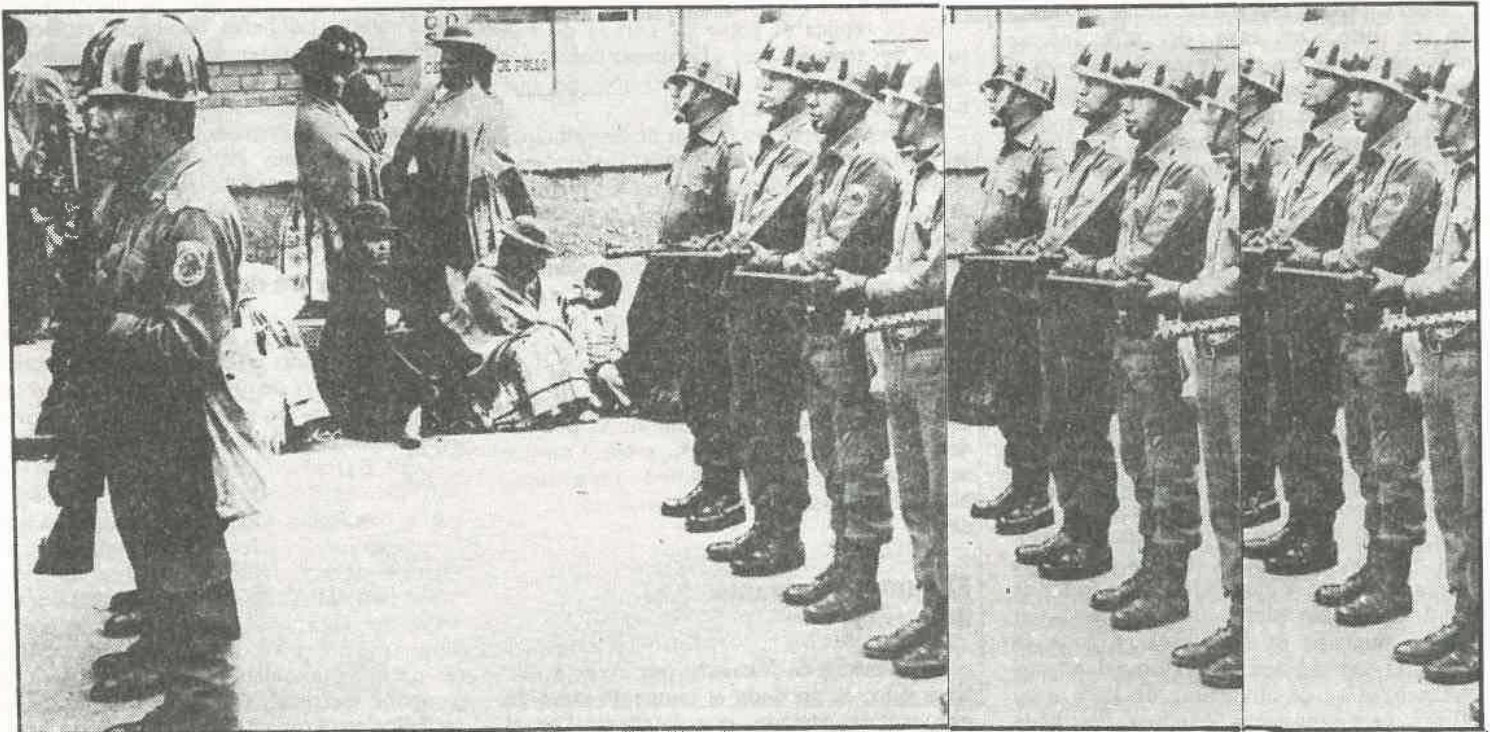
asociados argentinos y, sobre todo, brasileños; la represión y sobreexplotación feroz de los trabajadores en las ciudades, las minas y el campo; la corrupción generalizada, son algunas de las características, poco originales por cierto, del periodo Banzer. La incapacidad del régimen para dominar, siquiera parcialmente, una situación económica catastrófica, agravada por los efectos de la crisis a nivel internacional, la multiplicación de los conflictos internos en el seno de la jerarquía militar en el poder, la salida a la luz de numerosos escándalos, iban a conducir a la caída del dictador y, en un contexto económico y político caótico, a la tímida —y permanentemente cuestionada— apertura de un “proceso democrático”, bajo la presión, especialmente, de la embajada norteamericana.

Este intento de “apertura democrática”, por limitado y prudente que fuera, no iba a proporcionar a la burguesía estabilidad alguna.

Las formaciones políticas burguesas, divididas al extremo y provenientes en su mayoría del estallido del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), hacían más hincapié en las disputas personales que en las soluciones a una crisis que se agrava cada vez más.

En dos años, del comienzo de 1978 a los primeros meses de 1980, se asiste a una verdadera descomposición de los aparatos políticos burgueses tradicionales.

Durante este corto periodo se celebrarán dos elecciones generales totalmente fraudulentas y se llevarán a cabo tres golpes de Estado, abortando innumerables intentos más, dos gobiernos sólo serán aceptados porque



Bolivia

oficialmente son "provisionales".

Más allá de esta descomposición de las formaciones políticas burguesas, y de la impotencia caricaturesca de los sucesivos parlamentarios, con la parálisis de una parte del aparato del Estado que ello provocó, hay dos factores nuevos, y el peligro de su combinación, que en este contexto alertaron a los sectores más importantes de la burguesía en Bolivia, Argentina, Brasil y, en definitiva, al imperialismo norteamericano:

- la profundización de las divisiones en el seno de las FF.AA.;
- el renacimiento y la reaparición en la escena política del movimiento obrero boliviano.

Divisiones en el seno de las FF.AA.

Las divisiones en el seno de las FF.AA. no eran un hecho totalmente nuevo en Bolivia.

Su intervención directa y casi permanente en la vida política —especialmente a causa de la carencia de base, de la incoherencia de los partidos burgueses atomizados e incapacitados para jugar su papel en la estabilización del sistema de dominación— no ha cesado de engendrar conflictos y diferenciaciones de la jerarquía militar. Conflictos nacidos de los problemas —muy concretos— de reparto de los "beneficios" y prebendas vinculados a la administración cotidiana de los negocios de la burguesía y su Estado.

Diferenciaciones que reflejan, sobre todo, intereses sectoriales en el seno de la clase dominante y que, por otra parte, se expresan en el cuadro de sus organizaciones políticas. Pero este estado de cosas, limitado a los niveles superiores de la jerarquía militar, siempre se mantuvo bajo control.

Pero el peligro real para el orden establecido es que, en caso de una intensa polarización de los conflictos de clase en el país, su reflejo en el seno de la institución militar —en su conjunto esta vez— sea mucho mayor, como se puso de manifiesto durante el periodo prerrevolucionario de 1970-1971.

Es cierto que en ningún momento con posterioridad a la caída de Banzer y hasta el golpe de Estado del 17 de julio pasado, se ha desarrollado —siquiera embrionariamente— una situación parecida en el seno de las FF.AA.

Pero la descomposición acelerada de los aparatos políticos burgueses, combinada con el agravamiento de la crisis económica, acentuó las divisiones, la multiplicación de clanes y camarillas entre la alta oficialidad.

Cada grupo, cada sector político, no contaba, en su descomposición e incapacidad, más que con sus propias fuerzas, su propia banda dentro de la oficialidad, para tratar de influir en el curso de los acontecimientos.

Esta situación se manifestó en toda su amplitud con el golpe de Estado del coronel Natusch, el 1º de noviembre de 1979, y su efímera pero sangrienta dictadura, derribada

el 16 del mismo mes.

Natusch lanzó esta operación sin el aval de una buena parte de sus pares, que la consideraban prematura y mal preparada; pero sí en estrecha unión con los políticos próximos al antiguo presidente Víctor Paz Estenssoro, hoy dirigente de la fracción más conservadora del MNR, la **Alianza del MNR**, con quien por otra parte están unidos... los maoístas del PCML.

El renacer del movimiento obrero

Además de la profundización de las divisiones en el seno de la alta jerarquía militar y de los riesgos que ello implica para la cohesión de la institución, hay que integrar en el análisis un elemento fundamental, nuevo en cuanto a su amplitud, descubierto involuntariamente por el coronel Natusch: el renacer, la reaparición en la escena política del movimiento obrero y de las masas explotadas. Elemento que no entra en los planes de los partidarios —bolivianos e imperialistas— de la tímida y limitada apertura democrática, ya que apostaban, por el contrario, a una relativa pasividad de las masas tras la dictadura de Banzer.

La multiplicación de las luchas reivindicativas y democráticas durante 1978, la preparación, después de la realización, en mayo de 1979, del Congreso de la COB (Central Obrera Boliviana), de la huelga general que esta última desencadenó en octubre de 1979 contra el fraude generalizado en las elecciones de julio, habían jalonado, con fuerza creciente, la reaparición del movimiento obrero boliviano en la escena política después de la acumulación de derrotas que habían significado los años negro del "banzerismo".

En la réplica al golpe de Estado de Natusch, los trabajadores y las masas bolivianas harán la verdadera demostración de que habían recuperado sus fuerzas.

Pese a la ocupación militar de las principales ciudades del país, en especial La Paz, y el estado de sitio, los partidarios de Natusch deben hacer frente a una verdadera insurrección popular de masas. Tras la Central Obrera Boliviana, masiva y espontáneamente se movilizaron los mineros, los trabajadores de las principales zonas industriales, los estudiantes y numerosos grupos de campesinos.

Tras duros enfrentamientos, que se saldaron con más de 300 muertos, 200 desaparecidos y 400 heridos, y abandonado por los demás sectores de las FF.AA., seguros de que se trataba de una aventura prematura, Natusch debió retroceder y abandonar el poder.

El punto culminante de la crisis

La aventura de Natusch, por efímera que haya sido, es sin duda el momento clave de este caótico periodo, que finalizará con el

golpe de Estado del 17 de julio.

Expresión de las divisiones y la crisis en el seno de la jerarquía militar, será también su punto culminante. De vuelta a sus cuarteles, traumatizados en su conjunto —y a pesar de sus diferencias— por el fracaso al hacer frente a la movilización popular y sus consecuencias potenciales, los militares van a dedicarse, no sin dificultades, a reconstituir su unidad, fijando al mismo tiempo estrechos límites a la acción de la presidenta provisional, nombrada después del 16 de noviembre, Lidia Gueiler.

En el centro de esta operación ya se encuentra el general García Meza que, en un primer momento, obligará a la presidenta Gueiler a nombrar a los generales Rubén Rocha y Armando Reyes —que habían apoyado a Natusch— al frente del ejército; luego se impondría él mismo en ese cargo.

Expresión de la radicalización, del grado y capacidad de movilización de los trabajadores bolivianos, la respuesta al golpe de Estado de Natusch será a su vez el punto culminante de este ascenso de masas.

No cabe duda que esta victoria será sentida y comprendida como tal por los trabajadores bolivianos, abriendo inmediatamente una nueva etapa en la radicalización de importantes sectores de las masas oprimidas, reforzando a la COB y estimulando la voluntad unitaria de numerosos sectores, que se concreta a nivel campesino en el desarrollo de la Confederación Unica de Campesinos de Bolivia, con la participación de la mayoría de las asociaciones y partidos campesinos. Su integración en la COB da una nueva dimensión a la alianza obrero-campesina.

Esta victoria, debe agregarse, crea también peligrosas ilusiones en torno a la correlación de fuerzas real en el país. La movilización, los combates callejeros, han hecho retroceder a un sector aventurerista —y coyunturalmente aislado— de las Fuerzas Armadas. Es una experiencia esencial realizada por las masas, pero no una victoria sobre el ejército y las clases dominantes en su conjunto, como muchos, en el seno de la izquierda, creyeron.

Maniobras electorales: división y colaboración de clases

Muy rápidamente, entonces, van a comenzar las maniobras políticas en la perspectiva de las elecciones de junio de 1980, maniobras que serán, por otra parte, trabas para nuevos ascensos de la movilización obrera y popular.

El PCB (Partido Comunista Boliviano) y el MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, formación socialdemócrata ligada a la Internacional Socialista), principales organizaciones obreras reformistas, cuyas direcciones se han destacado por su pasividad durante las movilizaciones contra Natusch, consideran que deben ser ellos el punto de partida de un reagrupamiento de fuerzas para la campaña electoral. Campaña que harán en coalición en el seno de la UDP (Unión Demo-

crática Popular), con uno de los partidos burgueses más importantes, el MNRI (Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierdas) de Siles Suazo, evidentemente ajeno a la insurrección popular de noviembre de 1979.

Esta orientación no es nueva para estas dos organizaciones. En un periodo crucial, y a pesar de la reciente experiencia sobre las potencialidades de una movilización independiente y unitaria de los trabajadores y de las masas explotadas, canalizará las energías y la fuerza de un sector muy importante del movimiento de masas, poniéndolas al servicio de una coalición donde el programa y los objetivos son los de una importante fracción de la burguesía boliviana y del imperialismo. El Departamento de Estado norteamericano, por intermedio de su embajada en La Paz, y la socialdemocracia alemana, en particular, apoyaron abiertamente, durante toda la campaña, política y materialmente, a la UDP y su candidato a la presidencia, Siles Suazo, a quien consideran el más apto, en el caos boliviano, para canalizar y contener el ascenso de masas.

Esta orientación provoca, también, una profunda división en el seno de un movimiento obrero que se había encontrado unido en la insurrección.

La COB, cuyo peso y prestigio se había reforzado considerablemente en base al papel dirigente asumido en la movilización contra Natusch, será la primera en sufrir las consecuencias.

Si durante los enfrentamientos de noviembre las direcciones del PCB y del MIR no habían hecho uso del importante peso que ejercen en el aparato y en los organismos

dirigentes de la central obrera, dando de hecho plena libertad a sus dirigentes sindicales, su actitud de cara a las elecciones será totalmente diferente.

Harán todo lo posible para oponerse a una candidatura de la COB o apoyada por la COB, que habría podido dar continuidad, en el plano electoral, a la reciente movilización independiente y unitaria de los trabajadores y de las masas.

Es en este marco que se lanza la candidatura de Juan Lechín, secretario general de la COB. Una parte de la base del sindicato, la mayoría de las organizaciones revolucionarias —entre ellos nuestros camaradas del **POR (Combate)**— apoyan su candidatura a la presidencia de la república en tanto candidato de la COB. Después de numerosas vacilaciones y negociaciones, Lechín decide presentarse, pero no en nombre de la COB —dirá—, a fin de “*preservar la unidad y la independencia del sindicato*”; en realidad, para no enfrentarse directamente a la orientación de las direcciones del PCB y el MIR.

Lechín es apoyado y presentado por una coalición que agrupa fundamentalmente a su propio partido, el PRIN, una pequeña formación compuesta por miembros del aparato sindical que le son incondicionales, y a varias organizaciones revolucionarias, entre las que están el **PRT (B)**, **VC del POR** y el **POR (Combate)**.

El impacto inicial de esta candidatura, recibida por los trabajadores ante todo como la candidatura del secretario general de la COB, llevará a nuevas presiones por parte del PCB y el MIR, y a una serie de confusas negociaciones —en lo esencial secretas— entre estos últimos y Lechín.

Finalmente, Lechín se retirará sin consultar a sus aliados (dejados sin alternativa debido a la cercanía del proceso electoral), para preservar su situación y su puesto en el seno del aparato sindical, que el PCB y el MIR pretendían incompatible con su candidatura.

Colaboración con una parte de la burguesía y sus aliados imperialistas, división, confusión, ausencia de una alternativa de clase. La contradicción entre el panorama electoral y el contenido y la significación de las movilizaciones de noviembre es total. El efecto desmovilizador y disgregador es considerable.

En las elecciones, los trabajadores no tendrán más opción que entre Siles Suazo y el Partido Socialista (Uno) de M. Quiroga Santa Cruz, una organización de programa radical pero no exento de confusiones, independiente de la burguesía pero todavía poco presente en el movimiento sindical y en las movilizaciones de los trabajadores.

Ante esta situación, y cuando sus esfuerzos por devolver la cohesión al ejército, combinados con sus preparativos de golpe de Estado, avanzaban rápidamente, el general García Meza podía declarar con total cinismo, pero con una cierta dosis de realismo, desde su punto de vista: “**Las Fuerzas Armadas respetarán los resultados de las elecciones del 29 de junio según el candidato que resulte vencedor**”.

II. LOS RESULTADOS ELECTORALES Y EL GOLPE DE ESTADO

A pesar de las presiones y las amenazas de los militares, y de la impune actividad de los grupos civiles de extrema derecha, las elecciones generales pudieron realizarse en la fecha señalada, el 29 de junio.

Las presiones internacionales, el número de los candidatos burgueses, la actitud de la presidente Gueiler y también la estrategia del Estado Mayor militar en torno a García Meza, preocupado ante todo por la preparación y la elección del momento oportuno para dar el golpe de Estado, son otros tantos elementos que contribuyeron a hacer de estas elecciones las menos fraudulentas desde hacía mucho tiempo.

Polarización

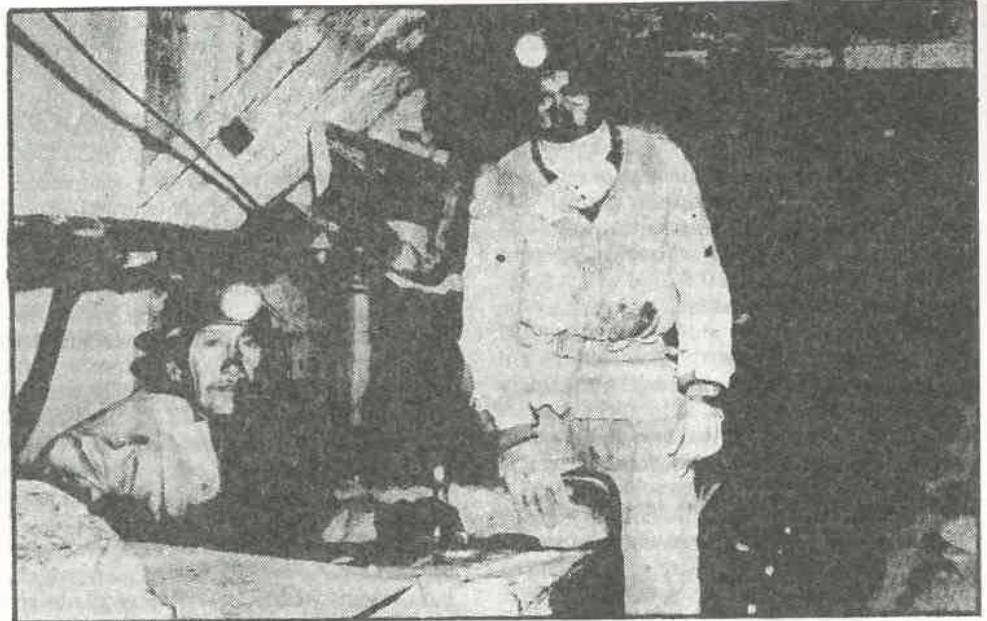
Aunque de manera parcial y deformada, los resultados electorales reflejan la polarización de clases y el peso creciente del movimiento obrero en la escena política nacional. La UDP y Siles Suazo, presentados por el PCB y el MIR como una alternativa obrera y reformista, realizaron una campaña demagógica nacionalista y populista, aunque manteniéndose siempre en un marco perfectamente aceptable por sus apoyos burgueses e imperialistas, recibiendo alrededor de un 40% de los votos, en su mayoría de obreros y



Huellas delatoras.



El general García Meza.



Los trabajadores son los que sufren las consecuencias de la dictadura.

campesinos.

El PS (Uno), que en las anteriores elecciones había obtenido resultados extremadamente modestos (del 2 al 3%), recibe esta vez más del 12% de los votos.

Este resultado, a pesar de las confusiones del PS (Uno), es la expresión del rechazo de la colaboración de clases, de la colaboración con la burguesía practicada en el seno de la UDP, por parte de los sectores más radicalizados y avanzados de los trabajadores. Es en las zonas obreras de La Paz y las principales zonas obreras del país, y también en ciertas zonas mineras, donde el PS (Uno) obtiene sus mejores resultados, superando en muchas ocasiones a la UDP.

Por sí solos, el PS (Uno) y la UDP son, de esta manera, mayoritarios en el cuerpo electoral.

A la derecha, la polarización también es evidente, traduciéndose en una importante pérdida de votos de Paz Estenssoro, candidato de la Alianza-MNR, en favor de la Alianza Democrática Nacionalista (ADN) de Banzer, el antiguo dictador. Este último recibe poco más del 20% de los votos. Sin hacer avances espectaculares en relación a las anteriores elecciones, donde el fraude había actuado masivamente en su favor, Banzer logra extender su influencia y consolidar las estructuras de la ADN, en adelante la principal fuerza política de la derecha.

Es un gran paso adelante en la realización de su proyecto, paralelo pero distinto al de García Meza. Sacando las lecciones de sus ocho años de dictadura —en particular, de la debilidad que constituye la ausencia de una base social políticamente organizada— y, al mismo tiempo, de la descomposición de la mayor parte de las formaciones políticas burguesas tradicionales, al mismo tiempo que mantenía estrechos lazos con numerosos militares, se había lanzado a la construcción de

ese “nuevo partido” que es la ADN.

Lugar de agrupamiento de los sectores más reaccionarios de la burguesía, los activistas de extrema derecha fascista o fascizante y numerosos oficiales fieles a su persona, la ADN, bajo el impulso de Banzer y en medio de una fuerte propaganda anticomunista y chovinista, ha tratado sistemáticamente de agrupar a un sector de la pequeña burguesía y a los sectores más atrasados del campesinado, víctimas de la crisis y asustados por el caos y el ascenso del movimiento obrero.

Todo esto con el objetivo de consolidar y organizar la base social potencial de una futura dictadura mitad civil, mitad militar, para cuya dirección se proponía en cada uno de sus discursos electorales.

Últimas concesiones

Dado que ninguno de los candidatos había obtenido la mayoría absoluta, correspondería al nuevo Parlamento —en el cual la correlación de fuerzas es prácticamente idéntica a los porcentajes de votos recibidos— elegir al futuro presidente. Siles, con el acuerdo del PCB y el MIR, había dado todas las garantías posibles, en las discusiones preliminares, a la derecha —en particular a Paz Estenssoro—, para asegurar su elección.

Estas garantías también estaban destinadas a los militares: ninguna nacionalización; plan para superar la crisis económica preparado conjuntamente con la patronal y el Fondo Monetario Internacional; gobierno donde, en todos los casos, los representantes del MIR y el PCB serían absoluta minoría y donde la designación de los ministros de Defensa e Interior —los militares— correspondería al Estado Mayor. El PCB hasta afirmaba no reivindicar ningún ministerio, ¡para facilitar un amplio acuerdo!.

Difícilmente se podía ir más lejos...

Pasadas las elecciones, Siles, seguro de su designación por el Parlamento, realiza una serie de concesiones que podían satisfacer a los militares más exigentes; por primera vez después de muchos meses, el riesgo de un golpe de Estado a corto plazo parecía alejarse. La vigilancia de las organizaciones obreras, sindicales y políticas, tendía a relajarse.

Es el momento elegido por García Meza para desencadenar el golpe de Estado. Un golpe evidentemente planificado durante mucho tiempo, sin improvisaciones y donde los errores cometidos por Natusch habían sido cuidadosamente evitados.

El objetivo: aplastar al movimiento obrero

La precisión y la brutalidad de las primeras declaraciones apenas dejan lugar a dudas: según García Meza, se trata de terminar por mucho tiempo con las tentativas de apertura política, “propicias al desorden, la inestabilidad y la subversión”.

Se trata de aplastar al movimiento obrero, liquidando a sus dirigentes y destruyendo sus organizaciones.

Es la escuela de Pinochet, un poco más tosca todavía; más brutal, si esto es posible.

Todo, durante el desarrollo del golpe y las primeras medidas gubernamentales, va a estar encaminado en ese sentido. Rápidamente se hizo arrestar —y si era necesario, asesinar— al máximo de dirigentes políticos y sindicales, antes de que comenzara cualquier tipo de resistencia organizada. Las operaciones en La Paz comenzaron cinco horas después de la sublevación de la guarnición de Trinidad, capturando en el asalto al local de la COB a un buen número de dirigentes de la central obrera —entre ellos, Juan Lechín—, y de los partidos de iz-

quiera —entre quienes se encontraba M. Quiroga Santa Cruz—, reunidos para discutir una respuesta al levantamiento de Trinidad.

Las primeras acciones, como el asalto al local de la COB, la toma del palacio presidencial y el arresto de todo el Consejo de Ministros, la ocupación de los estudios de radio y televisión, las redacciones de los periódicos, la central telefónica, son realizadas por comandos paramilitares vestidos de civil y circulando en ambulancias para no llamar la atención de la población y retrasar eventuales movilizaciones.

Cada ciudad es aislada del resto del país, comienzan los saqueos indiscriminados y, gracias a la tranquilidad existente, la búsqueda sistemática de todos los cuadros políticos y militantes conocidos por los servicios de inteligencia.

En algunos días, tanto en La Paz como en las provincias, varios miles de personas serán arrestadas, llevadas a estadios, torturadas o deportadas a la selva amazónica.

¿Cuántas de ellas han sido asesinadas impunemente, como M. Quiroga Santa Cruz, dirigente del PS (Uno)?.

Al mismo tiempo son prohibidos los partidos políticos, disueltos los sindicatos; la prensa, la radio y televisión quedan directamente bajo autoridad del Ejército; la Universidad es cerrada por periodo indefinido...

Todas estas medidas, el uso del terror, no lograrán impedir que el pueblo boliviano manifieste masivamente su oposición al golpe de Estado.

A pesar de los arrestos y las amenazas, el país quedará paralizado durante más de 48 horas, por una huelga casi general, masivamente secundada.

En los barrios populares de La Paz, Santa Cruz y otras ciudades más, las patrullas militares serán hostigadas durante varios días por grupos de francotiradores.

Las principales rutas de acceso serán cortadas por los campesinos movilizados.

En las zonas mineras, sobre todo, la resistencia será masiva, apoyada por el conjunto de la población. Fue necesario que interviniera la aviación para callar las radios de los mineros.

Prudentemente, el ejército cercará las zonas mineras para someter con el hambre a los huelguistas atrincherados y a sus familias. No pudiendo permitir, debido a la catastrófica situación económica de Bolivia, que la producción minera se mantenga paralizada durante mucho tiempo, el gobierno adoptará tácticas diferentes. En algunos casos habrá negociaciones para asegurar la vuelta al trabajo, en otros se masacrará, como en Caracoles, donde según los testimonios recibidos por **Amnesty International** habría habido 900 muertos y desaparecidos después de la intervención del ejército y la artillería, el 4 de octubre, 18 días después del golpe de Estado.

Pero las acciones frontales de resistencia, sin coordinación, cada vez más aisladas, no podían continuar, so pena de terminar en

actos suicidas.

En todas partes se ha vuelto al trabajo, pero en las minas la producción, sin los ingenieros extranjeros, ha bajado en un 60%.

Las formas de resistencia de este tipo se desarrollan en la perspectiva de una lucha a largo plazo; en los muros aparecen inscripciones hostiles al régimen; circulan las primeras publicaciones clandestinas. Siles Suazo, finalmente, apoyándose en la legitimidad de las urnas, ha constituido un "gobierno legal" en la clandestinidad, lo que molesta considerablemente a la dictadura en el plano internacional.

Resistencia de los trabajadores y aislamiento internacional

A dos meses del golpe puede hacerse un primer balance de la situación.

Si bien los militares controlan el país, su régimen no dispone por el momento de una base social significativa y organizada.

Sin embargo, esto es un elemento que deberá matizarse si, como permiten pensar muchas informaciones coincidentes, Banzer y la ADN decidieran finalmente —bajo la presión de Argentina y Brasil— apoyar al nuevo régimen y participar en el gobierno.

Si se han abstenido de hacerlo hasta el momento se debe a que el golpe de Estado contraría sus propios proyectos.

Una decisión de este tipo reforzaría, además, a la Junta en las próximas discusiones sobre la renegociación de la deuda externa.

Si bien, a pesar de los sabotajes y del descenso de la producción en las minas, la actividad es normal, la dictadura, en cambio, no ha podido alcanzar por el momento su principal objetivo: aplastar, destruir al movimiento obrero.

A pesar de las traiciones y de las divisiones, evidentes durante la campaña electoral, a pesar del arresto y la desaparición de un gran número de cuadros y dirigentes, los golpistas han subestimado, una vez más, las tradiciones de lucha y organización, la combatividad y el coraje de los trabajadores bolivianos y de su vanguardia, los mineros.

Estas tradiciones, combinadas con las lecciones extraídas del ascenso de las luchas en los dos últimos años, no han podido ser aniquiladas por los golpistas, cuya táctica ha sido de "golpear duro y fuerte", muy rápidamente.

Tener que negociar la vuelta al trabajo en un número importante de minas, renunciando en lo inmediato a su militarización completa, es el símbolo mismo del retroceso de los militares en relación a sus objetivos iniciales.

Actualmente es un importante síntoma de debilidad por parte de la dictadura, que se combina con otros dos factores, también amenazantes en lo inmediato. Ante todo, la situación en el interior del ejército, donde actualmente pueden notarse signos de oposición.

Durante los combates en las regiones mineras se produjeron desertiones de soldados, y la Junta ha reconocido recientemente las dificultades para enrolar a nuevos reclutas en el marco de un plan de aumento de los efectivos. En un país donde más del 50% de la población potencialmente activa está sin empleo, es una extraordinaria confesión de su aislamiento.

Las más duras acciones represivas continúan llevándose a cabo sistemáticamente por medio de grupos paramilitares, compuestos por oficiales de paisano, y por activistas de la Falange Boliviana, un grupo de ideología fascista y de lumpenes ligados al tráfico de la droga; está confirmado que muchas unidades han rechazado actuar con estos grupos.

Asistimos a numerosos cambios en el cuerpo de oficiales, estrechamente controlado por los especialistas de los Servicios de Inteligencia argentinos. El coronel Mario Vargas, comandante de la guarnición de Cochabamba, y el general Hugo Echeverría, comandante de los Blindados de Santa Cruz, al tiempo que declaran respetar la disciplina jerárquica, han anunciado que no apoyan al gobierno, en el que no participa, además, ningún oficial de la guarnición de La Paz.

Si bien el general García Meza había logrado asegurarse sólidamente el control del aparato militar entre el golpe frustrado de Natusch y el 17 de julio, no ha podido suprimir todos los efectos de la división anterior. La situación actual de las Fuerzas Armadas refleja, en parte, estas contradicciones, pero es también el producto de los métodos toscos y expeditivos de la mayoría de los miembros del gobierno, particularmente de su ministro del Interior, el coronel Arce, con lazos demasiado conocidos y evidentes, para numerosos oficiales, con el tráfico de droga y la mafia, causa de descrédito suplementario a nivel internacional.

Llegamos ahora a la otra debilidad del régimen, la más seria en este momento: su aislamiento internacional.

Si bien se ha sostenido políticamente, ayudado económica y financieramente por las dictaduras vecinas, en primer lugar por Argentina —una ayuda esencial sobre la que volveremos más adelante—, el régimen ha sido condenado unánimemente, de una u otra forma, por la mayoría de los países latinoamericanos y la totalidad de las potencias imperialistas.

La OEA (Organización de Estados Americanos), a iniciativa de los países del Pacto Andino, México y también Estados Unidos, ha expresado una condena muy firme de los métodos del nuevo régimen. Sólo Chile y Paraguay se han opuesto, mientras Brasil y Argentina... preferían abstenerse, a pesar que en buena parte esos métodos sean los de los oficiales y "especialistas" argentinos presentes en La Paz.

Incluso si esta abstención es ante todo una cobertura de sus acciones en Bolivia —durante y después del golpe—, refleja con claridad

Bolivia

el grado de aislamiento del régimen.

Los efectos económicos de esta situación son catastróficos; la supresión —al menos temporal— de toda ayuda gubernamental por parte de Estados Unidos y la casi totalidad de los países europeos tiene efectos inmediatos en un país al borde de la bancarrota, con un importe de la deuda exterior que excedería actualmente al del Producto Nacional Bruto y que, precisamente, debe renegociar con toda urgencia el conjunto de su deuda para evitar una asfixia total.

A este nivel, ni Argentina ni Brasil están en condiciones de volver a poner a flote, por sí solas, la economía boliviana.

La combinación del desarrollo en el interior del país de una resistencia obrera, que aunque débil y embrionaria, es real, con el aislamiento internacional, abre grandes posibilidades de acción y de impacto político —en la propia Bolivia— a las indispensables campañas de solidaridad del movimiento obrero internacional con el pueblo boliviano.

Al igual que la solidaridad con la revolución nicaragüense y los combatientes salvadoreños, la solidaridad con los trabajadores bolivianos debe ser, ahora, el centro de todas las acciones de apoyo a la lucha de los pueblos latinoamericanos. Tanto el carácter y la significación como las implicaciones del golpe de Estado, le confieren a éste una dimensión internacional.

III. LA DIMENSION INTERNACIONAL DEL GOLPE DE ESTADO

En primer lugar, esta dimensión está dada por la participación directa —y a todas luces decisiva— que han tenido los militares argentinos.

Una participación de esta amplitud, política y técnica, largamente planificada y a la que son ajenos los Estados Unidos, es un hecho político nuevo e importante en América Latina, que deberá ser analizado con cautela, pero del que pueden extraerse ya los principales aspectos e implicaciones.

Según el diario *Folha do Sao Paulo*, desde el mes de mayo algunos oficiales superiores del Estado Mayor brasileño, en visita a la Argentina, han estado informados del plan de golpe de Estado en La Paz. Estos oficiales habrían interpretado los comentarios de sus colegas argentinos, siempre según la *Folha de Sao Paulo*, como un medio de tantear la actitud del gobierno brasileño.

Más tarde, pero antes de las elecciones del 29 de junio, los miembros de un grupo teatral cubano fueron detenidos en La Paz junto a otros artistas bolivianos. Varios de ellos afirman que entre los policías de paisano que les interrogaron, algunos tenían un fuerte acento argentino.

Numerosas personas —entre ellos extranjeros— arrestadas en diferentes sitios después del golpe y luego liberados, afirman lo mismo.

Los raros testigos del asalto al local de la COB que hoy están en libertad y se animan a hablar, entre ellos una periodista que se encontraba en el interior y logró escapar, afirman: el grupo de asalto, compuesto por civiles, estaba dirigido por dos o tres argentinos, fácilmente reconocibles por su acento.

En las horas que siguieron al golpe, la televisión boliviana difundió programas argentinos grotescamente anticomunistas, traídos con anterioridad, y que seguramente ya han sido utilizados en el pasado por los militares de Buenos Aires para animar a la población a “cooperar con las acciones antiterroristas”.

Se podrían poner más ejemplos, todos comprobados. Por otra parte, informaciones coincidentes provenientes de oficiales superiores peruanos y ecuatorianos, recogidas por muchos periódicos latinoamericanos, hablan de 200 especialistas en lucha antisubversiva “prestados” por Videla al nuevo régimen boliviano.

La utilización sistemática de grupos paramilitares vestidos de paisano es una táctica particular de los militares argentinos desde hace muchos años.

Más que el reconocimiento diplomático inmediato, la rápida e importante ayuda prestada al nuevo régimen es otra prueba de su implicación directa.

Recordemos que al día siguiente del golpe de Estado, García Meza anunciaba que Buenos Aires había prometido un préstamo de urgencia de 50 millones de dólares en caso de una suspensión temporal de los créditos por parte de otros países.

A finales de octubre se anunció un préstamo de 200 millones de dólares, así como una importante donación de trigo que no estaba prevista en los planes de intercambio entre los dos países.

Los motivos económicos esgrimidos para explicar la intervención son poco convincentes. Argentina tiene ciertos intereses en Bolivia, pero en absoluto estaban amenazados por la llegada al poder de Siles Suazo. Las relaciones comerciales entre Bolivia y Argentina son importantes, sobre todo para Bolivia, que tiene en Argentina a su principal comprador latinoamericano (235 millones de dólares en 1978), delante de Brasil (100 millones de dólares, también en 1978) y Perú (25 millones de dólares, igualmente en 1978).

Ahora bien, el único problema potencial serio entre los dos países concernía a la renegociación de las tarifas de gas natural, que Bolivia vende a Argentina muy por debajo de las tarifas mundiales. La UDP preveía la duplicación del precio del gas, pero ésta no puede ser, evidentemente, una justificación del papel jugado en el golpe de Estado.

En cuanto a la hipótesis según la cual se trataría de un nuevo aspecto de la vieja lucha de influencias en la región entre Brasil y Argentina, es rechazable por varias razones: desde los lazos estrechos existentes entre militares bolivianos y brasileños, que se remontan a la época de Banzer, hasta lo

informes dados por los mismos oficiales argentinos a sus colegas brasileños sobre la preparación de un golpe de Estado.

Pero sobre todo, esta hipótesis no tiene en cuenta el reciente acercamiento entre las dos dictaduras, el desarrollo de su cooperación a todos los niveles, en particular el de la pretendida “seguridad continental”, y la voluntad de crear en un cierto plazo un verdadero eje político que seguramente cambiaría la correlación de fuerzas en la región.

Hacer frente a las políticas de “apertura democrática”

Los motivos de los militares argentinos para intervenir como lo han hecho son únicamente políticos y rebasan claramente el estricto marco boliviano; responden fundamentalmente a las mismas preocupaciones y a los mismos objetivos que el acercamiento con Brasilia.

Se trata de ayudar a poner fin a una situación que, potencialmente, podía ser peligrosa para su propio régimen. Y en especial, de detener la política de las, a pesar de todo tímidas, “aperturas democráticas”, la política de “institucionalización” según el vocabulario en vigor en estos países.

Más allá de las divergencias secundarias, de los conflictos bilaterales mantenidos ante todo por razones de política interior, como el de Argentina y Chile a propósito del canal de Beagle, los militares argentinos, brasileños y chilenos hacen el mismo análisis de la situación latinoamericana.

Desde hace al menos un año, fundamentalmente desde la victoria de la revolución nicaragüense, en los editoriales de las publicaciones oficiosas de los Estados Mayores o en estudios publicados por institutos que trabajan en relación con las escuelas de guerra, se tratan temas sobre la situación regional e internacional, siendo convergentes las conclusiones generales:

- Hay una “inestabilidad creciente” en numerosos países y globalmente a nivel continental.
- Es una situación que “favorece el desarrollo de las organizaciones subversivas y la extensión de su actividad”; Nicaragua y América Central están en el centro de sus preocupaciones.
- Hay en el continente una tendencia creciente a la interdependencia entre las diferentes situaciones nacionales; de ahí las tentativas de extender el concepto de “seguridad nacional”, con el que los militares tratan desde hace mucho tiempo de dar una seudojustificación ideológica a su política represiva, a la “seguridad regional” o “seguridad continental”.
- Hay una pérdida de influencia e iniciativa política por parte de los Estados Unidos en la región.
- La táctica dominante de la Administración Carter, en relación con la influencia

creciente de los gobiernos europeos, lleva a favorecer y apoyar la política de los llamados procesos de "democratización". Es una táctica "absolutamente errónea" y "peligrosa", y es "uno de los factores de inestabilidad creciente y que ayuda a la extensión de la actividad subversiva".

En otras palabras, hay que frenar esta política de "aperturas democráticas", de "institucionalización", porque es un factor de inestabilidad en la región y, puesto que existe una interdependencia creciente, es una amenaza directa.

Este es exactamente el marco político y la justificación de la participación en el golpe de Estado boliviano.

En un editorial titulado "*Las lecciones de Bolivia*", un periodista argentino, conocido por expresar las posiciones del gobierno, escribía algunos días después del golpe de Estado: "*Las elecciones en este país habían sido artificialmente prematuras, y las nociones de democracia impuestas desde Washington no pueden ser exportadas a América Latina, particularmente a una nación que carece de protección contra la amenaza marxista, la infiltración y la subversión*".

Esta divergencia táctica está estrechamente ligada a la naturaleza, la justificación y la supervivencia de estas dictaduras, productos de la dominación imperialista. Pero, además, se nutre de la contradicción objetiva de esta política del imperialismo y sectores importantes de la burguesía latinoamericana, contradicción revelada con mucha claridad en la modesta tentativa de apertura democrática en Bolivia.

Las tentativas de "democratización", de "institucionalización", han sido impulsadas para remediar el descrédito y el peligroso desgaste de las dictaduras latinoamericanas, como era el caso de Ecuador, Perú y Bolivia.

Se trata de crear las condiciones que permitan recambios políticos que garanticen

a la burguesía y al imperialismo el mantenimiento y la estabilidad de su dominación. Pero estas tentativas, por su naturaleza, son acompañadas necesariamente por una reanimación, un relanzamiento del movimiento de masas. El carácter explosivo de las contradicciones sociales en América latina, todavía más acentuado por los efectos de la crisis internacional, hace difícil, sino imposible, mantener esta reanimación dentro de los límites deseados.

Todo contexto de apertura, aunque sea limitado, permite a los trabajadores, a los sectores más explotados, movilizarse, reorganizarse, reforzarse. La fuerza y el ritmo de este proceso dependen inevitablemente de factores tales como las tradiciones de lucha y de organización o el peso de las derrotas anteriores.

Al mismo tiempo, el plan económico, las condiciones de explotación imperialista, el pasivo generalmente desastroso del régimen precedente (dictadura en crisis) y, desde hace muchos años, los efectos de la crisis internacional, no permiten desarrollar una política de concesiones que satisfagan al menos las necesidades más elementales de las masas.

Por el contrario, la situación exige muy rápidamente las llamadas medidas de austeridad; en otros términos, la acentuación de la superexplotación y el paro que pueden conducir, si el movimiento obrero se moviliza y fortalece, a conflictos duros, verdaderas explosiones.

Colaborando poderosamente, y sin duda de modo decisivo, en el éxito del golpe de Estado de García Meza, los militares argentinos, en nombre de sus colegas en la región, han puesto en evidencia las contradicciones y el impasse de la táctica actual del imperialismo y sus aliados. Haciéndola fracasar en Bolivia, ahora esperan que su aplicación se ponga en cuestión en todo el continente (y especialmente en sus propios países).

Es en esta perspectiva, por otra parte, que

tienen muchas esperanzas en una victoria de Reagan en las próximas elecciones norteamericanas.

¿Cuáles serán los efectos de esta política ofensiva, que no carece evidentemente de apoyos o simpatías en los Estados Unidos?.

¿Prefigurará —independientemente del resultado de las elecciones norteamericanas— un nuevo curso táctico del imperialismo que, en un cierto plazo, podría tomar el eje Buenos Aires-Brasilia como punta de lanza?.

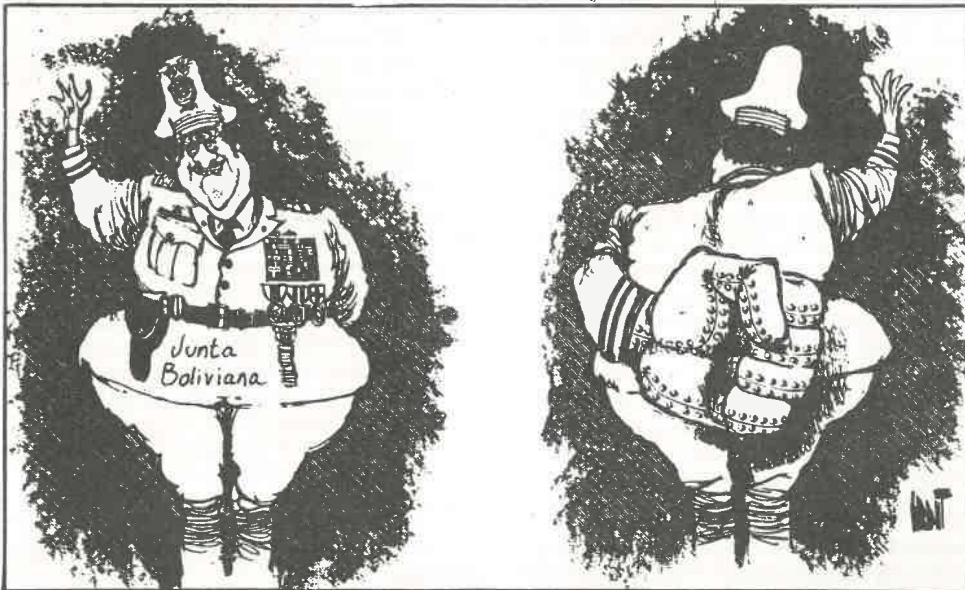
El precedente de la participación directa, autónoma y amplia en un golpe de Estado en otro país del continente, como ha hecho el ejército argentino, ¿podría ser retomado en el futuro, en otros contextos?. Con el acuerdo y el apoyo del imperialismo, por ejemplo...

Estos son algunos de los interrogantes que plantea, a nivel latinoamericano, el golpe de Estado de La Paz; cuestiones de actualidad cuando, a pesar de las desigualdades, el desarrollo de las movilizaciones obreras y, en general, la reaparición de luchas, prosiguen a escala del continente; cuando se profundiza el curso de la revolución nicaragüense, los enfrentamientos cobran una nueva dimensión en El Salvador y, en Perú, por ejemplo, prototipo de un "proceso de institucionalización", Belaúnde Terry está enfrentado a una ola de luchas reivindicativas de una amplitud imprevista.

En buena medida, la respuesta a estos interrogantes estará en función del desarrollo de la situación boliviana, de la capacidad del proletariado y el conjunto de las masas explotadas para organizarse, movilizarse e impedir que García Meza pueda realizar sus siniestros objetivos.

Nuestra solidaridad debe estar a la altura de este difícil combate. □

17-9-80.



Nuevo avance de la revolución.



Durante los trece meses transcurridos desde el derrocamiento insurreccional de Somoza, el proceso revolucionario se ha profundizado en Nicaragua.

Entre Abril y Agosto de 1980, nuevas dificultades importantes han sido vencidas. El conjunto de las medidas económicas y sociales adoptadas por el FSLN, su voluntad de no transigir frente a las exigencias de la burguesía en cuestiones políticas de fundamental importancia (como la composición del Consejo de Estado y, con mayor razón, la organización de elecciones), la consolidación de su hegemonía en el ejercicio del poder político: todo ello traduce el avance de la revolución.

No obstante, la situación específica de dualidad de poder creada en julio de 1979, no ha sido aún resuelta. Pero su desenlace se aproxima. La prueba decisiva de fuerzas con la burguesía se está perfilando, en un contexto marcado por la extensión de la guerra civil en El Salvador y por la determinación del imperialismo USA de romper el ascenso revolucionario en América central.

1. La lucha armada dirigida por el FSLN, la huelga general y, finalmente, la insurrección popular —con el desarrollo de los Comités de Defensa Civil (CDC)— produjeron una situación específica de dualidad de poder. Como en toda situación de dualidad de poder, no existe desde el principio una distribución en partes iguales de la autoridad: las relaciones de fuerzas entre las

clases y los mismos resultados del combate contra la dictadura concentran, desde julio del 79, los instrumentos de coerción del aparato de Estado, el nuevo Ejército (EPS) y la nueva policía, en las manos del FSLN, que inmediatamente aparta a los consejeros y policías panameños e impulsa la formación de milicias. Desde esta posición de fuerza, el FSLN aborda la fase de “reconstrucción nacional”.

La exclusión de las fuerzas burguesas de toda influencia sobre el aparato de represión estatal y su debilidad en el terreno institucional y político, expresan la particularidad de este reparto muy desigual de la autoridad. Esta situación se refleja dentro del gobierno de coalición, instalado el 19 de julio del 79.

Sin embargo, la burguesía, organizada en el COSEP y sus diversas asociaciones profesionales, detenta una serie de posiciones, que se manifiestan en el terreno del poder político: mantiene una presencia significativa en sectores del aparato de Estado (administración, aparato judicial, ministerios) y una representación efectiva dentro de la Junta de reconstrucción nacional (Robelo y Chamorro); dispone de bases económicas importantes, dado el alcance relativamente limitado de las medidas de expropiación de Somoza y sus aliados, respecto al conjunto de la economía del país.

Aunque dispone de pocas cartas, la burguesía antisomocista trata de utilizar sus puestos en el aparato de Estado y en el gobierno, así como su participación en la lucha

contra Somoza, para alzarse, con la ayuda de la alta jerarquía católica y del periódico “La Prensa”, hasta una posición de fuerza equivalente a la del FSLN. Intenta utilizar su control de amplios sectores de la economía (80% de la industria y 75% de la agricultura) para asegurar la supremacía de la economía de mercado y para obtener concesiones políticas e institucionales. Para ello, cuenta con el apoyo del imperialismo y de las burguesías latinoamericanas.

El propio FSLN declara a finales del septiembre del 79: “*de hecho, el sector financiero y económico del Estado —excepto la ejecución de la reforma agraria— está en manos de la burguesía...*”.

La respuesta del FSLN a las diferentes fases de la batalla de clases va a reducir más aún las bases de apoyo de la burguesía en el plano interior.

2. Durante el otoño del 79, el FSLN completa las primeras medidas de expropiación del sector somocista. Crea el IRENA (Instituto de Recursos Naturales); nacionaliza, a continuación de la banca, el sistema de seguros y reaseguros (lo cual otorga al Estado un más amplio control sobre el sector financiero); nacionaliza las industrias mineras e integra, por el decreto de 3.XI.79, al conjunto de las empresas encargadas de la exportación y la distribución en el mercado interior de los productos clave para los intercambios comerciales (algodón, café, azúcar, carne, productos del mar, alimentos básicos, fertilizantes y productos agro-químicos, bananas, petróleo).

Paralelamente, tras de la dimisión del gobierno a principios de Diciembre, el FSLN refuerza su control directo sobre los ministerios centrales, con el nombramiento de Humberto Ortega como Ministro de Defensa y de Edén Pastora como vice-ministro encargado de la constitución de milicias, de Henry Ruiz como Ministro de Planificación y de Jaime Wheelock al frente del MIDA, ministerio encargado de centralizar los sectores de producción y transformación de los productos agrícolas. A la vez, se mantiene el esfuerzo constante de movilización y organización de las masas, entre los trabajadores agrícolas y los campesinos pobres, la clase obrera, la juventud y las mujeres.

El conjunto de estas decisiones traducen la voluntad del FSLN de desarrollar los embriones del nuevo poder, aparecidos con la insurrección popular (los CDS, el EPS, las milicias) y de ampliar su control sobre los elementos del aparato de Estado desarticulado.

3. Con el fin de intentar asociar a la burguesía antisomocista a la tarea de "reconstrucción nacional" y para obtener créditos de las instituciones financieras internacionales y de los gobiernos imperialistas, el FSLN da concesiones efectivas a los industriales y los propietarios: reconocimiento explícito del papel del sector privado dentro del "plan de reactivación económica", créditos a las empresas privadas, unificación de la tasa de cambio, venta de divisas, acuerdos con empresas sobre el precio de compra de los productos y sobre el crecimiento de los salarios... A finales del 79 y principios del 80, el FSLN realiza una campaña sobre el tema de la "unidad nacional". Pero las contradicciones que maduran desde los primeros meses del 80, precipitan los acontecimientos.

a. Impulsados por su victoria contra Somoza, los obreros agrícolas y los campesinos pobres desarrollan desde principios de año, movilizaciones contra las operaciones de sabotaje de la patronal y los grandes propietarios, por la extensión del control estatal sobre la industria, por el aumento de los salarios y la mejora de las condiciones de trabajo, por el pleno ejercicio de los derechos sindicales, por la confiscación de las tierras no cultivadas y la profundización de la reforma agraria. El deseo de aumentar los salarios directos responde a la caída del salario real en 1978-79 y a la inflación de los últimos meses, y está impulsado porque los trabajadores sienten su propia fuerza y porque la difusión del salario social es demasiado lenta para frenar las reivindicaciones salariales.

b. El contrabando capitalista hacia Costa Rica y Honduras, las operaciones de sobre-facturación de las importaciones y subfacturación de las exportaciones se multiplican. El volumen de las importaciones es difícilmente controlable. Estas actividades se facilitan por las estrechas relaciones que unen a las organi-

zaciones profesionales patronales nicaragüenses, con sus asociados del Mercado Común Centroamericano.

La falta efectiva de oferta de productos de consumo, en particular de productos agrícolas y manufacturados, crea un terreno favorable a los mercados paralelos, a la especulación y, además, impulsa la inflación. Las importaciones necesarias para contrarrestar estas tendencias, acentúan los desequilibrios de la balanza de pagos. El control de precios sufre "serias dificultades... El Estado no controla un segmento dominante de la distribución, por tanto no puede distribuir racionalmente la oferta de bienes básicos. De esta manera, las leyes del mercado no sólo fijan precios que favorecen al intermediario, en vez que al productor, sino que también restablecen canales de distribución orientados hacia las capas sociales con ingresos superiores... Por otra parte, los mecanismos populares de control del abastecimiento, en los que los CDS debían tener un papel central, no se han desarrollado" (ministerio de Planificación, 16.5.80. "Balance del primer trimestre del Plan").

c. Los sectores importantes de la economía, en manos de los capitalistas y los propietarios, a pesar de disponer de créditos no responden a las exigencias del Plan: "La información que se posee sobre el sector privado es poca. Se considera que su inversión con fondos propios será mínima, con lo que no se alcanzará la estimación de 470 millones de córdobas originalmente planeada" (ibidem). La subutilización de las capacidades productivas es importante: en el primer trimestre del 80 se estima en un 77% en la construcción privada (que depende de la Cámara nicaragüense de la construcción). Los efectos sobre la exportación y sobre el desarrollo del empleo de este estancamiento de las inversiones, son necesariamente negativos.

d. A pesar de las medidas adoptadas en el 79, la dirección del desarrollo económico continúa débilmente dominada, a consecuencia del peso predominante de la propiedad privada, del control aún insuficiente del conjunto del aparato de Estado y de las contradicciones inherentes a un proyecto de "economía mixta". Entre las insuficiencias de la política económica manifestadas por el ministerio de Plan, hay que señalar las siguientes: "Una sobrevaloración de la capacidad del Estado: se partió considerando la existencia de una suficiente dirección económica central, especialmente sobre el sistema financiero...", mientras que "el Estado se ha visto dominado en los hechos, por una política cortoplacista que busca expandir en general todas las esferas de la economía, intentando satisfacer a todas las clases y grupos sociales, sin reconocer límites y contradicciones..." (ibidem).

4. durante el primer semestre de este año, las tensiones engendradas por las exigencias

de las masas y las contradicciones económicas van a acentuarse. La dirección del FSLN responde a esta situación con nuevas iniciativas, y no con un repliegue económico y político.

a. En Febrero se exponen las grandes líneas de la organización de las milicias populares.

b. En Marzo, se adoptan decretos que permiten sancionar a comerciantes, industriales y propietarios agrarios, para hacer fracasar las operaciones de fuga de capitales y de sabotajes de todo tipo. Se desarrolla una campaña para que los trabajadores se opongan a los sabotajes y tomen medidas de control obrero. El FSLN impulsa el control popular de precios contra la especulación.

c. A finales de Marzo se emprende una gran campaña de alfabetización, que durará cinco meses, y constituye, no solamente un factor excepcional de politización y de organización de decenas de millares de jóvenes alfabetizadores, sino también y sobre todo, un instrumento para consolidar la influencia del FSLN entre amplias capas de trabajadores agrícolas y campesinos pobres, fortaleciendo así el dispositivo de la movilización popular.

d. Son reconocidas las ocupaciones de tierras por los campesinos pobres y los trabajadores agrícolas. Se fija un máximo para el alquiler de la tierra, en el sector del algodón y de cereales. Se realiza un gran esfuerzo para ampliar la organización de los campesinos pobres y el proletariado agrícola (cooperativas, ampliación de la ATC).

e. Después del asesinato de Oscar Romero, el FSLN denuncia violentamente a la Junta Militar de El Salvador y refuerza más aún la solidaridad con las organizaciones miembros de la Coordinadora Revolucionaria.

f. Se reafirma con fuerza la alianza con el Estado obrero cubano. Delegaciones del FSLN viajan a la URSS y a las "democracias populares". En un contexto en el que el ascenso revolucionario en América Central y en el Caribe, está agravando la tensión entre Cuba y el imperialismo, la evolución de la política exterior sandinista constituye un nuevo factor de conflicto entre la burguesía y el FSLN.

5. El conjunto de estas medidas suscita vivas reacciones en el seno de la burguesía, que ve encogerse progresivamente su terreno de acuerdo con el FSLN. Ante ello, exige que sean reglamentadas las relaciones entre trabajadores y patronos y que se ponga fin a toda incursión en los dominios de la propiedad privada. A la vez, denuncia las crecientes prerrogativas de los CDS, estrechamente ligados al FSLN, "que contradice completamente la existencia de un

Nicaragua

Estado de Derecho y acostumbra a la ciudadanía a ventilar sus asuntos fuera de los canales institucionales normales que la Ley sanciona y protege (documento del COSEP).

La burguesía tensa sus fuerzas para relanzar su principal formación política, el MDN, dirigido por un miembro de la Junta, Alfonso Robelo. Trata de estrechar sus relaciones con la pequeña y media burguesía, en particular en los sectores comercial y agrario. Intenta sacar partido de sus relaciones con el imperialismo y las burguesías latinoamericanas, para lograr que los préstamos financieros constituyan un elemento de consolidación del sector privado y un arma política para subordinar el programa del FSLN a sus exigencias. En Marzo, concentra su ataque sobre la politización de la campaña de alfabetización y sobre la necesidad de organizar "elecciones libres y democráticas".

En este contexto va a librarse la batalla sobre la composición y la naturaleza del Consejo de Estado, cuya convocatoria está fijada para principios del mes de Mayo. El FSLN responde a la campaña del MDN y de Robelo señalando la participación "a última hora" de la burguesía antisomocista en el combate contra la dictadura y afirmando su propio papel hegemónico en la dirección de la revolución. Los sandinistas destacan las condiciones sociales y económicas efectivas de la democracia para las masas y denuncian el sabotaje económico organizado por los capitalistas, que se protegen tras las profesiones de fe "democrática".

El FSLN no retrocede. Junto con las organizaciones de masas, se asegura una mayoría en el Consejo de Estado cuyo papel puramente consultivo es además reafirmado. Cuando se anuncia la composición del Consejo, Robelo, representante del sector privado en la Junta presenta su dimisión el 22 de Abril; Violeta Chamorro lo había hecho ya, tres días antes. Al compás de los acontecimientos, el arzobispo Obando pide a los sacerdotes que ostentan cargos oficiales, que presenten su dimisión.

Ante esta crisis abierta de la coalición, ante esta nueva exacerbación de los antagonismos dentro del aparato del Estado, característica de una situación de dualidad de poder, el FSLN mantiene su proyecto de constitución del Consejo de Estado. Indica claramente su voluntad de reforzar su posición en el terreno político e institucional y acentúa su denuncia de Robelo.

A la vez, el FSLN manifiesta su respeto a la "economía mixta" y el "pluralismo político", levanta el estado de urgencia, que acababa de ser prolongado hasta abril del 81, y adopta una serie de medidas legislativas (ley de Amparo) que tratan de tranquilizar al sector privado. Acorralado, el COSEP termina enviando a sus representantes a la sesión inaugural del Consejo de Estado, el 4 de Mayo. En fin, el 20 de Mayo,

la dirección del FSLN designa por sí misma, con gran indignación del COSEP ante esta manifestación de autoridad, a los sustitutos de Chamorro y Robelo dentro de la Junta. Rafael Córdova, dirigente del Partido Conservador Democrático y miembro de la Corte Suprema de Justicia y Arturo Cruz, director del Banco Central y antiguo colaborador del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

La verificación de las relaciones de fuerzas realizada en la crisis abierta por la salida de Robelo, provoca contradicciones y extiende el malestar en las filas de la burguesía.

6. Sobre la base de las ventajas obtenidas en esta importante prueba de fuerzas políticas con la burguesía, el FSLN vuelve a proponer, en este nuevo contexto, la participación de la "burguesía patriota" en el esfuerzo de reconstrucción. Por su parte, la burguesía está forzada a utilizar como buenamente puede, sus posiciones en la producción y los recursos que le suministra el imperialismo y las burguesías latinoamericanas. Para la burguesía, el nombramiento de Cruz y Córdova adquiere una función dentro de este contexto. Por su parte, los medios financieros internacionales registran positivamente los nombramientos.

Pero el procedimiento por el que han accedido a la Junta Cruz y Córdova, traduce la modificación que se ha producido en las relaciones de fuerzas, en detrimento de la burguesía. Ninguno de los dos tienen respecto al sector privado, la misma representatividad que Robelo y Chamorro. Su presencia en el aparato gubernamental traduce el compromiso inestable que el FSLN intenta prolongar, después de la crisis de abril con el sector privado y las instituciones financieras imperialistas.

El propio Cruz explicita así a "La Prensa" su proyecto político: "Yo soy un firme creyente de que todo Gobierno... tiene que ser el producto de una elección popular... Ya dije de que sí se ha capitalizado positivamente tanto la acción tomada por Alfonso (Robelo), como las pláticas sostenidas con el COSEP... Se ha derogado la Ley de Emergencia, se aprobó una ley de Amparo, y yo creo que no hay la menor duda de la decisión firme de este Gobierno de hacer efectivo un sistema de economía mixta..." (26.5.80). El COSEP finalmente, se agarra al clavo ardiendo de estos nombramientos para conservar un punto de apoyo en la cumbre de las instituciones estatales.

7. Las concesiones hechas por el FSLN después de abril, son función de la relación de fuerzas: no suponen la sustitución de la lucha de clases, por la paz entre las clases. Rápidamente, las tensiones sociales y económicas ponen a la orden del día nuevos enfrentamientos. El FSLN utiliza en ellos su posición de fuerza, para hacer frente al sector privado.

Los progresos de la reforma agraria ponen en primer plano un triple problema:

- estos progresos desarrollan el "hambre de tierra" de los pequeños campesinos y los campesinos pobres; pero con ocupaciones desordenadas se corre el riesgo de desorganizar la producción o de hacer muy difícil la integración eficaz de las tierras cultivadas en la reforma agraria;

- se refuerza la necesidad de disponer de una superficie suficiente de tierras cultivables propiedad del Estado, para que la centralización de las actividades de producción y de transformación sea lo más eficaz posible;

- se pone en evidencia la necesidad de coordinar estrechamente el sector cooperativo y el sector estatal, y de asegurar al MIDA el máximo control del excedente agrícola.

Por todo ello, son imposibles una estabilización o una pausa en la reforma agraria. Jaime Wheelock lo expone claramente el 14 de Julio, en un balance de conjunto sobre la revolución en el campo: "...es necesario buscarle (al sector estatal) áreas de expansión dado que en este momento nosotros tenemos casi todas las haciendas en una forma bien separada, podríamos decir anárquica, que nos viene a traer tremendos problemas económicos, administrativos, de tiempo, de desarrollo, etc." Y sobre las ocupaciones de tierras Wheelock concluye: "Las tierras de que dispone el Estado son ya insuficientes". ("Nuevo Diario". 20.7.80).

Por otra parte, las principales debilidades económicas que habían aparecido en el primer trimestre, se confirman en el segundo. La necesidad de una industria estatal en los sectores neurálgicos (por ejemplo, la agroquímica), se plantea con urgencia. La necesidad de "una nueva concepción" del Plan para el año 81 es anunciada, el 23 de Agosto por Humberto Ortega, ante la gran concentración de masas que pone fin a la primera etapa de la campaña de alfabetización.

La burguesía recupera su aliento y vuelve a lanzar la campaña por elecciones libres y una Asamblea Constituyente en el 81. De este modo, espera atraerse a amplios sectores de la pequeña y media burguesía. En este sentido, privilegia los esfuerzos en diversas regiones, para constituir una oposición con sectores del campesinado. Para tratar de restablecer sus posiciones, apuesta sobre la posibilidad de una derrota de los obreros, los campesinos y las organizaciones revolucionarias de El Salvador y cuenta con la ayuda directa e indirecta del imperialismo. Algunos sectores del COSEP aparecen mezclados con intentos de subversión, particularmente el que dirige el antiguo Ministro de Defensa, Larios.

8. La respuesta del FSLN demuestra, una vez más, que no está dispuesto a dejar estancarse la revolución.

a. El 19 de junio, con ocasión del aniversario de la revolución, anuncia que en adelante podrán ser expropiadas todas las tierras ociosas o mal cultivadas. Esta decisión constituye un nuevo instrumento contra los propietarios, que prefieren dejar sus tierras ociosas, antes que arrendarlas a bajo precio, según lo establecido en la reglamentación de los arriendos de tierra. Esta medida puede servir, dentro del marco de desarrollo de la lucha de clases en el campo, para reforzar la audiencia de la revolución ante los campesinos pobres y los trabajadores agrícolas. El 11 de Junio, contra la voluntad del COSEP, un decreto-ley impone un aumento del salario mínimo; esta decisión sigue al lanzamiento de un "Plan de lucha" de la ATC y de la CST. Se establece el control sobre la importación y la distribución de petróleo. En fin, para disminuir el volumen de importaciones, se restringen las asignaciones de divisas a los capitalistas.

b. Las milicias populares que, se han desarrollado en las empresas y las explotaciones agrarias durante los últimos meses, están junto al EPS en el centro de la celebración del primer aniversario de la revolución, el 19 de Julio. Con el fin de dar todo su sentido a la movilización contra la reacción armada y de estimular la vigilancia popular, las milicias son encargadas de combatir a los comandos contrarrevolucionarios que actúan en la frontera con Honduras, y los complots somocistas.

c. El 23 de Agosto, ante decenas de millares de jóvenes alfabetizadores, Humberto Ortega hace pública la respuesta de la dirección sandinista a la campaña de la burguesía en favor de las elecciones y la Asamblea Constituyente:

1. Para el Frente Sandinista, la democracia no se mide únicamente por elecciones. Es algo más, mucho más. Para un revolucionario, para un sandinista, significa PARTICIPACION del pueblo en los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales. Mientras más tome parte el pueblo en esa materia, será más democrático. Y hay que decirlo de una vez por todas, la democracia no empieza ni termina con las elecciones. Es un mito el querer reducir la democracia a esa condición. La democracia se inicia en el orden económico, cuando las desigualdades sociales principian a debilitarse, cuando los trabajadores, los campesinos, mejoran sus niveles de vida. Ahí se origina la verdadera democracia. Antes, no.

Una vez logrados estos objetivos, de inmediato se extiende a otros terrenos: se amplía el campo del gobierno; cuando el pueblo influye sobre su gobierno, cuando el pueblo determina su gobierno, le guste a quien le guste.

Sin embargo en una fase más avanzada, democracia significa participación de los trabajadores en la dirección de las fábricas, haciendas, cooperativas y centros culturales. En síntesis, democracia es intervención de las masas en todos los aspectos de la vida social. Apuntamos lo anterior para sentar, desde una base de principios, lo que el Frente Sandinista de Liberación Nacional entiende por democracia.

No obstante esto, el Frente Sandinista ratifica la crítica constructiva como la única crítica fecunda. La discrepancia y el pluralismo seguirán siendo componentes esenciales de la DEMOCRACIA SANDINISTA. Pero señala que las críticas que deben tenerse en cuenta, fundamentalmente, son las que hace el pueblo trabajador, porque son

las más desinteresadas, genuinamente sinceras y revolucionarias.

2. La Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional reafirma ante el pueblo nicaragüense y ante el mundo, que el proceso revolucionario que actualmente vive nuestro país, no tiene regreso y continuará su marcha hasta las últimas consecuencias. No debe quedar la más mínima duda de que es UNA REVOLUCION la que hoy está en marcha, y que fue para hacer una Revolución que a la cabeza del pueblo nicaragüense, el Frente Sandinista de Liberación Nacional tomó el poder el 19 de Julio de 1979, después de 18 años de lucha y a un costo de casi 100.000 vidas.

3. La responsabilidad que asumimos al conducir la guerra de liberación, nos llevó a estudiar la realidad concreta de nuestro país. De esa manera logramos apreciar el estado de atraso y destrucción económica, social y moral en que encontraría al país la Revolución triunfante.

Por esas razones planteamos con toda seriedad que al lograrse el triunfo, debíamos iniciar un PROCESO DE RECONSTRUCCION NACIONAL como el primer gran paso de la Revolución Popular Sandinista.

4. Una vez en el poder, el Frente Sandinista, como auténtica vanguardia y como conductor del pueblo nicaragüense, decidió instalar una Junta de Gobierno que organizara y encabezara la gestión gubernamental apoyada en el trabajo del pueblo, para hacer posible la Reconstrucción Nacional.

5. A un año de la Revolución podemos afirmar con responsabilidad que el atraso y la destrucción económica, social y moral del país, es de tal magnitud y profundidad, que no puede esperarse que el país se reconstruya antes de 1985, por lo que la Dirección Nacional del Frente Sandinista ha decidido que la JUNTA DE GOBIERNO organizada deberá seguir al frente de la gestión gubernamental hasta 1985.

6. Por lo tanto, nuestro pueblo trabajador, nuestros obreros y campesinos, nuestros jóvenes y mujeres, los profesionales y empresarios patriotas entregados a la Reconstrucción Nacional, deberán aprestarse en 1985 para elegir el programa de gobierno y los mejores hombres del país, que a cargo del gobierno deberán seguir impulsando las tareas de nuestra Revolución (...)."

d. En fin, tres nuevas leyes permiten intervenir contra las actividades de la burguesía en diversos terrenos. Se prohíbe la designación de candidatos para las elecciones, antes que se constituya el censo electoral en 1984. Las campañas de información que favorezcan movimientos especulativos y el mercado negro se neutralizan, instaurando la censura contra este tipo de informaciones. En fin, la difusión de rumores



Nicaragua

sobre enfrentamientos militares, que traten de crear un clima de inseguridad, se penaliza con un decreto idéntico al anterior.

El curso de los acontecimientos desde el mes de abril ha socavado el proyecto que representaba para la burguesía la entrada de Cruz y Córdova en la Junta.

9. El conjunto de estas medidas marca un nuevo paso adelante por parte de la dirección sandinista. Demuestra la reducción extrema de todo terreno de acuerdo entre el FSLN y sectores significativos de la burguesía.

La constitución de un Consejo de Estado consultivo de mayoría obrera y campesina; el rechazo a contemporizar con las exigencias del COSEP para el nombramiento de los sustitutos de Robelo y Chamorro; la negativa a las peticiones de la burguesía sobre la organización de elecciones para el 81 y, paralelamente, la afirmación de que el desarrollo de los embriones del nuevo poder predomina sobre las elecciones y que éstas tendrán que confirmar en la práctica el poder de los organismos de masas; la afirmación repetida de la preeminencia de la dirección nacional del Frente sobre los órganos gubernamentales oficiales; la profundización de la reforma agraria; la generalización de las milicias: todos estos elementos combinados demuestran la existencia en Nicaragua de un gobierno que se apoya en los obreros y los campesinos y afirma su independencia frente a la burguesía: un gobierno obrero y campesino, breve episodio hacia la instauración de la dictadura del proletariado.

En efecto, la prueba de fuerzas decisiva entre las clases, aún no se ha realizado. La resolución de la situación particular de dualidad de poder —que implicará un cambio de la naturaleza de clase del poder del Estado, la socialización de los principales medios de producción, la centralización de la acumulación por el Plan— está aún ante nosotros.

La revolución nicaragüense ha podido sacar partido de la crisis del imperialismo y de la acentuación de las contradicciones interburguesas a escala nacional e internacional, consecuencia de dicha crisis. La existencia del Estado obrero cubano constituye una ayuda importante para el éxito de la revolución nicaragüense. A su vez, esta revolución abre una brecha en el cerco imperialista que sufre la revolución cubana desde hace 20 años.

En esta primera etapa, el FSLN ha podido utilizar esta situación internacional para mejorar sus relaciones de fuerzas con el enemigo exterior e interior. Pero los mismos progresos de la revolución nicaragüense y sus efectos en América central y en el Caribe, contribuyen a modificar este contexto. Las posibilidades de maniobra disminuyen.

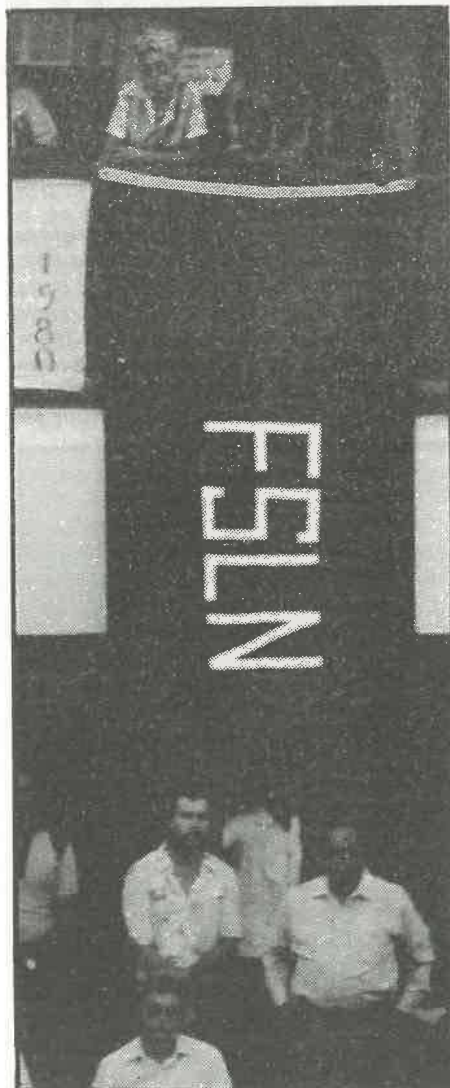
El imperialismo USA no está dispuesto a aceptar la extensión de la revolución socia-

lista en esta región. Por ello, multiplica sus esfuerzos para consolidar el poder de la burguesía en Honduras y en Guatemala, para ayudar a la Junta salvadoreña a romper el ascenso revolucionario, para forjar una alianza entre las fuerzas reaccionarias de América central, Venezuela y Colombia.

Paralelamente, continúa jugando la carta de los créditos, para dar oxígeno a la burguesía nicaragüense, intentando llevar confianza a sus bases, en la perspectiva de combates futuros, cuya amplitud y cuyas formas serán determinadas ampliamente por el resultado de la revolución salvadoreña.

10. Desde hace un año, la dirección sandinista ha afrontado victoriosamente las pruebas que se le han presentado y ha respondido a cada nuevo desafío de la burguesía, con un nuevo avance de la revolución.

Los trabajadores y campesinos, bajo la dirección del FSLN, no aceptarán que sus conquistas sean amenazadas por la contrarrevolución. Sabrán movilizarse para defenderlas y ayudar así a la lucha de los pueblos de América central. No aceptarán



que mientras se refuerzan sus organizaciones y su poder de decisión político, tengan que soportar en los lugares de trabajo, la autoridad patronal y las operaciones de sabotaje de los propietarios privados.

El control obrero sobre la producción y la nacionalización de los sectores clave, serán cada día más necesarios para una planificación efectiva de la producción y una distribución organizada de las riquezas sociales.

Frente a la campaña de la burguesía en favor de elecciones libres inmediatas, la dirección sandinista ha respondido justamente que la democracia real para las masas empieza en el terreno económico (por la abolición de la explotación y la opresión) y en el de la educación (con la alfabetización y el derecho a la instrucción). Pero todas las experiencias históricas demuestran que esta democracia, para ampliarse, debe fundarse sobre las organizaciones de masas: los comités, las milicias, los sindicatos, las asociaciones.

Por consiguiente, la lucha por profundizar el proceso revolucionario pasa por:

- el reforzamiento de las organizaciones de masas y de su capacidad para expresar fielmente la voluntad colectiva de los trabajadores y de movilizar las fuerzas vivas de la revolución;
- el funcionamiento democrático de estos órganos, es decir, la posibilidad para las diversas corrientes del movimiento obrero de expresarse en ellos y el derecho para los propios trabajadores de decidir las grandes opciones de sus organizaciones y de elegir su dirección a todos los niveles; esta democracia obrera es esencial para lograr la unificación sindical, que aseguraría una implantación más fuerte del FSLN en el movimiento obrero;
- la centralización de los órganos de la democracia proletaria, a través de los cuales las masas deciden sobre las cuestiones políticas, sociales y económicas centrales y eligen, a nivel nacional, representantes revocables. La extensión de las funciones de los CDS y de los órganos unitarios (Asambleas de reactivación económica: ARE) y su centralización, constituirían un paso adelante en este sentido.

La vanguardia reconocida de la revolución nicaragüense se ha forjado dentro del FSLN y a través de su largo combate contra la dictadura. Las tareas de la revolución plantean ante esta vanguardia consciente, el problema de su constitución en partido. Sólo la centralización democrática de este partido puede asegurar la mayor unidad en la acción y el libre debate necesarios para afrontar las pruebas futuras.

La IV Internacional reafirma su apoyo a la revolución nicaragüense dirigida por el FSLN y se compromete a proseguir su campaña de solidaridad internacional, desarrollada durante el último año, en numerosos países.

¡Por la defensa de la Revolución Iraní!



UNA primera constatación se impone inmediatamente después de iniciarse la guerra desencadenada por el régimen irakí: el conflicto ha servido de pretexto y de cobertura a una intervención militar aún mayor del imperialismo en la región.

En los grandes medios de comunicación occidentales, para justificar estas maniobras, se agita frecuentemente la amenaza de un cierre del Estrecho de Ormuz por los iraníes y la consiguiente asfixia de petróleo de "Occidente". Los dieciseis millones de barriles que transitaban cotidianamente, antes del inicio de las hostilidades, desde Irán, Irak, Arabia Saudita y los Estados del Golfo, por el Estrecho, representaba aproximadamente el 40% de las importaciones mundiales de petróleo, el 35% del consumo de los países capitalistas y cerca del 60% de las importaciones de crudos de América, Europa y Japón juntos.

Pero las maniobras militares imperialistas comenzaron en la región muchos meses antes que la guerra irano-irakí. Hace exactamente 20 meses, Carter designó como objetivo prioritario del Pentágono la puesta a punto de un "dispositivo militar de vigilancia, control e intervención" en el Golfo Pérsico. Para ello, la administración americana ha dado carta blanca a los militares y créditos casi ilimitados.

En su discurso sobre el Estado de la Unión, en enero de 1980, Carter explicó que "toda tentativa de hacerse con el control de la región del Golfo Pérsico por una potencia exterior será considerada como un atentado contra los intereses vitales de los Estados Unidos y será combatida por todos los medios necesarios, incluidos los militares". La formulación de esta doctrina Carter, poco después de la intervención militar soviética en Afganistán, no va dirigida solamente contra el Kremlin y su muy hipotética "marcha hacia los mares cálidos", sino ante todo contra los Estados de la región, es decir, contra el régimen iraní nacido tras la caída del Sha.

Hasta 1971, a pesar de una penetración económica y militar cada vez más importante del imperialismo USA en la región, especialmente a través de la Arabia Saudí, fue Gran Bretaña, con sus protectorados sobre los Emiratos del Golfo y sus bases militares en Adén, quien aseguraba fundamentalmente la "seguridad militar" en el Golfo. De 1971 a 1978 es Irán, tras ocupar los tres islotes que controlan el Estrecho (Pequeño Tumb, Gran Tumb y Abu Mussa, que debían haber sido devueltos a los Emiratos Arabes tras la descolonización), quien interpreta el papel de gendarme del imperialismo en la región. Fue Teherán quien, para desestabilizar al régimen irakí, con la ayuda de la CIA y de los israelitas, apoyó la rebelión de los kurdos de Irak dirigidos por Barzani, para "abandonarlos" tras los Acuerdos de Argel de marzo de 1975, con los que el Sha imponía al régimen baasista irakí,

Irán / Irak

sobre la base de la relación de fuerzas militares, el reconocimiento de su soberanía total sobre Chat-el Arab. Fue también el régimen Pahlevi quien envió sus tropas a combatir contra las guerrillas de Dhofar y quien inició un acercamiento con el régimen de Daud en Afganistán, a medida que este acentuaba su evolución prooccidental.

Pero después de 1979 y tras la caída del Sha, Washington no ha encontrado todavía otro país susceptible y capaz de interpretar el papel de gendarme fiel y totalmente adicto en la región. Los estados petroleros del Golfo han comprado durante estos últimos años, y después de 1979, enormes cantidades de armamentos a los Estados Unidos, y también a Francia y Gran Bretaña. Pero en estos países poco poblados, en los que no hace una docena de años reinaba todavía la miseria y el analfabetismo, no existe aún la infraestructura humana capaz de utilizar a gran escala sistemas de armas supersofisticados.

Incluso Arabia Saudita, con un ejército de 600.000 hombres, reforzado por una Guardia Blanca formada por las tribus beduinas, no parece ser capaz de reemplazar a lo que fue el ejército iraní en su época de esplendor imperial, cuando era el 5º ejército del mundo. Y además, los conjurados que ocuparon la Gran Mezquita de la Meca el año pasado se beneficiaron en gran medida de complicidades en... la Guardia Blanca. En fin, el último obstáculo para la administración norteamericana en su búsqueda de un nuevo gendarme, es la cuestión palestina. El Sha cumplía a las mil maravillas este papel, porque era a la vez el aliado privilegiado de Israel en la región, a quien vendía petróleo y cuyos servicios de información adiestraron a la SAVAK.

Todo este contexto político en el Golfo Pérsico explica por qué la política norteamericana se orienta hacia la posibilidad de una intervención directa, lo que representa un paso atrás en relación a la doctrina Nixon de no implicación militar de los EE.UU., tal y como fue formulada en Guam en 1972. Este es el sentido de la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) de 110.000 hombres. Es la razón por la cual todo el dispositivo norteamericano en el Océano Indico ha sido considerablemente reforzado (ante todo la base de Diego García), y una importante fuerza naval USA está presente a la entrada del Golfo.

Tabas, un ensayo a escala reducida

La incursión norteamericana sobre Tabas, por lamentable que haya sido su resultado desde el punto de vista de Washington, contiene en sí misma todos los elementos de la nueva doctrina militar de Carter: puesta a punto de unidades de élite norteamericanas para su posible integración en la FDR, utili-

zación de bases de apoyo en países amigos (Egipto, aunque se habla también de Oman), coordinación con la importante flota de guerra de USA con base en el Océano Indico, e incluso la coordinación con cómplices dentro del ejército iraní. He ahí, a escala reducida, todos los ingredientes y montajes tácticos de intervenciones posteriores a mucha mayor escala.

Esto lo ilustran ya los objetivos de las maniobras de intervención de la FDR en una guerra en el desierto, que tuvieron lugar en marzo de 1980 (maniobras Gallant Eagle cerca de Fuerte Irwin en California) y en junio (operación Red Flag cerca de la base aérea de Nellis en Nevada). Washington ha propuesto a París, Londres y Canberra la formación de una fuerza de intervención naval común en el Golfo Pérsico: la escalada de las maniobras imperialistas —como el envío de aviones Awacs a la Arabia Saudí— tiene un significado evidente. Teniendo en cuenta la fuerza de la revolución iraní, Washington intenta asociar a sus aliados occidentales a una eventual intervención directa: y ello da una importancia especial a la batalla que el movimiento obrero occidental debe emprender de denuncia de las maniobras contrarrevolucionarias del imperialismo sobre la base de las consignas siguientes: “¡Fuera las garras imperialistas de la revolución iraní! ¡Retirada inmediata de todas las flotas de guerra imperialistas y desmantelamiento de las bases de USA en la región!”.

La situación interior de Irak y las ambiciones regionales del régimen baasista

Las ambiciones regionales de Irak son relativamente recientes y tienen su base material en la expansión industrial que el país ha conocido después de 1971. Esta expansión industrial se ha apoyado a la vez sobre la

recuperación, por parte del Estado irakí, de la renta del petróleo (nacionalización de las compañías petroleras y en concreto la famosa Irakian Petroleum Company, en 1972 y 1975) y su elevación después de 1973, sobre la ampliación del mercado interior ligada a la segunda fase de la reforma agraria iniciada en 1971. De 1971 a 1975, el PIB se ha multiplicado por tres. El último plan quinquenal preveía un aumento anual del 16,8% de la renta nacional bruta por habitante. Con 100 mil millones de barriles, Irak ocupa el segundo puesto de los países de la OPEP por lo que se refiere a las reservas, detrás de Arabia Saudita. También es el segundo país exportador de petróleo de la OPEP (3,5 millones de barriles diarios). Sus principales clientes son Francia, Italia, España, Gran Bretaña y Japón. En 1979, el petróleo ha proporcionado al Estado irakí 20 mil millones de dólares (por lo tanto, más que los ingresos iraníes en 1978; pero Irak, con 12 millones de habitantes, tiene una población tres veces menor). En 1980, cerca de 18 mil millones de dólares debían ser invertidos en proyectos de desarrollo industrial.

Pero el maná del petróleo y las reformas impuestas autoritariamente por el régimen baasista, en el que dominaba inicialmente el sector capitalista de Estado, no ha resuelto los problemas del subdesarrollo, ni mucho menos. El estancamiento relativo de los precios de los crudos en 1976-77, cuando el petróleo representa aún el 80% del PNB, ha mostrado la fragilidad de una expansión industrial basada en la importación de fábricas “llave en mano” y de tecnologías occidentales que tienen por objetivo la sustitución de las importaciones. En el primer número de su edición clandestina de Tariq Al Chaab, el PC irakí denunciaba, después de haber roto con el Baas en 1979, la política económica, explicando —un poco tarde— que aumentaba la dependencia con



Ayatollah Jomeini.

respecto al imperialismo: entre 1974 y 1978, más del 90% de las inversiones industriales habían sido confiadas a empresas capitalistas y a multinacionales occidentales, y en 1976 la parte del sector privado había superado a la del sector público (1.200 millones de dinares frente a los 950 del sector público).

Esta industrialización ha reforzado la polarización social, con la aparición de una burguesía ligada al aparato de Estado y al partido, y de importantes diferenciaciones en el campo, caracterizadas por el reforzamiento del peso económico de los campesinos ricos y de los comerciantes acomodados, que han sabido tejer mil y un lazos de interés, políticos y familiares, con la burocracia del Estado baasista.

Esta polarización social tiene también, sin duda, su base en fenómenos económicos, en primer lugar el mantenimiento y desarrollo de la desigualdad de rentas, indisolublemente ligada al mantenimiento de una economía de mercado regida por la ley de beneficio y la acumulación capitalista. Es aquí donde reside el obstáculo fundamental que impide a Irak salir del subdesarrollo. Las destrucciones económicas provocadas por la guerra van a resaltar sin duda más rápida y agudamente que lo previsto esta realidad socioeconómica.

En el plano político, la dictadura irakí se ha visto sacudida por la crisis del Baas, por el aislamiento creciente de la camarilla de Saddam Hussein y sobre todo por el impacto de la revolución iraní en el campesinado pobre chiita del sur de Mesopotamia y el resurgimiento del movimiento kurdo.

Parece hoy evidente que el complot de julio de 1979, que provocó la detención de 250 cuadros del Baas y del ejército y la ejecución de 22 conjurados (entre ellos dos ministros y cinco miembros del Consejo de mando de la Revolución) ha sobrepasado por su amplitud todos los precedentes. Si

los conflictos entre las camarillas y las fracciones han jugado sin duda un papel esencial en esta conjuración, ha tenido como resultado de hecho, vistas las relaciones entre ciertos conjurados y el régimen de Damasco, la ruptura de la precaria unión sirio-irakí anunciada en junio de 1979 y que debía servir de eje natural alrededor del cual se reagruparían los Estados árabes que rechazaban Camp David. Esta unión debía igualmente, de acuerdo con ambos regímenes, servir para levantar una sólida barrera que evitase el contagio de la revolución iraní, a la que son particularmente sensibles las dictaduras laicas baasistas de Damasco y Bagdad.

La amenaza de los chiitas y de los kurdos irakíes

Tras la industrialización que contribuyó a concentrar en los centros urbanos a decenas de miles de campesinos kurdos y árabes chiitas, en 1977 y 1979 tuvieron lugar rebeliones de las masas plebeyas en los dos grandes santuarios chiitas de Irak, Nadjaf (donde Jomeini estuvo exiliado de 1963 a 1978) y Kerbala, rebeliones que fueron reprimidas con toda violencia. Desde comienzos de 1980, más de 20.000 trabajadores chiitas de origen iraní han sido expulsados hacia este país. La policía política baasista ha diezmado los núcleos de la organización terrorista chiita Al Daawa, de inspiración jomeinista, y el principal dignatario religioso chiita, Ayatollah Bagher Sadr, después de haber sido arrestado, fue degollado en su celda por los esbirros de Saddam Hussein. La ruptura con el PCI y la represión contra sus militantes busca igualmente impedir toda estructuración, por embrionaria que sea, de un movimiento obrero independiente.

A esta oposición religiosa y social latente

de los chiitas, que representan el 50% de la población (los baasistas irakíes son de origen sunnita), se suma el resurgir de la cuestión kurda. Los kurdos representan más del 20% de la población de Irak. El Acuerdo de Argel entre el Sha y Saddam Hussein se firmó a su costa. Después de haber infligido una derrota militar a las tropas barzanistas, abandonadas por el Sha, el régimen irakí adoptó su solución final al problema kurdo: más de 1.000 pueblos, en una banda fronteriza de 20 kilómetros entre Irán e Irak, fueron arrasados. Sus pobladores kurdos fueron deportados a zonas árabes.

A pesar de ello, debilitada, agotada por las luchas fraccionales y por la lógica implacable que hace que cada grupo kurdo irakí busque regularmente la protección de un Estado de la región, la resistencia kurda en Irak ha comenzado a reorganizar sus fuerzas, gracias, en parte, al desarrollo del movimiento que se ha producido en el Kurdistán iraní. Si las estimaciones sobre el número de peshmergas que pueden hoy alinear las organizaciones kurdas irakíes no pasa de algunos miles, son suficientes para inquietar de sobra a Bagdad, que mantiene tres divisiones enteras acantonadas en el Kurdistán (es decir, el equivalente de las fuerzas lanzadas en el primer asalto contra Irán), y que continúa enviando periódicamente sus *Mig* y *Sukkoï* a bombardear los pueblos sospechosos de dar cobijo a las guerrillas.

Después de algunos meses los kurdos irakíes han visto sumarse a sus maquis, en particular en el famoso "Valle de los Partidos", situado en una zona liberada en la frontera irano-irakí, a los militantes del PC irakí. Aliado al Baas después de 1973, el PCI no dudó en sacrificar en el altar de la colaboración de clases y del tratado de amistad firmado en 1972 entre Moscú y Bagdad, la lucha del pueblo kurdo y los intereses del proletariado irakí. El Baas no se lo ha agradecido más que lo que se lo agradeció Numeiry al PC sudanés por el apoyo prestado.

En 1977 y 1978, decenas de militantes comunistas han sido asesinados, hasta reducir al PCI finalmente en 1978 a la semiclandestinidad. Tras el cierre, el 5 de abril de 1979, de su periódico Tariq Al Chaab, el PCI rompió con el Baas. El informe presentado al Comité Central del PCI de julio de ese mismo año llamaba a la lucha armada para derrocar "la dictadura del Baas".

La ruptura del PCI y del Baas ha venido provocada también por el alineamiento parcial prooccidental de la diplomacia irakí. Bagdad había roto sus relaciones diplomáticas con Washington después de la Guerra de los Seis Días en 1967. Sólo permaneció en Irak una sección para la defensa de los intereses norteamericanos, compuesta por veinte diplomáticos y que residía en la embajada de Bélgica. En 1972, cuando Sadat expulsaba a los consejeros militares soviéti-



Saddam Hussein.

cos anunciando el giro que debía conducirle a los acuerdos de Camp David, Irak firmaba un tratado de amistad con la Unión Soviética. Y han sido los soviéticos los que han contribuido en gran medida a forjar el ejército irakí, equipando sus 19.000 hombres, proveyendo la parte esencial de sus 350 aviones, 1.800 carros de combate y 2.000 blindados ligeros (aunque durante estos últimos años Bagdad ha diversificado sus compras militares, aprovisionándose especialmente en Francia e Italia).

El estallido de la revolución iraní, la caída del Sha y el fracaso de la unión sirio-irakí aceleraron el viraje prooccidental de la política irakí y su acercamiento a los regímenes reaccionarios del Golfo, Arabia Saudí y los Emiratos. En febrero de 1979, Bagdad firmaba con Ryad un primer acuerdo de seguridad fronteriza para congelar el contencioso sobre ciertos territorios en disputa. El verdadero giro va a tener lugar un mes más tarde, durante la última guerra entre los dos Yemen. Irak dió pruebas de su "buena voluntad" ayudando militarmente a Yemen del Norte.

En septiembre de 1979 se firmó un tratado de defensa mutua entre Irak y Ryad. Y Sadam Hussein propuso en febrero de 1980 una Carta Nacional a todos los Estados árabes de la región que rechazaban los acuerdos de Camp David y a la vez deseaban contener la revolución iraní.

Persiguiendo su objetivo de convertirse en una gran potencia regional, Irak aceleró a lo largo de los años 1979-80 el desarrollo de sus instalaciones nucleares construidas con la ayuda del gobierno francés. Instalaciones que, por el tipo de concurso de adjudicación escogido y por la cantidad de combustible pesado entregado a Bagdad, podrían acabar sirviendo para la puesta a punto de la primera bomba atómica árabe.

Sin embargo, este alineamiento prooccidental no puede identificarse todavía hoy pura y simplemente con la defensa de los intereses norteamericanos en la región y sigue, por varias razones, teniendo importantes limitaciones:

- por razones de estabilidad interior y de política regional, el Baas irakí quiere mantener su imagen de dirección nacionalista árabe, antimperialista y "no alineada" (en 1982, Sadam Hussein debe suceder a Fidel Castro en la presidencia de los No Alineados);
- los propios Estados Unidos, por tres veces, han mostrado su propia debilidad siendo incapaces de sostener hasta el final al Sha, en la crisis afgana, y tras la toma de los rehenes en la embajada norteamericana de Teheran;
- por último, está la cuestión palestina, la política hacia Israel de Washington, y la negativa a reconocer a la OLP como interlocutor válido, capaz de dirigir un miniestado palestino, que, tras el estallido de la revolución iraní, es cada vez más difícil de

apoyar abiertamente. "Los Americanos no han comprendido nada, absolutamente nada, explicaba en julio de 1979 un kuwaití a un periódico especializado, ¿cómo podríamos apoyar a Sadat e Israel cuando una revolución islámica golpea en nuestra puerta?".

Sadam Hussein, al lanzar su ofensiva militar el 22 de septiembre, buscaba obtener dos resultados:

- sacar provecho de una situación favorable, como la que supone el debilitamiento de la potencia militar iraní y el aislamiento diplomático de Teherán, para afirmar su liderazgo en la región y recuperar zonas (Chatt el Arab) cuyo interés estratégico para Irak es evidente (es la única salida marítima del país, por la que transita la mayor parte de sus exportaciones de petróleo);
- exacerbar la crisis del régimen jomeinista y acelerar su caída, sobre la base de una guerra relámpago que le permitiese hacer conquistas territoriales importantes.

Este proyecto de los dirigentes irakíes se ha visto facilitado y ha sido alimentado por la política seguida durante muchos meses por los dirigentes de la República Islámica, los cuales, tras la caída del Sha, se han negado a denunciar el tratado leonino de 1975 y tampoco han propuesto su renegociación. Aunque es difícil demostrar que las masas obreras y campesinas de Irán (o de Irak) tengan el menor interés objetivo en saber si la línea fronteriza entre ambos países se sitúa en la mitad del río (tratado de 1975), o en la orilla derecha, a excepción de los enclaves de Abadán y Jorramchar a los que divide por la mitad (tratado de 1973). Exactamente igual ocurre con la posesión de los tres islotes del Estrecho de Ormuz, cuya ocupación por el Sha en 1971 marcó simbólicamente su aparición en la escena como gendarme imperialista de la región. Por el contrario, las declaraciones altisonantes paniranes de ciertos dirigentes de la República Islámica, reclamando por ejemplo la isla de Bahrein como parte integral de su territorio, han facilitado las maniobras de la diplomacia irakí.

En fin, el régimen de Teherán ha utilizado para sus propios fines políticos, durante meses, la tensión fronteriza con Irak. En primer lugar, para justificar, a través del peligro exterior, el mantenimiento del ejército imperial, de su jerarquía, limitando las purgas y depuraciones en su seno. El complot exterior ha sido utilizado igualmente para negar al movimiento de las nacionalidades oprimidas de Irán la satisfacción de sus derechos nacionales y de su derecho a la autodeterminación.

Las manifestaciones de la población árabe del Juestán, en mayo y junio de 1980, han sido ahogadas en sangre por los *pasdars* y por el ejército iraní, después de que las autoridades de Teherán hubiesen explicado que el movimiento nacional árabe era un simple complot del imperialismo y de Irak.

La segunda ofensiva militar, de nuevo por los *pasdars* y el ejército iraní, contra el movimiento kurdo ha sido lanzada durante la última primavera y verano, bajo el pretexto de la "defensa militar" de la frontera con Irak. Pero una "defensa militar" que para las autoridades de Teherán pasa por el desarme de las milicias y la prohibición de las organizaciones políticas kurdas que tienen en armas unos 50.000 hombres. Se podría añadir, en el caso de los campesinos turcomanos, que también ellos habían comenzado a armarse, a ocupar tierras y a reivindicar sus derechos nacionales.

Esta política "militar" de los dirigentes de la República Islámica, que tiene unas raíces sociales evidentes, se articula alrededor de la defensa de la propiedad privada y del Estado burgués, frente a la dinámica de revolución permanente desencadenada con la caída de la dictadura Pahlevi.

La política militar de estos últimos meses (más adelante abordaremos la política militar en el conflicto actual de los dirigentes de la República Islámica) ha tenido repercusiones sobre el desarrollo mismo de los primeros días del enfrentamiento con Irak. El avance militar de las tropas blindadas y motorizadas irakíes de muchos kilómetros, sin que ninguna resistencia sería le fuese opuesta, fue debida parcialmente al hecho de que el gobierno de Teherán había optado deliberadamente por mantener numerosas unidades blindadas (especialmente aquellas equipadas con tanques *Chieftan*, el más moderno del que dispone el ejército iraní) en las nacionalidades, alrededor de los grandes centros urbanos e incluso a lo largo de la frontera soviética y afgana, como en la época del Sha.

¿Cómo defender militarmente la revolución iraní?

La agresión militar irakí ha puesto de nuevo en primer plano la defensa militar de la revolución iraní, por tres razones esenciales:

- la ofensiva de las fuerzas armadas irakíes busca la conquista y ocupación militar de una de las zonas económicas vitales de Irán (Juestán) y especialmente de los principales centros urbanos (Jorramchar, Abadán, Ajvas, Desful);
- el régimen irakí intenta abiertamente favorecer la caída del régimen de Jomeini y abrir la vía a la contrarrevolución iraní a través de un golpe de Estado o de una guerra civil;
- el desencadenamiento de esta guerra sirve igualmente a los planes del imperialismo, en la medida en que se piensa que debilita a las fuerzas vivas de la revolución iraní y porque permite acelerar y desarrollar los preparativos para una intervención militar en la región.

Contrariamente a las zonas fronteras li-

mitadas en disputa tras la abrogación del tratado de 1975, el éxito de los objetivos de guerra irakíes en el Jusestán no podría dejar de acentuar el estrangulamiento económico de un país que ha visto ya una parte de su infraestructura económica destruida por las incursiones aéreas irakíes. Además, semejante éxito militar irakí tendría un impacto social quizás más importante aún para el futuro de la revolución iraní al congelar (con la ocupación militar) o atomizar (con el éxodo) la actividad del proletariado del petróleo y de los trabajadores industriales del Jusestán.

Los trabajadores de Ajvas, Jorramchar, Abadán y Dezful, que no derrocaron la dictadura del Sha y de su SAVAK para caer bajo la férula de los esbirros del Baas irakí, se han movilizado para resistir militarmente a las tropas de Sadam Hussein y defender sus conquistas. Semiespontáneamente o bajo la dirección de las organizaciones de la extrema izquierda (Mudyahidines, Fedayines, etc.) se han constituido comités de barrio y milicias. Se han levantado barricadas en las ciudades y sus accesos y la población comienza a armarse. Y tras dos semanas de combate, el resultado militar es ya asombroso: no son las unidades regulares del ejército iraní, ni tampoco su aviación, sino la resistencia en esos auténticos erizos que son los grandes centros obreros del Jusestán, la que ha detenido —al menos durante un tiempo— la marcha victoriosa de las tropas de élite irakíes.

Todavía resulta imposible predecir cuál será el resultado de los combates que tienen lugar en torno a estas cuatro ciudades, resultado que dependerá en gran parte de las opciones políticas y militares del gobierno

de Teherán. Pero se puede extraer ya una primera lección: frente a un enemigo equipado abundantemente con aviones, tanques, artillería pesada, medidas como el

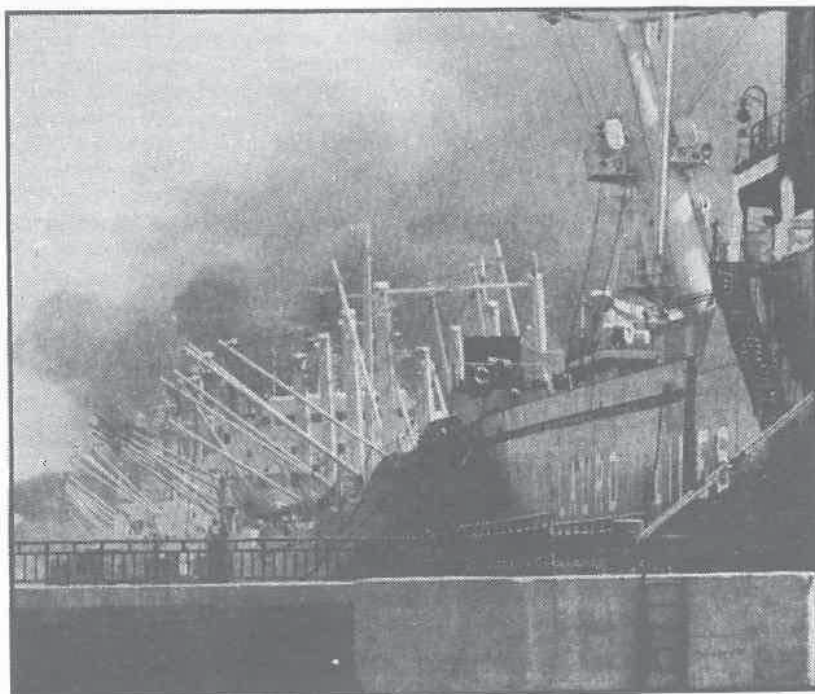
armamento generalizado de los trabajadores o la constitución de milicias, no son desde luego utopías a arrinconar en el trasero del romanticismo revolucionario. Contrariamente a los cálculos puramente "aritméticos" de los expertos que comparan, "siendo todas las cosas iguales por otro lado", la potencia de fuego de un carro de combate frente al de un fusil de asalto de un miliciano, este tipo de medidas siguen siendo parte de un método "realista", inclusive sobre el plano militar, porque atestiguan una voluntad política de defensa que juega en los dos campos, tanto sobre el comportamiento combatiente del enemigo como sobre el del resto de las propias fuerzas (como ocurre con los soldados de las unidades regulares del ex-ejército imperial). De nuevo se ha comprobado la certeza de una lección esencial de todas las grandes confrontaciones militares ocurridas en procesos revolucionarios. Y con mayor razón en Irán, donde las masas trabajadoras han hecho ya la experiencia de la posibilidad de vencer a un ejército armado con los materiales más sofisticados: el ejército del Sha, cuando la correlación de fuerzas puramente militar les era mucho más desfavorable.

La inquietud de las potencias occidentales

Después de dos semanas de combates, el tono comienza a cambiar en las cancillerías

de las capitales occidentales y también en las de los Estados del Golfo. Al comienzo de las hostilidades, a pesar de sus declaraciones de "neutralidad", no cabía la menor duda de que el "apoyo moral" de los estados imperialistas se encontraba detrás de los irakíes: por primera vez en la historia de los conflictos de este tipo, ni un sólo país capitalista o del "campo socialista" ha condenado claramente la agresión militar irakí. La moción de las Naciones Unidas exigiendo el fin de las hostilidades y que fue adoptado unánimemente, se sitúa muy por detrás de la famosa Resolución 242 sobre Israel, en el sentido de que no exige la evacuación de las tropas irakíes del territorio iraní ocupado. Las misiones de conciliación y "buenos oficios", como la del dictador pakistaní Zia, en nombre de los países islámicos, como la de Yasser Arafat por la OLP, o la del ministro cubano de asuntos exteriores, enviado por Fidel Castro, han acabado enfrentándose con la no admisión por parte de las autoridades iraníes, precisamente porque se niegan a considerar esta exigencia elemental.

Mientras que al inicio de las hostilidades todos los estados del Golfo, con Ryad a la cabeza, han incitado de palabra y de hecho (ofreciendo facilidades para el aterrizaje de la aviación irakí) a Sadam Hussein, hoy se observa un distanciamiento, ligado evidentemente al atasco de la "Blitzkrieg" irakí. Pero ¿cómo interpretar el ofrecimiento israelí de proveer de ciertas piezas de recambio al gobierno de Teherán, que no va a tardar en necesitar si el conflicto se acaba



Jorramshar en llamas.



convirtiéndose en una guerra de desgaste? ¿Una maniobra de intoxicación?. Sin duda.

Pero ¿cómo interpretar entonces otra noticia, publicada en toda la prensa francesa a partir de distintas fuentes, según la cual el Pentágono continuaba permitiendo el tráfico, vía Turquía, de un cierto número de piezas de recambio y de material militar para equipar al ejército iraní? ¿Cómo interpretar también las declaraciones de Muskie cuando explica que "la estabilidad de la región depende de un Irán unido, fuerte, independiente y en paz con sus vecinos"?

¿Tal vez Washington, ante el estancamiento de la ofensiva irakí, ha renunciado bruscamente a debilitar a la revolución iraní? Con toda seguridad, no. Un razonamiento de este tipo sería tan simplista y mecánico como el contrario, que pretende, como explican ciertos dirigentes religiosos iraníes, que el régimen irakí es pura y simplemente una marioneta en manos del imperialismo norteamericano.

Y basta con leer lo que escriben los editorialistas más cínicos del capital para comprender lo que se esconde detrás de esta aparente paradoja. El *Economist* de Londres anunciaba al inicio de los combates: "Si esta guerra significa el fin del Irán de los ayatollahs que movilizan al populacho y cogen rehenes, poca gente en el extranjero deplorará esta situación. Este ha sido precisamente el cálculo del presidente Sadam Hussein y, si hay algo sobre lo que no quepa la menor duda, es del hecho de que Irak es el agresor. Quizás ha tenido razón. Pero a condición de triunfar rápida y completamente. El suspiro de alivio que experimentarían el extranjero con la desaparición de los fanáticos revolucionarios iraníes se disiparía si al reino de los ayatollahs sucediese una guerra civil que condujese casi inevitablemente a la desintegración y destrucción del imperio persa". La dialéctica y el sentido estratégico no son el atributo exclusivo de los revolucionarios...

La ofensiva militar irakí no ha hecho caer al régimen de la República Islámica. En ningún momento este se ha visto amenazado por una crisis de desmoronamiento militar que pusiese en cuestión su existencia. En la base de este error de juicio está la confusión de los dirigentes irakíes, que han asimilado la crisis evidente de la dirección jomeinista y la parálisis parcial de las instituciones iraníes con el inicio de un reflujó de la revolución iraní, que un choque militar solo podría acelerar y concluir.

Error trágico, quizás fatal para los dirigentes de Bagdad: la crisis de la dirección nacionalista burguesa en Irán no es el inicio de un declive del proceso revolucionario, sino que por el contrario es la expresión de su avance, de la dificultad para los dirigentes de la República Islámica de desviar o bloquear el avance de las masas obreras, campesinas, de los movimientos nacionales, que no han sufrido todavía ninguna derrota

importante.

Y la guerra irakí va a provocar sin duda nuevos avances del movimiento revolucionario en Irán, desbordando las tentativas de la dirección jomeinista de utilizarlo para sus propios fines de Unión Sagrada, nacionalista y chovinista, y para la reconstrucción del aparato de Estado. El imperialismo y la reacción sólo tienen un objetivo estratégico: aplastar la revolución iraní. Lo que no se confunde con la voluntad de ver aplastado militarmente al ejército iraní, ya que saben que para lograr sus fines será necesario utilizar en gran escala la fuerza contra las masas trabajadoras que tienen ya en su activo la victoria contra el 5º ejército más poderoso del mundo.

Nadie cree hoy en las capitales occidentales que una acción contrarrevolucionaria victoriosa en Irán podría llevarse a cabo por fuerzas exclusivamente exteriores, imperialistas y árabes. La cuestión decisiva para todos los proyectos contrarrevolucionarios en Irán —más allá de las posibilidades de una intervención directa— sigue siendo la posibilidad de poner en pie dentro del mismo Irán un embrión militar y político alternativo. Esta es la razón por la que todos los planes estratégicos del imperialismo siguen centrándose en el futuro del ejército iraní y del antiguo aparato de Estado. Es a partir de este plan estratégico global como el imperialismo calibra la actuación, no las declaraciones sino las medidas concretas, de los dirigentes de la República Islámica. Y de ahí que el imperialismo distinga entre lo que esta guerra significa como radicalización del movimiento de masas, y las medidas políticas y militares adoptadas por los dirigentes de la República Islámica.

Decenas de oficiales —incluidos los implicados en el complot de julio— han sido liberados con la promesa de una amnistía completa, a condición de que vuelvan al servicio activo en el ejército regular. Las embajadas iraníes en el extranjero hacen lo mismo con los oficiales en el exilio, prometiéndoles la impunidad, el pago de sus salarios atrasados, e incluso un adelanto, si vuelven a Irán. Así, en París, ha sido el brazo derecho del general Oveissi, el "carnicero de Teherán", coordinador en Europa de las maniobras facciosas, el contactado para volver al servicio.

¿Medidas de "realismo militar" y de utilización cínica de los "expertos"? No, porque al mismo tiempo, en Teherán, Jomeini y todos los dirigentes de la República Islámica multiplican los discursos rehabilitadores del ex-ejército imperial, convertido en la punta de lanza de la revolución iraní. Al mismo tiempo, no se ha tomado ninguna medida práctica para concretizar la consigna lanzada el diciembre último por Jomeini sobre el "Ejército de los 20 millones". Incluso Bani Sadr ha impedido la movilización general, limitando ésta al Jusestán: el licenciamiento de los reclutas ha sido una de las primeras medidas tomadas tras la

insurrección de febrero de 1979 para evitar la acción disgregadora de los comités de soldados, formados espontáneamente. Estos han estado siempre prohibidos.

En fin, en el plano político, se ve cómo los dirigentes iraníes ponen el acento exclusivamente sobre la victoria militar contra el agresor irakí. ¿Qué persona con sentido común no se da cuenta que la mejor defensa de la revolución, el mejor medio de movilizar contra el imperialismo y la reacción todas las energías, es además la constitución de un verdadero ejército de 20 millones, basado en los shoras y la organización de las milicias obreras y campesinas, dar la tierra a los campesinos, reconocer los derechos nacionales, el derecho a la autodeterminación de los kurdos, árabes y otras nacionalidades oprimidas? Quizás se contenga y se rechace la ofensiva irakí, pero ¿quién puede dudar que las opciones militares de los dirigentes de la República Islámica, que siguen siendo la continuación en otro terreno y con otros medios de toda su política, no implican a un cierto plazo de tiempo nuevos peligros y nuevas pruebas para las masas iraníes?

Todo esto es lo que da su plena significación a la línea general sobre la cuestión de la defensa militar de la revolución iraní, desarrollada en agosto de 1980 por el Secretario Unificado de la IV Internacional, sobre la situación y las tareas de la revolución iraní:

"Frente a la amenaza de un golpe de Estado reaccionario o la intervención militar imperialista, los marxistas revolucionarios en Irán participan en los combates de los obreros, campesinos y masas oprimidas por la defensa —con sus propios medios de acción y organización— del actual régimen. No se trata de un apoyo político, sino de una defensa militar. En una situación en la que el proletariado y sus aliados no son capaces de reemplazar el régimen presente por una forma superior de gobierno —un gobierno de los obreros y campesinos— esta defensa militar es necesaria, pero está estrechamente unida a la realización de las grandes tareas (autoorganización de los trabajadores e independencia de clase, medidas anti-capitalistas, reforma agraria radical, autodeterminación de las nacionalidades... especialmente) que permitan avanzar a la revolución y sean la garantía última para derrotar los proyectos del imperialismo.

"...Frente a las amenazas de tipo militar del imperialismo y de los generales del antiguo régimen, los marxistas revolucionarios proponen concretizar la consigna del ejército de los 20 millones, constituyendo milicias obreras y campesinas y armándolas. En esta perspectiva, defienden el derecho de los trabajadores en uniforme en el ejército y en los cuerpos de pasdars de formar sus propios comités independientes de la jerarquía y de las instituciones de la República Islámica".

El proletariado impugna el poder de la burocracia.

1. Tras dos meses de huelgas, en las que participaron dos millones de trabajadores, la clase obrera polaca ha logrado una gran, una magnífica victoria. Por primera vez desde que se estableció la dictadura burocrática en la URSS, y desde que se extendió posteriormente a Europa del Este, la clase obrera ha conquistado, en un combate directo organizado por ella misma, el derecho a crear organizaciones obreras autónomas; el derecho de huelga; la abolición parcial de la censura; el acceso de los trabajadores a los medios de comunicación; una libertad religiosa más amplia; la puesta en libertad de los presos políticos de la *inteligentsia*, repre-

saliados por haber manifestado su solidaridad con los huelguistas; el reconocimiento, por parte de la burocracia, de que existen unos privilegios materiales exorbitados y su impugnación parcial. Se trata de una victoria de alcance verdaderamente histórico de la clase obrera polaca e internacional.

A pesar de todos los esfuerzos de la burocracia por fragmentar, dividir y sofocar las huelgas, mediante la concesión, desde el principio, de importantes mejoras económicas a los trabajadores de las primeras fábricas que se declararon en huelga; mediante el bloqueo de toda información, otorgando a unos lo

que se negaba a otros y tratando desesperadamente de evitar toda centralización de las huelgas, los trabajadores polacos han puesto de manifiesto reiteradamente una solidaridad y una capacidad de organización de clase realmente notables.

La huelga empezó en la fábrica *Ursus*, que ya había encabezado la lucha de 1976. Con la ayuda, al principio, de una red de correspondientes organizada a partir de las huelgas de 1970 y 1976, y vinculada al periódico *Robotnik* —que, sin embargo, se limitaba a divulgar las informaciones sobre los éxitos obtenidos por las primeras huelgas—, y posteriormente, de comités obreros semiclandestinos



Sede de "Solidarnosc" en Gdansk.

Polonia

de movilización, semitoleraos y que aparecieron espontáneamente en varias fábricas, el movimiento se extendió progresivamente de una zona industrial a otra.

A partir del 17 de julio, la huelga de los ferroviarios de Lublin (¡a 60 km. de la frontera soviética!) adquirió la amplitud de una huelga casi general, arrastrando a 17 empresas y paralizando toda la vida económica.

Cuando la oleada de huelgas llegó a los puertos del Báltico, es decir, al sector con más experiencia de la clase obrera, alcanzó un nivel superior de organización y politización. Aparecieron los comités de huelga interempresas (MKS). El de la región de Gdansk-Gdynia-Sopot agrupaba a unos 800 delegados de 500 empresas, y estaba permanentemente reunidos en los astilleros *Lenin*. Por su grado de organización y de control de la zona urbana, alcanzó el umbral de un auténtico consejo obrero.

El ejemplo de los MKS se propagó por numerosas regiones. En la Alta Silesia, que se sumó a la lucha más tarde, los huelguistas, conscientes del lugar decisivo que ocupan los mineros en la vida económica de Polonia (las exportaciones de carbón traen la mayor parte de las divisas al país), formaron un MKS que englobaba a 72 empresas y lograron, el 4 de setiembre, una victoria aún más sonada que la de Gdansk.

Los 21 puntos de la lista de reivindicaciones del MKS de Gdansk-Gdynia-Sopot fueron un modelo para las plataformas reivindicativas de otras regiones: No cabe duda que habría sido posible la centralización de todos los MKS del país en un único comité central de huelga.

Además, los huelguistas y sus dirigentes mostraron un admirable sentido de la táctica, valoraron con realismo la relación de fuerzas y tuvieron en cuenta la naturaleza misma de la burocracia. No cayeron en ninguna provocación. Convirtieron las fábricas en auténticos bastiones obreros, negándose a negociar fuera de ellas, evitando los choques callejeros o las negociaciones en los locales del partido o de la administración del Estado.

La autoorganización, la democracia de masas y el sentido de la táctica se complementaron lógicamente. La negociación se hacía bajo el control de los huelguistas, que en amplias asambleas masivas examinaban críticamente cada paso a dar, en un debate democrático sin cortapisas.

Los huelguistas se negaron además a mantener la reivindicaciones que no habría podido conceder la burocracia sin cometer un suicidio inmediato o provocar la ruptura abierta con el Kremlin. Esta táctica tenía en cuenta el hecho de que, si bien la huelga contaba con todas las simpatías, sólo una minoría de la clase obrera participaba directa y activamente en ella. Se trataba de consolidar la posible autoorganización de masas mediante una victoria que se podía arrancar a la burocracia sin precipitar un enfrentamiento decisivo.

Las cifras son harto elocuentes en cuanto a



El Secretario General del POUP, Kania.

los resultados de esta táctica. Mientras que el número total de huelguistas no superó los dos millones, el número de afiliados de los sindicatos autónomos y autogestionados *Solidarnosc* ya suma el doble. Así, gracias a su combate ejemplar de julio y agosto de 1980, la clase obrera polaca ha alcanzado un grado de autoorganización superior al que logró durante la misma huelga.

2. Esta victoria se explica fundamentalmente por:

- la modificación de la relación de fuerzas sociales en Polonia, con el surgimiento de la clase obrera como clase social ampliamente mayoritaria en el país, la fuerte disminución del peso del campesinado y de la pequeña burguesía en comparación con el que ejercía aún en 1956, la extensión de la industrialización y de la urbanización, el aumento del nivel cultural y de la cualificación del proletariado, etc.;

- la aparición, en el seno de la clase obrera, de un sector de militantes de vanguardia probados y aguerridos en las luchas antiburocráticas de 1970, 1976 y 1980, que han perdido gran parte de las ilusiones que tenían en las posibilidades de una autorreforma de la burocracia, ilusiones aún presentes, y con fuerza, en 1956 (experiencia Gomulka) y 1970 (experiencia Gierek);

- el atolladero económico en que se encuentra la burocracia, lo que ha limitado mucho su capacidad de maniobra. Tras la crisis de 1970, el régimen provocó primero un *boom* económico, alimentado mediante un creciente endeudamiento con los países capitalistas, con miras a utilizar el aumento del nivel de vida de los obreros como base para una recuperación del control sobre las instituciones y organizaciones sociales, ante todo

sobre los sindicatos, es decir, a restablecer un control estable sobre la clase obrera. Sin embargo, el despilfarro, la dejadez y la corrupción de la burocracia, el frecuente doble destino de las inversiones, "el egoísmo regional y de cada empresa", que son inevitables cuando no existe un verdadero control desde abajo, así como las incidencias de la crisis económica capitalista, no previstas por la burocracia, todo ello ha desembocado en unas dificultades económicas (particularmente en relación al abastecimiento de productos alimenticios y bienes de consumo para los obreros) que el régimen ha intentado resolver en dos ocasiones, en 1976 y 1979-80, mediante una disminución del nivel de vida de la clase obrera, a la que el proletariado ha venido respondiendo con energía reciente;

- el fracaso de las maniobras burocráticas destinadas a dividir a la oposición antiburocrática y la ausencia de una alternativa política, presentada por una fracción del POUP, que resulte creíble a los ojos de las masas. En 1968, la oposición estudiantil e intelectual que se había solidarizado con la "Primavera de Praga", se quedó muy aislada de la clase obrera. En cambio, en 1970-71, la revuelta obrera no encontró prácticamente ningún eco en la *intelligentsia*. Cuando quedó socavado el prestigio de Gierek, por las huelgas de 1976 y las concesiones que tuvo que hacer a los trabajadores, se recompuso una oposición política intelectual que de hecho conquistó el derecho de expresión semilegal (KOR, *Robotnik*, DIP, intelectuales católicos, grupos nacionalistas, etc.). En el seno del mismo POUP y en su periferia reaparecieron pequeñas tendencias de oposición, aunque incapaces de presentar una plataforma o a dirigentes con un prestigio de masas. Mientras que numerosas tendencias de la oposición intelectual y la Iglesia estaban dispuestas a evitar cualquier enfrentamiento directo con la burocracia, de evitar cualquier lucha masiva, contentándose con una política de advertencias y presiones sobre la burocracia, la gigantesca ola de luchas obreras del verano de 1980 ha modificado cualitativamente la situación. De hecho ha unificado a la inmensa mayoría de las masas populares de la ciudad y del campo en el apoyo de la huelga obrera.

Así, mientras que prácticamente todo el país tiene conciencia de la profunda crisis que sacude a la sociedad, es la clase obrera la que ha conseguido, luchado, la hegemonía social de hecho en el seno de la oposición antiburocrática. Si hacemos abstracción de las primeras semanas que siguieron a la invasión de Hungría por las tropas soviéticas, en noviembre de 1956, es la primera vez que se produce en un Estado obrero burocratizado un fenómeno de esta amplitud y esta duración.

Esto es todo un presagio de la revolución política futura en la URSS, donde la relación de fuerzas sociales es comparable a la de Polonia, si es que no es aún más favorable.



Lo que está en el orden del día en estos países, no es la contrarrevolución social, la restauración del capitalismo, que cuenta con unas bases sociales minúsculas o inexistentes en estos países. Lo que está en el orden del día es la sustitución de la dictadura totalitaria de la burocracia por una gestión del Estado y de la economía en manos de la propia clase obrera, unificada sobre la base de la autoorganización democrática, es decir, de la democracia socialista, que no pone en tela de juicio las bases económicas del Estado obrero, como han vuelto a confirmar admirablemente —después de Hungría y Checoslovaquia—, con su comportamiento, los huelguistas polacos a lo largo de todo el verano de 1980. El objetivo de los trabajadores polacos no es otro que la democracia obrera y el socialismo.

La combinación de la crisis agravada del capitalismo y del estalinismo, la feroz resistencia que pone de manifiesto la clase obrera de la Europa capitalista frente a la ofensiva de austeridad del Capital, la caída de las dictaduras del sha y de Somoza bajo los golpes de gigantescas movilizaciones de masas, las crecientes divisiones interburocrá-

ticas a escala internacional, las críticas eurocomunistas al Kremlin, las repercusiones a largo plazo de la intervención soviética en Checoslovaquia, el atasco de la intervención soviética en Afganistán, en suma, el conjunto de factores que marcan el cambio de la relación de fuerzas internacional en detrimento del imperialismo y del capitalismo, junto a los nuevos avances de la revolución mundial, hacen más difícil una intervención soviética en Polonia.

Aunque sea irresponsable excluir la posibilidad de esta intervención, resulta mucho más difícil que en el pasado, y la burocracia la pagaría a un precio mucho más elevado, incluso dentro de la propia Unión Soviética. Todo este contexto internacional ha favorecido la acción de masas de los trabajadores polacos y su voluntad de arrancarle a la burocracia unas concesiones reales.

3. Pero si bien los trabajadores polacos han logrado una gran victoria, están lejos de haber conseguido una victoria total y definitiva sobre la burocracia. Esta sigue controlando el aparato de Estado. Sigue con-

trolando el sobreproducto social y, a través de este, todos los sectores decisivos de la actividad social. El poder de la burocracia no ha sido derribado. Ha sido contestado, sacudido, obligado a hacer concesiones, que hace poco aún eran inimaginables. Pero sigue siendo real y fuerte.

Sin embargo, estas concesiones arrancadas por la clase obrera polaca son, a la larga, incompatibles con el mantenimiento del poder de la burocracia. La burocracia no es una nueva clase dominante. No desempeña ningún papel económicamente necesario o insustituible en la sociedad. La clase obrera es perfectamente capaz de ejercer las funciones dirigentes que aquella le ha usurpado. La dictadura burocrática sólo puede ser ejercida de forma duradera sobre la base de la pasividad y la atomización política de la clase obrera. Si esta impugna de forma continua y masiva la gestión burocrática, esta casta se verá condenada a desaparecer.

De ahí que la aparición de un movimiento obrero autónomo de la burocracia y organizado masivamente, que engloba a millones de trabajadores, constituye una amenaza de muerte para la dictadura buro-

Polonia

crática. Ambos no pueden convivir durante mucho tiempo. O bien la clase obrera autónoma llega a abolir, en el transcurso de una serie de enfrentamientos, el poder político de la burocracia, realizando una política antiburocrática victoriosa, y estableciendo el poder político de los consejos obreros democráticamente elegidos y centralizados; o bien la burocracia polaca, fuertemente respaldada y espoléada en esta dirección por la burocracia soviética y la de la mayoría de sus demás "países hermanos", reabsorbirá, eliminará y liquidará una tras otra todas las concesiones fundamentales arrancadas por los trabajadores el 31 de agosto de 1980.

En previsión de estos futuros enfrentamientos, en el seno de la oposición política en Polonia, de la clase obrera e incluso de la vanguardia que dirigió la huelga, hay corrientes que se esfuerzan por evitarlos, tratando de limitar la actividad del sindicato autónomo autogestionado a la estricta defensa de los intereses económicos inmediatos. La burocracia, a su vez, en el mismo momento en que ha lanzado intentos de corrupción y de integración, para limitar y liquidar las principales conquistas de agosto de 1980, centra sus esfuerzos políticos en el mismo sentido: el sindicato autónomo debería ser un organismo dedicado exclusivamente a defender los intereses particulares de sectores de la clase obrera en la esfera del consumo, y punto.

Este intento está condenado al fracaso. En una sociedad basada en la nacionalización de los principales medios de producción y de intercambio, cualquier cuestión económica se transforma automáticamente en un problema político. Cualquier reivindicación de clase en la esfera del consumo plantea inmediatamente problemas de reorganización de la producción, el replanteamiento de la política económica, la revisión del plan de distribución de la renta nacional y del producto nacional entre los distintos grandes capítulos (fondo de consumo y fondo de inversiones; fondo de consumo productivo y fondo de consumo improductivo; fondo de inversiones en la industria y en la agricultura, en la producción y en los servicios —distribución, transportes, etc.—; fondo de consumo individual y fondo de consumo social etc.).

Los trabajadores polacos son perfectamente conscientes de las grandes desproporciones originadas en la economía por las inversiones incoherentes y absurdas que se llevan a cabo, es decir, por el desorden, el abandono, la corrupción y la arbitrariedad de la planificación burocrática que escapa al control de las masas. Al argumento de que "cualquier aumento de los salarios que no venga acompañado de un aumento de la producción desemboca automáticamente en la inflación, es decir, no incrementa el nivel de vida" han dado las respuestas pertinentes.

En primer lugar, no sólo son los obreros los que consumen, sino también los burócratas y los pequeño burgueses acomodo-

dados. Reduciendo la proporción de estos, atacando los privilegios y aumentando la igualdad, es posible acrecentar el consumo de los obreros, incluso sin aumentar la producción.

En segundo lugar, el aumento de la producción no se subordina necesariamente a un nuevo aumento de las inversiones pagado por la reducción del consumo de los obreros. Puede asegurarse mediante una mejor utilización de los recursos productivos claramente subutilizados, mediante un mejor equilibrio entre la producción agrícola y la producción industrial, mediante la eliminación de los abusos de la gestión burocrática, que provocan la indiferencia de los trabajadores con respecto a la producción.

Esta manera de plantear las causas de la crisis económica que sacude a Polonia empuja a la clase obrera por la vía del control obrero, reivindicación que ya ha empezado a plantearse en numerosas ciudades y empresas. En otras palabras, en el marco de un Estado obrero como Polonia, cualquier reivindicación económica inmediata de clase desemboca en la formulación de una política económica alternativa a la de la burocracia. Esto ya se puso de manifiesto en la 21 reivindicaciones iniciales del MKS de Gdansk-Gdynia.

No cabe duda que es demasiado pronto para saber si la formulación de estas propuestas alternativas en el terreno de la política económica pasará por los sindicatos u otros organismos, como los consejos de empresa, cuya existencia "legal" se mantiene en Polonia gracias a la legislación de 1945 y de

1956, si bien estos consejos apenas existen como órganos autónomos de la clase obrera. En el marco de estos organismos, la pluralidad de propuestas en el terreno de la política económica y social desemboca inevitablemente en la pluralidad de tendencias y partidos políticos.

Pero independientemente de cuál sea el órgano que asuma y exprese la voluntad obrera de elaborar una política económica distinta a la de la burocracia, es esta exigencia en sí misma, y no la elección de algún organismo específico, la que es incompatible con el poder de la burocracia. En un estado obrero, toda organización obrera autónoma de masas se ve forzada inevitablemente a formular esta exigencia. De ahí que el conflicto entre las estructuras nacidas del movimiento de agosto de 1980 y la dictadura burocrática es inevitable. Cada una se verá forzada a eliminar a la otra.

Inmediatamente después de la firma de los acuerdos del 31 de agosto y del 4 de setiembre, la burocracia ha intentado minimizar las conquistas de la huelga. Ha procedido a la obstrucción sistemática de la formación de los nuevos sindicatos autónomos autogestionados más allá de los puertos del Báltico. En todas partes, incluso en Gdansk, ha tratado de poner trabas, y hasta de evitar que se publique una prensa obrera controlada por los propios trabajadores. Ha multiplicado sus maniobras de división y los intentos de integrar a los nuevos sindicatos, ya sea presionando a los trabajadores con la amenaza de que perderían sus ventajas sociales si se desafiliaban de los sindicatos "oficiales", ya



Kuron, Walesa.

sea intentando transformar estos en parte integrante de los nuevos sindicatos autónomos, aunque con los antiguos dirigentes, nombrados desde arriba, a la cabeza.

Esto no son más que las primeras escaramuzas. Habrá nuevos enfrentamientos, bastante más duros, e intervendrá la represión.

Hasta ahora, los trabajadores han respondido inmediatamente, amenazando con ir a la huelga, o con declararse ya en huelga, para imponer el respeto de los acuerdos de finales de agosto y comienzos de setiembre.

4. Lo que proporciona mayor lentitud y complejidad al proceso de ataque al poder político de la burocracia es la contradicción entre la capacidad combativa, la confianza en sí misma y la capacidad de organización de la clase obrera por un lado, y la desigualdad e insuficiencia de su conciencia de clase por otro. El desarrollo desigual del ascenso obrero en Europa oriental opera en el mismo sentido. Estas son sin duda las principales contradicciones de la crisis actual de Polonia, sin las que el poder de la burocracia habría sido derribado de un solo golpe.

Esta contradicción se pone de manifiesto en dos niveles. En primer lugar, en el seno del propio sindicato autónomo autogestionado hay que distinguir al menos entre tres grupos de trabajadores: los que experimentaron en agosto-setiembre las formas de lucha y de autoorganización más avanzadas (ante todo los trabajadores de los puertos del Báltico y de la Alta Silesia, pero sin duda también los de *Ursus* y algunas otras fábricas avanzadas); los que participaron en las huelgas de julio-setiembre sin conocer, sin embargo, las formas de autoorganización más avanzadas; y los que no fueron a la huelga en el verano de 1980 y sólo se unieron posteriormente al nuevo sindicato, particularmente el grueso de los trabajadores de Varsovia y de Lodz, las dos principales zonas industriales del país. El peso de la vanguardia obrera, y particularmente el de los dirigentes obreros reconocidos como tales por las amplias masas, es notablemente diferente en cada una de estas tres categorías.

Además, para la gran mayoría de trabajadores polacos existe un contraste visible entre un instinto de clase y una conciencia de clase elemental, que son notables, y una conciencia política muy baja. En otras palabras: una parte importante del proletariado polaco aún sufre una confusión político-ideológica pronunciada. Esto se pone de manifiesto en la fuerte influencia de la religión y del clero católicos entre los trabajadores, en la presencia de corrientes nacionalistas pequeño-burguesas, en la influencia pronunciada de tendencias anarcosindicalistas a la izquierda del movimiento obrero autónomo que está reconstruyéndose.

La causa fundamental de esta confusión político-ideológica no estriba en modo alguno en las presiones del medio pequeño-burgués (campesinado) de la propia Polonia ni en la presión del medio capitalista circundante. Al contrario, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando estas presiones eran mucho más fuertes que ahora, la clase obrera polaca era una de las más avanzadas de Europa desde el punto de vista de su nivel de conciencia política.

La tradición política de clase del movimiento obrero polaco es de las más impresionantes y de las más gloriosas. Entre los obreros judíos de Polonia nació la primera organización socialista de la Rusia zarista, que dió nacimiento al POSDR y con él al bolchevismo. En la época de la II Internacional, el PSDRPL de Rosa Luxemburg formó cuadros socialistas revolucionarios que posteriormente fertilizaron el comunismo en por lo menos tres países. Junto con los bolcheviques rusos y los espartaquistas alemanes, los internacionalistas polacos estuvieron a la vanguardia de Zimmerwald y de la lucha contra el socialpatriotismo. En el periodo de 1918-1925, el PC polaco era uno de los partidos comunistas más influyentes de Europa.

La causa fundamental de la enorme confusión político-ideológica que reina actualmente en el seno de la clase obrera polaca, reside en los efectos desastrosos del estalinismo en el movimiento obrero polaco durante los últimos cuarenta años. El estalinismo empezó destruyendo la integridad política y moral del PC con el apoyo que acordó al golpe de Estado de Pilsudski, en 1935, prosiguiendo esta obra de destrucción mediante un sectarismo fraccional ciego que aisló progresivamente al partido de la clase obrera. A continuación disolvió formalmente el PC y eliminó físicamente a casi todos sus cuadros dirigentes en el periodo 1937-1941. Después, colocó en el poder a burócratas mediocres, corrompidos e incondicionales del Kremlin, la mayoría venidos al amparo de un ejército extranjero e identificados por las amplias masas con los agentes del extranjero.

Finalmente, en el transcurso de los últimos 30 años ha "educado" sistemáticamente al proletariado en un espíritu chovinista, borrando la verdadera tradición internacionalista del movimiento obrero polaco, aplastando cualquier manifestación de autonomía o de actividad crítica por parte de los trabajadores, convirtiendo a partir de 1956 la actividad de la jerarquía católica en única forma de oposición semilegal de masas en el país, aunque asestando a la Iglesia miles de golpes bajos.

¿Resulta extraño que en estas condiciones, en que el marxismo se identifica con un dogma de Estado, la religión aparezca con mayor atractivo a los ojos de las masas que no cualquier ideología que parezca conformista con respecto a la detestada dictadura burocrática?

Básicamente, esta confusión ideológica implica que si la clase obrera ya ha conquis-

tado la hegemonía social en el seno de la oposición antiburocrática, que engloba a la inmensa mayoría de la nación polaca, aún no ha conquistado la hegemonía política de clase en el seno de esta oposición. La evolución política del país en los meses y años que vienen, el resultado de los enfrentamientos con la burocracia, las posibilidades de éxito de la revolución política antiburocrática en ciernes, dependen en buena medida de la capacidad de la clase obrera para reconquistar, después de su independencia organizativa, su independencia política de clase, es decir, una concepción clara de la alternativa de democracia socialista frente a la dictadura burocrática.

Esta reconquista recibirá enormes energías de la organización de masas que está construyéndose, de la experiencia de lucha que le acompaña y le acompañará en cada fase sucesiva. Pero no podrá ser un proceso puramente espontáneo. No cabe duda que la presencia de una corriente marxista revolucionaria implantada en la clase obrera, capaz de entablar diálogo con las masas, apoyando todas sus reivindicaciones y todas sus luchas y manteniendo con firmeza el programa fundamental, desempeñará un papel fundamental a este respecto.

Con miras a combatir la influencia nefasta de ideologías católicas y pequeño-burguesas en el seno de la clase obrera, los marxistas revolucionarios deberán comprender ante todo las circunstancias específicas en que se produce el despertar político del proletariado polaco. Esto otorga una importancia particular a que todos los que se reclaman del socialismo revolucionario, del marxismo y del comunismo auténtico, asuman la defensa intransigente de los derechos democráticos más amplios para las masas trabajadoras. No sólo defenderán el derecho de huelga y la libertad de asociación, incluida la asociación política, sino también la libertad de reunión, de prensa y de religión, sin ninguna cortapisa.

Lejos de criticar el acceso de la Iglesia a la radio y televisión, impuesto por los huelguistas de Gdansk, o de oponerse a él, lo saludarán como un paso adelante de cara a la eliminación del monopolio de la burocracia sobre los medios de comunicación. Pero reclamarán que lo que se concede a justo título a la corriente católica, también se conceda al conjunto de las corrientes presentes en el seno de la clase obrera y de la oposición: a los sindicatos autónomos, al KOR, a las corrientes sindicales, a las distintas corrientes socialistas y comunistas de oposición.

Combatir la religión y al clero con medios administrativos y represivos es totalmente contraproducente y no hace sino reforzar su peso entre las masas. La única lucha eficaz contra estas ideologías reaccionarias pasa por el debate ideológico y político abierto, obligando a la jerarquía a pronunciarse sobre los grandes problemas políticos del momento, en que sus posturas —como el llamamiento al orden del cardenal Wysinski en agosto, como las posturas adoptadas por el clero ante

Polonia

el aborto y el control de la natalidad—terminarán reduciendo su influencia en el seno del proletariado y de la juventud, siempre que existan otras alternativas importantes al margen del stalinismo.

Por lo demás, las acusaciones relativas al papel de la Iglesia o de otras fuerzas pequeño-burguesas entre los huelguistas y la oposición antiburocrática son sumamente hipócritas, máxime cuando proceden de los portavoces o apologistas declarados o vergonzantes de la dictadura burocrática, que, a su vez, encuentra fácilmente un lenguaje político común con dichas fuerzas. Paradójicamente es la apelación al interés nacional, incluso al nacionalismo, es la negativa a apoyarse en criterios de clase claros y precisos, lo que le ha permitido al ala más flexible de la burocracia tener cierto eco tanto en la *inteligentsia* y en la jerarquía católica como en una parte de los huelguistas en agosto de 1980. Pero cuanto más progresen la organización autónoma y la confianza de la clase obrera en sí misma, tanto más se descompondrá esta base de “diálogo” entre los trabajadores.

5. Hay otras dos clases sociales que ejercen un peso en la sociedad polaca post-capitalista, aunque bastante reducido en comparación con el del proletariado: el campesinado y la pequeña burguesía urbana.

El campesinado polaco es mucho más débil que en 1939 ó 1956. Después de haber logrado que se pusiera fin a la colectivización forzosa y se volviera a la propiedad privada en 1956, hoy en día está muy diferenciado. La mayoría de pequeños campesinos es muy pobre y sólo dispone de tierras de 1 a 1,5 hectáreas, explotadas de modo arcaico, sin tener acceso a los instrumentos mecánicos de trabajo. Este campesinado ya ha protagonizado importantes luchas, como la huelga de la leche en 1978. Además, empieza a organizarse.

Esta masa de pequeños campesinos comprende el motivo de las huelgas obreras del verano de 1980 y se ha solidarizado abiertamente con ellas. Ha empezado ya a crear organizaciones del mismo tipo que las de la clase obrera: sindicatos campesinos autónomos y autogestionados, que podrían elaborar soluciones, en común con los trabajadores organizados, para los problemas más acuciantes de abastecimiento de las ciudades con víveres y de los campesinos pobres con productos industriales.

La colaboración entre las organizaciones autónomas autogestionadas, en el futuro inmediato, abonaría el terreno para una sólida alianza entre obreros y campesinos a nivel económico, y el día de mañana para la victoria de la revolución política, mediante la creación de cooperativas campesinas basadas en la adhesión libre y no forzosa, estimulada por la introducción masiva de maquinaria agrícola moderna en las cooperativas, asegu-

rando así a sus miembros, desde el principio, un nivel de vida y de cultura notablemente más alto que su miseria actual.

De este modo, los lazos a tejer inmediatamente entre los sindicatos obreros autónomos y los sindicatos autónomos de los campesinos pobres, desembocarían en la integración de consejos obreros y consejos de campesinos pobres en la Polonia socialista y democrática del mañana. La presencia en el campo de un semiproletariado de 3 a 4 millones de personas —pequeños campesinos que al mismo tiempo son obreros asalariados que trabajan en la ciudad— establece un vínculo social natural entre ambas clases, lo que facilitará la aparición de sindicatos campesinos primero, y de consejos campesinos después.

Junto a esta masa de pequeños campesinos pobres hay una minoría de campesinos acaudalados, que se han enriquecido bastante durante los últimos 25 años. Disponen de 10 a 25 hectáreas de tierra por finca, lo que les permite practicar de modo rentable una agricultura moderna con múltiples medios mecanizados. Este campesinado acomodado saludó las reformas de 1956 como una gran victoria. Está muy ligado tanto a la burocracia (en la que se integra sobre todo a nivel local) como a la jerarquía católica, entre las que teje en cierto modo un lazo social intermedio. Este campesinado es el que detenta el monopolio de los excedentes de víveres, tanto para abastecer a las ciudades como para alimentar las exportaciones.

Es urgente que la clase obrera se libere de esta dependencia, mediante la creación de un sector cooperativo moderno, con alta productividad, que puede y debe surgir de la alianza reconstituida entre el proletariado y el campesinado.

El rápido desarrollo de la industrialización, de la urbanización y de la alfabetización ha comportado el surgimiento de una capa pequeño-burguesa intelectual mucho más amplia que en el pasado, a la que hay que añadir, sobre todo después de las reformas de 1956 y de 1970-71, una capa de miniempresarios independientes en el sector servicios, que se ha enriquecido tan rápidamente como los campesinos acomodados.

Mientras que esta última capa se encuentra en simbiosis con la burocracia, sobre la base ante todo de la corrupción y del tráfico de influencias, la primera guarda unas relaciones mucho más contradictorias con la dictadura. Si bien en repetidas ocasiones ha puesto de manifiesto (en 1956, en 1968, en 1970-71 y en 1976) un espíritu de fronda o de oposición crítica más violenta, que se ha expresado de forma particularmente clara en el campo del arte (cine, teatro, carteles, literatura) y de algunas ciencias sociales, es especialmente sensible a la argumentación nacionalista del poder, pues sólo tiene unos lazos muy sueltos con el marxismo.

Así, esta capa acepta una serie de axiomas políticos de la burocracia, tendiendo incluso

a considerar, entre 1977 y 1980, que era inevitable una política antiobrera de austeridad y cediendo gustosamente al chantaje de la “intervención soviética”. Su influencia se ha hecho notar incluso en el seno del KOR. Pero la experiencia tonificante de la gran huelga obrera del verano 1980 y de su éxito —una tan imprevista como el otro— provocará sin duda una nueva diferenciación en el seno de la *inteligentsia*. La gloriosa tradición del marxismo polaco, destruida por el estalinismo, renacerá con fuerza, de esto podemos estar seguros.

6. La burocracia polaca ha sufrido una profunda sacudida con las huelgas y se ha dividido cada vez más en torno a la respuesta a dar. Esta división se transformó en pánico cuando hizo aparición el espectro de una huelga general nacional. La capitulación del 31 de agosto y del 4 de setiembre sólo se explica por este pánico.

Detener a cualquier precio un movimiento al que ya no se podía reprimir, ni contener, ni dividir, con miras a recuperar después la mayor parte de las concesiones, una vez el movimiento entre en reflujó: esta es la táctica por la que ha optado finalmente la burocracia, no sin proceder antes a una profunda reorganización en la cúspide (sustitución de Gierek por el descolorido Kania). Los problemas tácticos cada vez más complejos que le planteará a la burocracia un movimiento obrero autónomo de masas que en absoluto está en reflujó, sino en plena expansión, dan lugar a múltiples divisiones nuevas y a numerosos reagrupamientos en el seno de la dirección del POUP.

Al principio, la burocracia soviética se irritó ante la manifiesta incapacidad de su aliado polaco para restablecer el control sobre la clase obrera, y después se inquietó profundamente ante la envergadura de las concesiones que tuvieron que hacer las autoridades polacas a los huelguistas. Teme con razón las repercusiones internacionales de estas concesiones en las demás “democracias populares”, y hasta en la propia URSS.

Así, su reacción se produjo a varios niveles simultáneamente: silenciando tanto las huelgas como la extensión que conocieron, las reivindicaciones de los huelguistas y el contenido de los acuerdos del 31 de agosto y 4 de setiembre; calumniando groseramente a los huelguistas, los MKS y sobre todo a los sindicatos autónomos autogestionados, diciendo que están manipulados por “elementos antisociales infiltrados”, lo que constituye al mismo tiempo una calumnia contra la propia clase obrera polaca (4 millones de trabajadores, en plena democracia obrera, dejándose manipular por el enemigo!); haciendo el chantaje abierto con la ayuda económica y un chantaje apenas velado con la intervención militar; tratando de “juntar” al conjunto de las burocracias de Europa oriental tras una línea común que bloquee el “virus polaco”.

Hasta ahora ha conseguido algunos tantos al respecto. Pese a algunas veleidades de "independencia" por parte del régimen de Kadar en Hungría, las burocracias de las "democracias populares", todas ellas amenazadas por un despertar de su propia clase obrera estimulado por el ejemplo polaco, se han alineado con el Kremlin. Ejercen una presión conjunta sobre Varsovia, en pro de una "normalización" gradual de la situación.

Es cierto que la burocracia de la RDA, cuya población había sido ampliamente informada sobre los acontecimientos de Polonia gracias al acceso a la radio y televisión de Alemania Occidental, no pudo ocultarle al proletariado germano-oriental el alcance de las reivindicaciones de los trabajadores polacos ni el de la victoria que lograron. Pero esto no le impide levantar la voz contra "los elementos antisocialistas que teledirigen al MKS", al igual que los burócratas de Praga, Sofía y Bucarest.

Únicamente la burocracia china ha observado un comportamiento distinto, previendo sin duda, erróneamente, una intervención militar del Kremlin en Polonia y con la voluntad de preparar a la población china para una amplia movilización frente a tal agresión. Este error de cálculo ya se ha convertido en *boomerang*: los trabajadores chinos han reclamado en numerosas empresas unos derechos análogos a los que acaban de obtener los huelguistas polacos.

De momento, el Kremlin juega aún la carta de la recuperación "por etapas" del control sobre la clase obrera polaca por la burocracia de Varsovia, preparando al mismo tiempo el terreno para una solución más radical. Cuanto más impotente resulte la burocracia polaca para detener el proceso de autoorganización y de politización de la clase obrera, tanto más repercusiones tendrá este ascenso en otros Estados obreros burocratizados, y tanto más fuerte será la tentación de una intervención militar. Esta sigue siendo técnica y políticamente posible mientras la revolución política no se desarrolle simultáneamente en varias "democracias populares" y el despertar de la actividad política de masas no afecte al propio proletariado soviético.

Pero la lógica de la crisis del estalinismo, de la crisis de la dictadura burocrática que sufren todos estos países, va precisamente en este sentido. Las primeras repercusiones directas de las huelgas polacas son modestas: huelga de los obreros de la *Reichsbahn* en la RDA (que viven en Berlín Oeste); movilizaciones de solidaridad de grupos de oposición y algunos núcleos de jóvenes en varios países de Europa del Este. Pero a medida que se vaya conociendo la existencia, el funcionamiento legal, el programa, el papel efectivo de los sindicatos autónomos autogestionados polacos, aumentará su atractivo en muchos sectores de la clase obrera de las "democracias populares" y de la URSS.

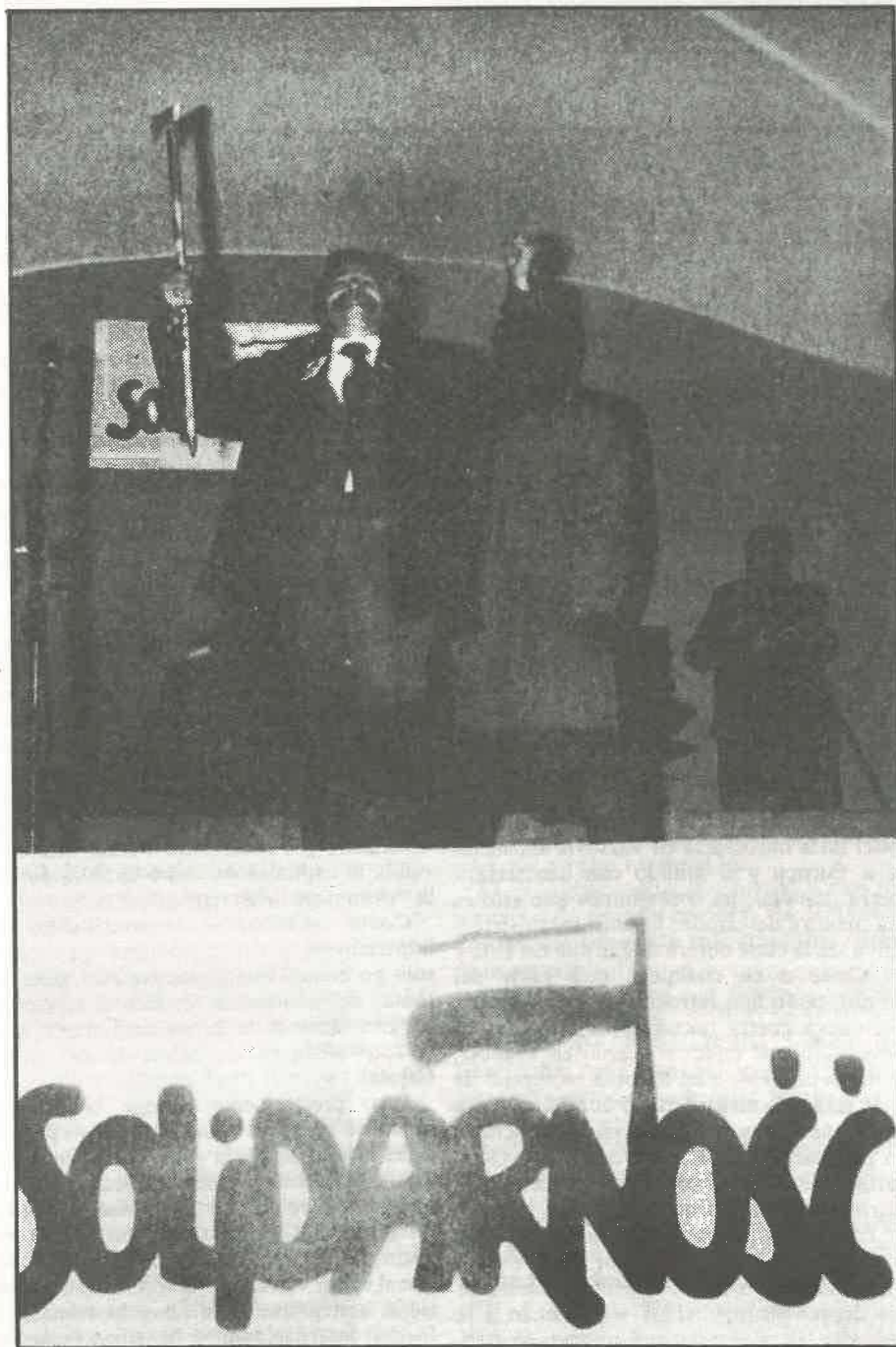
De ahí que el tiempo juegue a favor de la clase obrera polaca, siempre que no ceje su

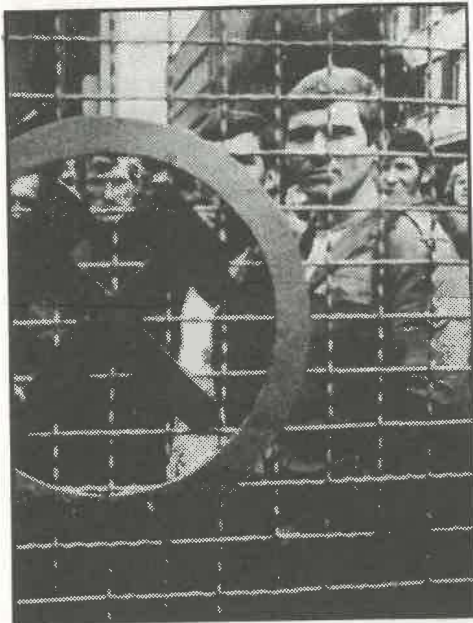
movilización ni su actividad de masas. La extensión internacional de este movimiento es la única garantía contra una intervención militar del Kremlin. De ahí que el verdadero internacionalismo proletario constituya actualmente una necesidad política evidente para la clase obrera polaca, cuya importancia debemos subrayar constantemente.

La burguesía de Europa capitalista, y el imperialismo en su conjunto, no se vieron menos atemorizados, ante el ascenso impetuoso de la clase obrera polaca, que los burócratas de la URSS y de las "democracias populares". Temen que el ejemplo polaco cunda en la clase obrera en sus propios países, el riesgo de que los trabajadores de

Europa Occidental, de América del Norte y de Japón respondan "a la polaca" a las medidas de austeridad del Capital.

Este miedo se combina con el de las burocracias sindicales y de los PS y PC, a que los trabajadores de los países capitalistas reclamen también unas estructuras de autogestión, es decir, la democracia sindical y comités de huelga democráticamente elegidos en las asambleas generales de los huelguistas. De ahí que al tiempo que prestaban un "apoyo" verbal a los huelguistas polacos y trataban de explotar las huelgas polacas con fines de propaganda anticomunista, todas estas fuerzas conservadoras —incluidos los dirigentes de los partidos llamados "euroco-





mente los preparativos de guerra imperialistas, no los que avanzan por la vía de la conquista y del ejercicio directo del poder por la clase obrera.

7 • La huelga y la victoria de dos millones de obreros polacos subrayan la importancia creciente que adquiere la revolución política antiburocrática en el proceso global de la revolución mundial. Confirman el peso cada vez más determinante que ejerce el proletariado en los tres sectores de la revolución mundial —la revolución permanente en los países semicoloniales; la revolución proletaria en los países imperialistas; la revolución política en los Estados obreros totalitarios.

Aportan un nuevo y cruel desmentido a todos los ideólogos que miden la historia con el calibre de sus decepciones personales y se ven tentados a decirle “adiós al proletariado”, porque el ritmo desigual de la revolución mundial no respeta un horario o unos esquemas preconcebidos. Después de mayo de 1968, después de más de diez años de combatividad ejemplar del proletariado italiano, después del magnífico ascenso del proletariado brasileño, después de las espectaculares insurrecciones urbanas de Nicaragua e Irán, las huelgas de Polonia confirman una vez más la ejemplar capacidad de autoorganización, la fuerza irresistible de millones de trabajadores en lucha unida y colectiva.

Esponáneamente, la clase obrera de los países capitalistas ha seguido con simpatía y entusiasmo crecientes el combate ejemplar de sus hermanos de clase de Polonia. A medida que se organiza el sindicato autónomo autogestionado, a medida que se afirma y defiende las conquistas de agosto-setiembre de 1980, a medida que se esfuerza por traducir en los hechos la capacidad de la clase obrera de formular una política económica y social alternativa a la de la burocracia, esta simpatía vendrá acompañada de una reflexión, de una nueva toma de conciencia sobre el verdadero rostro, la verdadera naturaleza del socialismo como alternativa válida al capitalismo, como sucedió durante la “primavera de Praga”.

Como adversarios irreconciliables del imperialismo y del capitalismo que somos, sólo podremos alegrarnos por ello, pues esta toma de conciencia creciente alimentará progresivamente la lucha antiimperialista y anticapitalista en los países donde reina el Capital.

Pero precisamente porque la principal amenaza que pesa sobre el “verano polaco” sigue siendo la de la represión apoyada en una intervención militar soviética; precisamente porque el “verano polaco” es parte integrante del ascenso mundial del proletariado, se trata de convertir esta simpatía universal en un verdadero movimiento de solidaridad activa que modifique la relación de fuerzas internacional en beneficio de la clase

obrera polaca.

Cuanto más fuerte sea este movimiento de solidaridad, tanto más difícil resultará la intervención represiva de la burocracia. La batalla se decidirá a nivel internacional. Y el movimiento obrero organizado, la clase obrera puede modificar ya la relación de fuerzas a nivel internacional, a favor de sus hermanos de clase polacos.

Particularmente en el movimiento sindical es posible tejer ya lazos de solidaridad con el movimiento obrero autónomo de Polonia. Hay que exigir a los sindicatos de los países capitalistas y a los sindicatos de los Estados obreros, donde haya la mínima posibilidad —sobre todo en Yugoslavia, en China y en Cuba—, que envíen delegaciones para **informarse** de la realidad sindical en Polonia, para informar honestamente a sus propios afiliados sobre lo que realmente son los sindicatos autónomos autogestionados de Polonia, para combatir las deformaciones de la información que proporciona la burocracia y la burguesía, cada una por su lado.

La información debe conducir al apoyo: los sindicalistas polacos necesitan ayuda en forma de consejos, ayuda técnica y financiera, ayuda para crear una prensa obrera independiente. El apoyo puede ir desde el hermanamiento entre secciones sindicales hasta el lanzamiento de vastas campañas de información sobre los que representa realmente la autoorganización del proletariado polaco.

Estas campañas de solidaridad sistemáticas revisten una importancia particular sobre todo en las confederaciones sindicales con fuerte influencia de los PC (CGIL en Italia, CGT en Francia, CCOO en España, CGTP en Portugal, diversas confederaciones sindicales en los países semicoloniales), para contrarrestar las presiones del Kremlin. Uno de los objetivos a perseguir es el del establecimiento de relaciones oficiales, de confederación a confederación, entre los sindicatos de un número creciente de países y la confederación sindical polaca *Solidarnosc*.

Al mismo tiempo, es importante proseguir la lucha contra las amenazas de guerra imperialistas, contra la OTAN, la introducción de los misiles *Cruise* en Europa Occidental, etc. En este contexto hay que oponerse a las maniobras anticomunistas de los jefes del Departamento Internacional de la burocracia sindical norteamericana de la AFL-CIO, al boicoteo reaccionario de las mercancías polacas por los dirigentes del sindicato de los estibadores en la costa oriental de los EE.UU., y a otras actividades proimperialistas, que sólo pueden perjudicar la causa de los obreros polacos.

Los militantes de la IV Internacional tienen una responsabilidad particular en el desarrollo de este movimiento de solidaridad. La IV Internacional se identifica totalmente con los objetivos que persiguen los trabajadores polacos. El desarrollo de la solidaridad con los trabajadores polacos es parte integrante de la construcción de la IV Internacional. □

munistas”— recibieron con alivio el final de las huelgas y la “prudencia” de los dirigentes de Varsovia al saber evitar un choque final.

Pero el apoyo de hecho que prestó la burguesía internacional al régimen de Varsovia no se limitó a declaraciones platónicas. Se materializó en más de mil millones de dólares entregados a la burocracia polaca para permitirle sortear las dificultades inmediatas del pago de los intereses de su deuda exterior, que es enorme, y proporcionarle un pequeño margen de maniobra, tanto frente a los trabajadores como frente a las presiones del Kremlin.

Pues tanto la burguesía como la burocracia temen como a la muerte una revolución política antiburocrática victoriosa en Polonia, que sería un poderoso estímulo para la revolución política en Europa del Este y en la URSS. Todo el edificio construido para fragmentar al proletariado europeo, proyectado en Yalta y Potsdam, amenazaría con hundirse.

A quienes dicen que el derrocamiento del poder de la burocracia en Varsovia amenazaría a Europa y al mundo con una tercera guerra mundial, les contestamos que esto es una mentira descarada. Cuanto más fuerte y activa sea la clase obrera de Europa del Este y del Oeste o en cualquier otra parte del mundo, tanto más retrocederá el espectro de una nueva guerra mundial. El proletariado movilizado por millones, como en Francia, en mayo de 1968, o en Polonia en verano de 1980: esta es la mejor barrera contra la lucra suicida de una guerra mundial. Una victoria del proletariado de Europa del Este u Occidental repercutirá profundamente en el proletariado norteamericano y soviético.

Los que emprenden el camino hacia la guerra, son los que alimentan, favorecen o toleran la carrera del armamento nuclear, los que desmovilizan, dividen y condenan a la pasividad al proletariado o apoyan abierta-

Fiat, primer tanto para la patronal.



UN golpe muy grave es el que acaban de asestar las direcciones burocráticas a los trabajadores de *FIAT*. Pocas veces ha cuadrado tanto el término de *traición* aplicado a la política de los reformistas.

Cuando Agnelli quiso despedir en masa, la movilización y la combatividad de "los de la *FIAT*" adquirieron la fuerza de los momentos álgidos del post-1969. Tan grande fue la determinación, que se quebró el aislamiento al que querían condenarlos los dirigentes sindicales.

Las masas trabajadoras italianas les dieron todo su apoyo. Cayó el gobierno Cossiga. Finalmente, cuando los burócratas quisieron imponer el vergonzoso acuerdo firmado con la patronal, el grueso de los bastiones obreros de la *FIAT* dijo: ¡NO!

No obstante, las direcciones sindicales se esfuerzan ahora por hacer creer que los acuerdos han obtenido el apoyo de una gran mayoría de trabajadores, intentando encubrir así su capitulación.

El viernes, 10 de octubre, cerca de 15 millones de asalariados pararon durante cuatro horas para apoyar a los trabajadores de la *FIAT*. En Milán y Turín, se celebran grandes manifestaciones. En Roma salen a la calle varias decenas de miles de personas.

El sábado, 11 de octubre, en Turín, los estudiantes proclaman su solidaridad. Los Consejos de Fábrica (CdF) de *Lingotto* y de *Lancia* se suman a la convocatoria de la

manifestación estudiantil, en la que participan todas las fuerzas políticas de la izquierda. En esta ocasión los estudiantes plantean también sus propias reivindicaciones, centradas en la problemática del empleo y de los servicios sociales. Unos 20.000 manifestantes se reúnen en la puerta n° 5 de *Mirafiori*, la principal factoría del grupo *FIAT*.

Esto prueba que la convergencia del movimiento estudiantil y del movimiento obrero es posible cuanto éste manifiesta su voluntad de movilización anticapitalista.

Tras la huelga general del día 10, las direcciones burocráticas renuncian a organizar acciones que rebasen el marco de las empresas. Este tipo de acciones habría permitido consolidar los lazos con amplios sectores de la población de Turín y otras ciudades. Sólo se mantienen los piquetes de huelga.

En este contexto, la dirección de la *FIAT* reúne en el *Teatro Nuovo* a empleados y mandos venidos de toda Italia. Agnelli cuida a sus acólitos: dietas de viaje y jornada pagada.

La FLM (Federación de Trabajadores Metalúrgicos, sindicato unitario) se cuida muy mucho de movilizar a los trabajadores frente a esta contraofensiva de la dirección, cuando el sector de mandos y empleados dispuesto realmente a hacerle el juego a la *FIAT* es hartamente reducido.

Contrariamente a lo que ha escrito la prensa, la manifestación por las calles de Turín,

protegida por la policía, no reunió a más de 10.000 personas. Apenas terminado el mitin, la concentración de amarillos se esfumó. Las pancartas, pintadas con esmero en las oficinas de la empresa, se quedaron allí amontonadas.

¡De acuerdo con los despidos!

En la noche del martes, la dirección sindical, que busca un pretexto para justificar la marcha atrás, evoca la "movilización" de los mandos y empleados para firmar un acuerdo con la patronal, que en realidad no hace otra cosa que aceptar los despidos.

En el primer punto, el acuerdo señala que las cartas de despido enviadas hasta entonces quedan anuladas; esta es la concesión formal de la patronal.

El segundo punto, en cambio, establece que del 6 de octubre de 1980 hasta el 31 de diciembre de 1981, 23.000 trabajadores quedarán asignados a la "*cassa integrazione*" renovable (paro técnico, con el 90% del salario).

Hasta entonces, el sindicato había rechazado esta medida y proponía que se estableciera un sistema rotativo de paro técnico. De este modo quería evitar una división entre los trabajadores con empleo y los demás. Se oponía a que fuera la patronal quien elaborara la lista de trabajadores asignados al paro técnico, con el fin de proteger a los cuadros

sindicales y a los afiliados. La aceptación del acuerdo actual implica la renuncia a estas exigencias.

El acuerdo comprende aún otra serie de medidas: estimulación de la jubilación anticipada y de la baja voluntaria, bloqueo de la contratación, traslado de trabajadores dentro de las factorías FIAT de toda la región piemontesa, cursos de reciclaje para los trabajadores asignados a la "cassa integrazione".

El 31 de junio de 1981, según marchen la producción y las ventas del grupo FIAT, y teniendo en cuenta el número de bajas voluntarias y jubilaciones prematuras, la dirección se planteará la reintegración de los trabajadores en paro técnico. Con ocasión de las reuniones trimestrales entre la patronal, la oficina de empleo regional y los sindicatos, se examinará la situación del mercado de empleo. La FIAT afirma que el 31 de junio de 1983 se planteará la reintegración de los trabajadores que aún se encuentren en paro técnico.

Frente a la resistencia obrera, resultaba imposible que las direcciones sindicales aceptaran medidas directas e inmediatas de despido. Sin embargo, con el acuerdo se trata de obtener los mismos resultados, creando previamente las condiciones para una desorganización y el debilitamiento de estos trabajadores, que además constituyen, desde hace años, la punta de lanza de la lucha de clases en Italia.

El Consigliere se alza contra la burocracia

El miércoles, 15 de octubre, el Consigliere —consejo central de la FIAT, que agrupa a todos los delegados— celebra una reunión. Numerosos trabajadores acuden a la misma. La burocracia sindical pone toda la carne en el asador y envía a sus principales representantes: los tres dirigentes de las confederaciones sindicales —Lama de la CGIL, Carniti de la CISL, Benvenuto de la UIL—, tres dirigentes de la FLM y tres de la CGIL, entre ellos Bruno Trentin.

Los trabajadores expresan inmediatamente su desconfianza negándose a conceder a todos estos bonzos la palabra a voluntad, para que no puedan ahogar el problema en una marea de palabras. Al presentar los resultados de la negociación, los burócratas ni siquiera intentan defender explícitamente su contenido. Se contentan con afirmar que la disminución de la participación en los piquetes de huelga y la manifestación de los empleados reflejan una relación de fuerzas desfavorable que les impone este tipo de acuerdo.

De hecho, después de "cabalgar el tigre" en un primer momento, la burocracia se había dado cuenta de la dinámica social y política, a escala nacional, del curso de los enfrentamientos. A partir de entonces se esforzará por descabezar el movimiento.

Trentin intenta, con el talento que tiene para estas cosas, correr una cortina de humo y justificar la capitulación en nombre de una sabia estrategia. Un militante obrero, miembro de la LCR (sección italiana de la IVª Internacional), y delegado de la Spastura, apoyándose en la experiencia concreta de las dos últimas semanas de lucha, desmonta la engañosa argumentación de Trentin. Los prolongados aplausos de la sala revelan el rechazo masivo de las explicaciones dadas por el aparato sindical.

Este sentimiento ya se había expresado cuando Rocco Papandrea, delegado de la Mirafiori y miembro de la LCR, presentó una especie de contrainforme frente a la introducción de Galli (de la FLM y del PCI) y de Mattina (de la FLM). El rechazo de los acuerdos por parte de los delegados, algunos de los cuales son miembros del PCI, no da lugar a dudas. Cuando Carniti (de la CISL) expone las conclusiones, lo abuchean.

Entonces, los secretarios sindicales abandonan precipitadamente la sala, sin pedirle el voto al Consigliere. Temen que el rechazo de los acuerdos por este organismo desemboque directamente en el rechazo por las asambleas obreras de empresa.

Se trata de una basta maniobra de la burocracia, pero los delegados no caerán en la trampa. Para contrarrestarla, Rocco Papandrea presenta una moción en el Consigliere. Esta retoma los objetivos iniciales de la FLM y se opone por tanto a la regulación de empleo (cassa integrazione) total y a la elaboración por la patronal de una lista de despedidos. El eco de esta moción es muy amplio.

Pero los representantes de la izquierda de la FLM sacan el pretexto de que la reunión carece de legitimidad, dada la presencia de numerosos obreros, además de los delegados. Por consiguiente, dicen que no puede pronunciarse debidamente. Finalmente, la moción se somete a un voto indicativo. Es adoptada por una mayoría muy amplia.

Al anoecer, la sección de la FLM se niega a reproducir una octavilla que contiene la moción y el resultado de la votación. Quiere ocultarles esta información capital a los trabajadores del turno de mañana. El aparato sindical frena con todas sus fuerzas.

Sin embargo, numerosos militantes tratan de efectuar por su propia cuenta la distribución. Es significativo, también, que *L'Unita* y *Il Manifesto* hayan silenciado esta batalla en el seno del Consigliere. Únicamente la *Stampa*, el periódico de Agnelli en Turín, relata este enfrentamiento en el consejo central.

El voto en las asambleas obreras

El jueves, 16 de octubre, se celebran asambleas en las principales factorías del grupo FIAT. Conscientes de lo que está en juego, la burocracia no escatima esfuerzos y envía a

los dirigentes confederales a defender el acuerdo a la Mirafiori. Lama va a los talleres de carrocería, Benvenuto a los de prensas y Carniti a los de mecánica.

En todas partes, la contestación es fuerte. Pero la dirección se ha preparado bien. Así, en la asamblea del taller mecánico aparecerán, pocos minutos antes de la votación, los empleados y mandos. Votarán a favor de los acuerdos. Esto explica en buena medida que los acuerdos haya sido aprobados por exiguas mayorías, en Mirafiori, durante la mañana.

Después de la votación estallan las controversias, y se producen choques entre los obreros y los oficinistas. Lama tiene que escapar por los pasillos que utilizan muchas veces, desde 1969, los patronos y sus representantes. Carniti terminará su exposición en la enfermería y Benvenuto necesitará la ayuda de un coche de policía para despedirse de los trabajadores de la FIAT.

En otras factorías, como en la Spastura, el acuerdo es rechazado por el 70% de los votos. En Lancia y en Rivalta, el Comité de Empresa considera que el acuerdo ni siquiera merece someterse a voto.

Por la tarde, en Mirafiori y en Lingotto, las asambleas rechazan los acuerdos. Previamente se habían cuidado de que los oficinistas y mandos de Mirafiori, que no habían participado en la lucha, pudieran intervenir en las decisiones. En cambio, el turno de tarde en Spastura aprueba los acuerdos con el 51% de los votos. En el Sur se aceptan por mayorías muy exiguas; el sindicato trata de presentarlas como aplastantes.

Al término de la tarde, un cortejo de trabajadores sale de los talleres mecánicos de Mirafiori para dirigirse hacia los de carrocería y después a Lingotto. La manifestación avanza hacia el centro de la ciudad. La policía se lo impide. Los trabajadores vuelven a Lingotto. Tras esta jornada, la confusión y la desorientación son grandes.

Una crisis de dirección

Las direcciones sindicales propagan insistentemente por los medios de comunicación: La mayoría de trabajadores han aceptado los acuerdos. Elaboran sutiles cálculos sobre la importancia numérica de los turnos de mañana en comparación con los de tarde. Lama insinúa incluso que los que se oponen a las propuestas de los sindicatos tienen algunas simpatías por los terroristas.

Entre los que estuvieron a la cabeza de la lucha hay el sentimiento de que la voluntad real de los trabajadores era la de rechazar el acuerdo. La presión obrera es tan grande que en el interior de la FLM circula la idea de organizar una nueva votación.

La burocracia central, que comprende el peligro que acarrearía esta decisión para su política, se apresura a poner fin a tales veleidades. Los sindicatos desmantelan toda la infraestructura puesta al servicio de la huel-

ga; el PCI hace lo mismo. Conscientes de que no existe ninguna fuerza con los recursos suficientes para organizar y centralizar la resistencia obrera, piensan que el vacío creado por esta brusca retirada desconcertará a los trabajadores y conducirá a la fragmentación del movimiento.

La ruptura entre el aparato sindical y los delegados, los militantes sindicalistas, los trabajadores combativos, es completa. De hecho, la burocracia se ha apoyado en los sectores de oficinistas y mandos organizados por la dirección y en los sectores más atrasados de los trabajadores.

Además, numerosos trabajadores, después de haber sido explotados durante largos años, se han dejado seducir por la solución de la jubilación prematura, por la baja voluntaria con indemnización o por la falsa esperanza que significa la asignación a la "cassa integrazione" durante un largo periodo.

Esta ruptura entre un sector muy amplio de trabajadores avanzados y el aparato burocrático se refleja con fuerza hasta dentro de las filas del PCI. Hay numerosos militantes comunistas que se niegan a distribuir las octavillas del PCI que exponen favorablemente los acuerdos.

Una derrota

El viernes 17, en algunas factorías aún se celebran asambleas. Incluso estalla una huelga en la *Spastura*. Pero el obstáculo determinante para retomar la iniciativa reside en la dificultad extrema para centralizar la oposición.

Los militantes de la LCR, y numerosos delegados reclaman una reunión del *Consiglione*, para que asuma directamente la dirección de la lucha y de las negociaciones, a la

vista de la brutal traición de las direcciones sindicales.

En esta fase de la lucha aparece una contradicción central: por un lado se expresa un rechazo masivo de la política de los aparatos por parte del grueso de los trabajadores que constituyen la columna vertebral del sindicato y de los consejos de la FIAT, y por otro está la inexistencia de una dirección de recambio susceptible de cristalizar esta oposición, de ofrecerle una salida y de ganarse las bases obreras.

El resultado de este combate de los trabajadores de la FIAT no viene determinado por su falta de movilización y de combatividad, sino por una crisis de dirección proletaria. La ausencia de una organización lo suficientemente fuerte, capaz de estructurar una corriente sindical, le ha permitido al aparato nacional de los sindicatos y del PCI salirse con la suya. La capacidad de los militantes de la LCR de combatir puntualmente las maniobras de los dirigentes sindicales ilustra las posibilidades que habrían existido para una organización cuantitativamente más fuerte.

Al margen de la resistencia que haya podido haber, la imposibilidad, para los trabajadores, de encontrar una alternativa sanciona la victoria del aparato burocrático y su propia derrota. Y esto por tres razones.

De entrada, el acuerdo se reduce de hecho a la aceptación de los despidos masivos en uno de los bastiones de la clase obrera italiana, cosa que habían impedido, en los ramos industriales decisivos, la relación de fuerzas entre las clases existente en Italia desde 1969.

En segundo lugar, la regulación de empleo de 23.000 trabajadores descompone la estructura sindical de los consejos, y echa fuera de la fábrica a todo un sector de

jóvenes trabajadores y trabajadoras que hicieron frente, durante los últimos años, a las ofensivas de Agnelli.

Además, empiezan ya las represalias contra los militantes que no figuran en la lista de los 23.000; el patrón intenta restablecer su autoridad no compartida en la fábrica. Finalmente, el enfrentamiento en el propio sindicato es un golpe para la FLM, que aparecía como un polo de agrupamiento de la resistencia obrera desde hacía algunos años. Esto puede estimular nuevas corrientes antisindicales en algunos sectores de trabajadores.

La burguesía y la patronal aprovecharán sin duda las ventajas obtenidas. En la siderurgia y la petroquímica se preparan medidas similares. El nuevo gobierno Forlani se apresura a sacar beneficio de la situación creada por la cobardía de las direcciones burocráticas para presentar un nuevo plan de austeridad, que la burguesía espera aplicar enteramente esta vez.

Todo esto indica que, al igual que en otros países europeos, se inicia una nueva fase de la política de austeridad, a la sombra de la nueva recesión. El gobierno y la patronal intentan sacar todas las ventajas posibles del peso de un paro mucho mayor que en 1974-75. Tratan de golpear a las organizaciones sindicales y desarrollan unas estrategias precisas para debilitar estructuralmente a la clase obrera (reconversión de la producción, división entre un sector estable de trabajadores y un sector interino, etc.).

Esta nueva ofensiva del Capital no avanzará sin importantes enfrentamientos. Pero sus resultados dependerán, cada vez más directamente, de la existencia concreta de una solución y de un instrumento alternativo a la política de los reformistas, que sufrirán también una crisis creciente. Los resquemores en el seno del PCI son un ejemplo. □



Tras la derrota de Strauss.



Helmut Schmidt.



Franz Josef Strauss.

1. Franz Josef Strauss no ha logrado convertirse en canciller, y esto es ya una victoria parcial. Sin embargo, los resultados de estas elecciones constituyen una derrota para todos los que querían impedir que ganara Strauss.

El aliado burgués de la coalición con el SPD, el partido liberal FDP, es el auténtico vencedor de estas elecciones. Los representantes lúcidos de los intereses de la patronal en el gobierno, Lambsdorff y Genscher, han reforzado sus posiciones. Han ganado más de un millón de votos, mientras que el SPD ha tenido que contentarse con repetir sus resultados de 1976. De este modo, Schmidt ve confirmada su orientación favorable a la patronal.

Strauss tiene razón cuando afirma hoy que ha desarrollado su campaña en el mismo terreno que Lambsdorff y Genscher: "Cerrarle el camino a los socialistas, contra el Estado-Sindicato".

Strauss y su programa no han salido derrotados, sino todo lo contrario: las fuerzas antisocialistas y antisindicales son ahora bastante más poderosas que antes de la candidatura de Strauss.

2. El refuerzo del bando de los patronos es responsabilidad de la dirección del SPD. Esta ha permitido que Strauss utilizara el combate de los trabajadores polacos para su campaña electoral reaccionaria, cuando la democracia socialista por la que luchan los

polacos desmiente de forma contundente la consigna de Strauss "libertad o socialismo".

Schmidt, Brandt y Bahr habían llamado a no realizar manifestaciones contra Strauss en la calle. Se pronunciaron contra cualquier participación de los militantes socialdemócratas en actividades unitarias contra Strauss. A los ataques de la CDU-CSU contra las mujeres, el servicio de prensa PPP del SPD añadió sus propios ataques contra Alice Schwartz y la revista *Emma*.

Mientras los obispos y pastores llamaban a votar a Strauss, Schmidt defendió el mantenimiento de la contribución del Estado a las finanzas de las Iglesias a través del impuesto eclesiástico.

Tras el atentado fascista de Munich, el SPD le dejó un amplio margen a Strauss para desarrollar su propaganda a favor del "Estado fuerte", en lugar de denunciar a Strauss como el inspirador de la movilización de la extrema derecha y al mismo tiempo como el principal beneficiario del terror nazi.

La izquierda del SPD no ha opuesto ninguna resistencia seria a esta orientación confusionista y capituladora. No se unió a la actividad pública de todos los oponentes de Strauss.

Las direcciones sindicales socialdemócratas se apresuraron a evitar cualquier movilización sindical contra Strauss. Eugen Loderer, presidente del Sindicato del Metal, desconvocó la movilización en defensa de la cogestión en la empre-

sa *Mannesmann*, sólo para darle satisfacción a Schmidt.

3. El SPD ha dejado pasar una verdadera oportunidad para obtener la mayoría absoluta en las elecciones. Hace tan sólo seis meses, en las elecciones al *Landtag* (parlamento regional) de Renania del Norte-Westfalia, el SPD obtuvo más votos que Strauss y el FDP juntos. El FDP había descendido por debajo del 5%.

El SPD no ha sabido movilizar a numerosos jóvenes y trabajadores en su favor. En las cuencas del Rin y del Ruhr, y contrariamente a los resultados electorales mencionados, el SPD no ha sabido aflojar los vínculos de los trabajadores cristianos con la CDU.

El descenso de la participación electoral ha ido también a expensas del SPD. Incluso en sus bastiones del Ruhr, sus resultados son peores que en 1976.

Pese a todo ello, Schmidt, Brandt y Bahr se declaran satisfechos con los resultados electorales. Ya no tienen que tener miedo a verse obligados a hacer frente a una nueva crisis económica sin poder cubrirse con la hoja de higuera y coartada que es la coalición con el FDP. Schmidt tiene ahora las manos libres para proseguir e incluso reforzar su política de crisis según los deseos de la patronal.

De ahora en adelante, el ala derecha del SPD podrá apartar más fácilmente las aspi-

raciones de los trabajadores del electorado socialdemócrata. Ahora podrán librarse a terribles revisiones, sobre todo, y muy pronto, en torno a la cuestión del control de fondo de desempleo, posteriormente en torno a las fuertes reducciones en el capítulo de gastos sociales del presupuesto federal, así como en torno a la carrera de armamentos.

4. El FDP ha arrebatado muchos votos secundarios al SPD. La negativa de la dirección del SPD a luchar por la mayoría absoluta en el *Bundestag* (parlamento federal), las declaraciones de Schmidt, según las cuales en ningún caso se renunciaría a la coalición con los liberales, todo esto aportó a Genscher y Lambsdorff numerosos votos, que correspondían al SPD.

Al mismo tiempo, el FDP ha recibido votos del lado CDU-CSU: de quienes no querían votar a Strauss o consideraban que su derrota era segura y presentaron la coalición Schmidt-Lambsdorff como un "mal menor" frente a la eventualidad de un gobierno socialista homogéneo. Los votos a favor del FDP son votos a favor de la política de la patronal. Estos votos constituyen un punto de apoyo para el ministro de Economía, Lambsdorff, que ante el problema que plantea la existencia de un millón de parados recomienda prolongar la jornada de trabajo en lugar de reducirla, y que aspira a hacer retroceder al movimiento sindical de Alemania Federal al nivel del modelo japonés.

5. El "giro político" reaccionario que se proponía conducir Strauss ha encontrado centenares de miles de oyentes durante la campaña electoral. Pese a las intervenciones abiertamente reaccionarias a favor de la preparación de la guerra y de una política de austeridad, contra los sindicatos, los inmigrantes y las mujeres, la CDU-CSU sigue siendo el partido más grande del país.

Strauss no ha encontrado ninguna resistencia decidida y su programa no ha sido

barrido, sigue siendo el programa patronal para la recesión que comienza y para la crisis de la sociedad capitalista. El resultado de las elecciones favorece nuevos ataques, inspirados en el programa de esta ofensiva política.

6. Los "verdes", cuyo abanico político va de los socialistas ecologistas hasta sectores reaccionarios, no presentaron ninguna alternativa al programa de Strauss durante la campaña electoral.

Cerrarle el camino a Strauss no formaba parte, como afirmó Petra Kelly al terminar las elecciones, de los "objetivos principales" de los "verdes". Independientemente de las intenciones de quienes han votado a favor de los "verdes", su resultado electoral ha mejorado los resultados del partido de los patronos.

Una vez más, es sobre todo la dirección del SPD la responsable de este hecho, y su orientación política no ha sabido impedir que numerosos electores, y sobre todo jóvenes, votaran a favor de los "verdes".

El PC pro-Moscú, el DKP, trató de presentarse a sí mismo como la "alternativa socialista", en el preciso instante en que alcanzaba las cimas del servilismo al apoyar la represión burocrática en la RDA, en Europa del Este y en la Unión Soviética, al difamar a los trabajadores polacos, según él manipulados por el extranjero, y al criticar a los ferroviarios en huelga en Berlín Este.

Su debacle electoral confirma el hecho de que una alternativa socialista sólo puede construirse sobre la base de un balance de los crímenes cometidos por los regímenes burocráticos.

7. No es únicamente la dirección del SPD, sino también la propia izquierda de este partido la que ha incumplido su deber de infligir una derrota a Strauss. El sectarismo por un lado, y por otro la apreciación ultraizquierdista de que el resultado electoral no tendría significado alguno para las fuerzas socialis-

tas, debilitaron la movilización contra Strauss.

El resultado de las elecciones desmoviliza a las fuerzas que se sitúan en el terreno de la lucha de clases y pretendían ofrecer resistencia a la orientación de colaboración de clases y a la capitulación de las direcciones sindicales tanto como a la orientación política de Schmidt. Esto nos da una idea de cuánto habría desmoralizado aún más al movimiento obrero la victoria electoral de Strauss.

El GIM se pronunció por cerrarle el camino a Strauss mediante una acción unitaria, por votar al SPD frente a los partidos de la patronal, por organizar la lucha por una alternativa socialista a la política de Schmidt y del SPD.

Después de las elecciones de 1980 al *Bundestag*, se han hecho aún más necesarios una respuesta de clase al programa patronal y el combate por una alternativa socialista a la crisis del capitalismo. En el transcurso de los próximos meses se harán sentir muy concretamente para el movimiento obrero las consecuencias de la recesión y del refuerzo de las posiciones políticas de los patronos.

Desde que Franz Josef Strauss anunció su candidatura al puesto de canciller, la dirección del SPD ha tratado sistemáticamente de ocultar el significado particular de su programa en tanto que declaración de guerra de la patronal al conjunto de la clase obrera.

A la vista de estos resultados electorales, es más necesario que nunca militar en los sindicatos en pro de la independencia frente al gobierno Lambsdorff-Schmidt y en pro de la defensa combativa de los intereses de los trabajadores.

Frente al programa político de los patronos, los socialistas en el SPD deben quitarse la careta: o bien siguen el ejemplo de los trabajadores polacos en la lucha por sindicatos autónomos, o bien continúan dejándose maniar en la coalición con los patronos. □



La campaña electoral en Alemania.

Los avances de la izquierda en el Congreso del Partido Laborista.



Wilson.

Las decisiones adoptadas por el Congreso del Partido Laborista, celebrado a comienzos de octubre, implican un cambio en la vida política de Gran Bretaña. Se produjo un claro avance de la izquierda laborista, cosa que desencadenó la furia de la derecha de este partido y de la prensa *tory* (del Partido Conservador). El diario de gran tirada *Daily Mirror*, titulaba en primera plana: "Furia desatada ante la victoria de Benn y de la izquierda".

Esto es un tanto exagerado. Sin embargo, las decisiones adoptadas en relación a la atribución de los mandatos a los diputados salientes antes de cada elección, así como la de ampliar el derecho de voto para la elección del secretario general del Partido Laborista (1), han abierto efectivamente la posibilidad de que un programa de izquierda adoptado por el Congreso sea aplicado por un futuro gobierno laborista.

Tony Benn, el principal pretendiente al cargo de secretario general, caracterizó justamente estas victorias como "un inicio de control del partido de los militantes de base, en oposición al control de los parlamentarios sobre la base".

El programa de la izquierda laborista

Las decisiones de carácter claramente de izquierda que se adoptaron fueron las siguientes:

- organización de una campaña por la semana de 35 horas, sin reducción del salario y contra los cierres de empresas y las supresiones de puestos de trabajo;
- nacionalización de importantes sectores de la industria británica y renacionalización de todas las empresas del Estado que han sido reprivatizadas por los *tories*;
- retirada total del Mercado Común;
- abolición de la Cámara de los Lores (cámara alta, no elegida, del Parlamento británico);
- orientación hacia el desarme unilateral del arsenal nuclear e importantes recortes en el presupuesto para la Defensa.

Los cambios introducidos en los Estatutos han variado el significado de este programa radical. El intento de retirarle al secretario general del partido la exclusiva en la redacción del manifiesto electoral, fracasó. En cuanto al modo de elección del secretario general, los dirigentes sindicalistas de la derecha laborista hicieron toda una serie de maniobras en torno al procedimiento; sin embargo, lo único que lograron fue la celebración de un nuevo Congreso en enero próximo. Será el tercero en el espacio de nueve meses. El debate en los sindicatos, que ya había sido muy rico antes de este congreso, adquirirá ahora una amplitud sin precedentes.

Una espuela para la lucha de clases

Los militantes entenderán estas decisiones como la señal de la respuesta a dos calamidades que han traído los *tories*: el paro masivo y la inflación galopante. Ahora contarán con el apoyo de la izquierda laborista y tendrán la perspectiva concreta de obligar a un futuro gobierno laborista a que dé satisfacción a sus reivindicaciones. Una respuesta de gran envergadura es hoy en día realmente posible.

Al principio, la clase obrera había quedado anonadada bajo los ataques de los *tories*. Estos ataques se han plasmado en un paro masivo que, por primera vez desde los



años 30, ha rebasado la cifra de dos millones de personas, es decir, un aumento del 20% en tres meses.

Importantes sectores de la clase obrera, como los trabajadores del automóvil y del acero, no cuestionaron la orientación sindical errónea ni desbordaron a las direcciones que las proponían. No consiguieron oponerse con eficacia a las restricciones presupuestarias, a las supresiones de puestos de trabajo ni al paro parcial.

La mayoría de los trabajadores han obtenido unos aumentos salariales cuyo porcentaje es inferior a la mitad de la tasa de inflación. Pero ahora está claro que el arma del paro no ha conseguido quebrar la combatividad de la clase obrera. Se desarrolla una nueva voluntad de resistir. Esto es lo que demostró el congreso del Partido Laborista y lo que tiende a reforzar gracias a las decisiones tomadas.

El congreso del TUC (*Trade Union Congress* —confederación sindical única), que se había reunido un mes antes, había adoptado un programa radical del mismo tipo. Pero la burocracia había logrado que se votaran algunas propuestas contrarias en una serie de cuestiones importantes. Por ejemplo, el congreso se había declarado tanto a favor como en contra de la limitación de los aumentos salariales por parte de un futuro gobierno laborista. Esta actitud de expectativa reflejó la incertidumbre de la burocracia sindical en relación a los efectos más o menos explosivos que tendrán los dos millones de parados de Thatcher en las or-

ganizaciones y la combatividad de la clase obrera en las empresas.

A la vista del contexto en que había sido derribado el gobierno anterior —acciones sindicales masivas contra el programa de austeridad de Callaghan—, serán muchos los burócratas que prestarán su apoyo a Callaghan incluso si la combatividad obrera permanece intacta.

Sin embargo, la lucha en torno a la cuestión de la democracia interna en el Partido Laborista fue la expresión más patente del rechazo de cinco años de austeridad impuestos por los laboristas. Dada la falta de coherencia de las direcciones sindicales, los errores increíbles de la derecha laborista (que ha amenazado con escindir el partido, se ha negado a participar en las reuniones de la dirección so pretexto de que en ella es mayoritaria la izquierda, etc.) y la importante participación de la base en el congreso del Partido Laborista —contrariamente a lo que sucedió en el TUC—, en esta cuestión los trabajadores han expresado claramente su voluntad.

Una serie de acontecimientos ha demostrado que la clase obrera, si tiene una dirección justa, no sólo está dispuesta a luchar, sino que puede ganar.

La victoria de los estibadores es una primera señal. Los trabajadores han echado atrás a los patronos, que pretendían despedir a 178 estibadores, lo que era una amenaza para varios miles de puestos de trabajo: ponían en tela de juicio un acuerdo firmado en 1972, en virtud del cual los patronos habían "comprado" varios miles de despedidos, garantizando el empleo del resto de trabajadores. Este acuerdo ya no

les conviene hoy a los patronos, dada la agravación de la recesión en Gran Bretaña. Frente a este ataque brutal, una conferencia nacional de delegados de los estibadores, reunida para organizar la respuesta, decidió convocar una huelga a escala nacional.

Los trabajadores de la BOC (*British Oxygen Company*), que tiene prácticamente el monopolio en Gran Bretaña sobre el suministro de gases industriales, han obtenido otra victoria, que si bien no es tan redonda, ha sido muy importante. Frente a la amenaza de despidos en la fábrica de Hackney, cerca de Londres, los trabajadores lanzaron un llamamiento a la huelga nacional. También en este caso, los patronos han dado marcha atrás.

Hay otras dos luchas que podrían subrayar esta tendencia: por un lado, la ocupación de la segunda fábrica de construcciones mecánicas de Manchester, en la región industrial del noroeste de Inglaterra, para oponerse a 590 despidos. Esta lucha podría convertirse en el punto de mira y ejemplo para toda una serie de empresas amenazadas de despidos y de cierre.

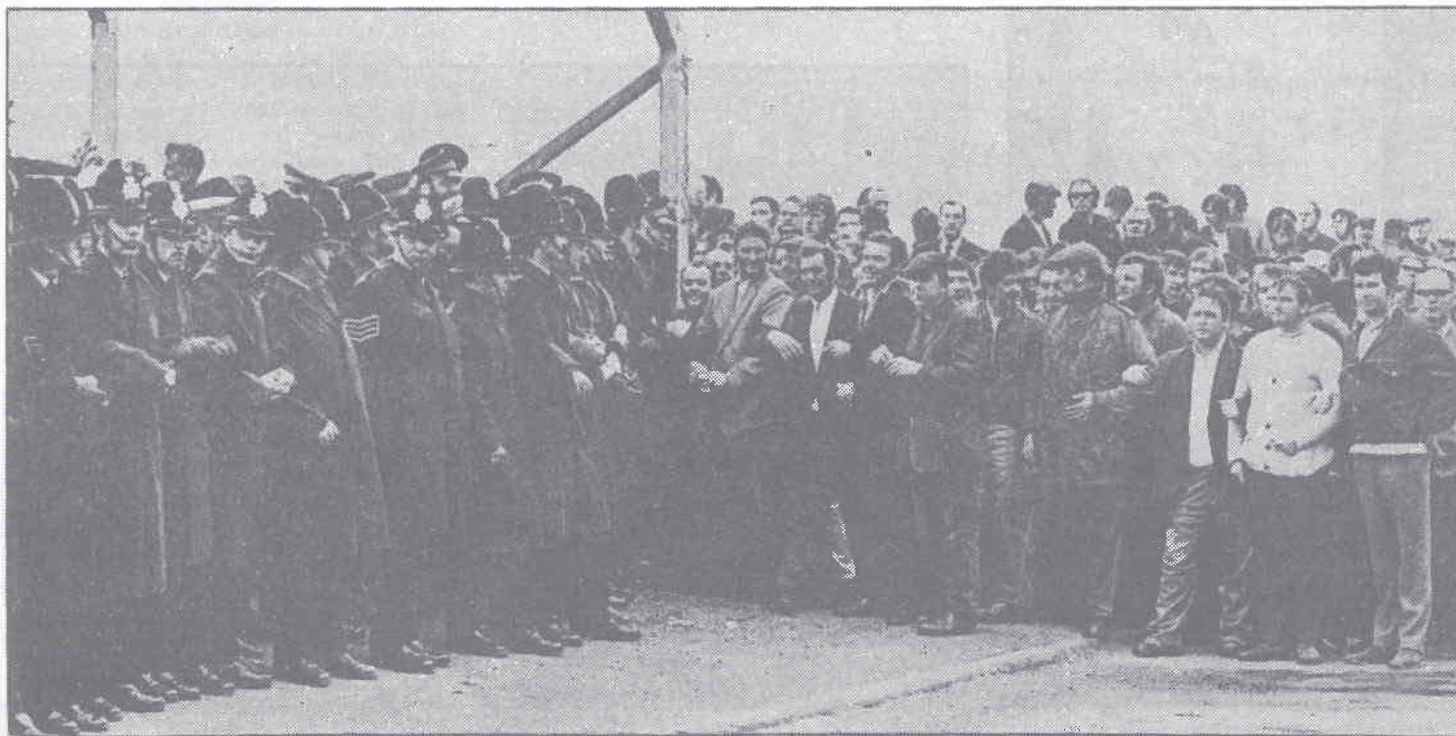
Por otro lado, el conflicto de los *lagers* (obreros encargados del aislamiento térmico) adquiere la misma dinámica. La huelga, que dura ya 14 meses, de la central térmica de la isla de Grain, declarada para rechazar una reducción del salario, se encuentra actualmente con problemas, debido a la actitud de determinados miembros del EEU (*Engineering and Electricians Union* —sindicato de técnicos y electricistas), que han roto la solidaridad. Pero los *lagers* han proseguido con la lucha con decisión, realizando acciones de

popularización y reforzando los piquetes de huelga de otras empresas en lucha. Estas acciones constituyen un desafío a la nueva ley antisindical, votada por los *tories*, que prohíbe los piquetes de huelga. Ahora, los *lagers* han decidido llamar a la huelga nacional si no se da ninguna solución al conflicto.

Este nuevo estado de ánimo de la clase obrera les plantea a los *tories* problemas cada vez más graves. Han agravado deliberadamente los efectos de la recesión, y los patronos prestaron todo su apoyo político a esta orientación, cuyos efectos empiezan a volverse contra ellos. Pensaban que provocando de la noche a la mañana un paro a gran escala era una manera radical de romper las organizaciones de la clase obrera por lo menos a nivel de empresa.

El segundo aspecto de la estrategia *tory* tampoco ha sido un éxito. Quisieron establecer un ejemplo con los trabajadores de la siderurgia. Según ellos, inflingir una derrota a este sector, cuidadosamente escogido, era el mejor medio de preparar nuevos ataques contra los sectores mejor organizados de la clase obrera, particularmente los mineros. Pero su plan fracasó. Este sector, que antes era poco combativo, resistió durante 13 semanas, y aunque no obtuvo satisfacción en todas sus reivindicaciones, los salarios aumentaron en un 16%. La propuesta inicial de la patronal era del 2%.

Después de este conflicto, los *tories* tuvieron que modificar su estrategia, tratando de evitar todo choque frontal con los sectores clave. De ahí que bien puede ser que la reivindicación de los mineros, de un



Gran Bretaña

aumento del 30% del salario, esté ya satisfecha en buena parte. Esto ha estimulado la movilización en las minas, y cualquier intento de cerrar algún pozo podría desencadenar la huelga general.

En la región más amenazada, al sur del País de Gales, los dirigentes de los mineros han empezado a recorrer los pozos para organizar la solidaridad y preparar la huelga. Es evidente que estas actividades aparecerán como un test a los ojos de los demás sectores de la clase obrera.

Es precisamente esta debilidad práctica la que había tratado de superar el gobierno *tory* con ayuda del arma del paro. Y en la medida en que sus efectos empiezan a salirle por la culata, acá y acullá empiezan a oírse voces favorables a un cambio completo de política. Sin embargo, no cabe duda que su estrategia actual es la única posible en el marco de las disposiciones constitucionales vigentes. En este sentido, Thatcher tiene un margen de maniobra aún menor que el anterior gobierno conservador de Heath, que había sido derribado por la huelga de los mineros en 1974.

Sea como fuere, la gente empieza a ponerse nerviosa. Un reciente sondeo de opinión realizado por la NOP (*National Opinion Poll*), demuestra que el 51% de las personas interrogadas piensan que el problema prioritario es el paro y no la "lucha contra la inflación"; pero es precisamente esa "lucha" la que utiliza el gobierno para justificar su política. Una mayoría —el 65% de las personas interrogadas— piensan que los *tories* "lo hacen muy mal para frenar el paro". Y las intenciones de voto a favor de los laboristas

sobrepasaban en un 11% a las favorables a los conservadores; cosa que les daría una mayoría confortable de 150 escaños a los laboristas, caso de haber elecciones ahora.

Estos datos han sido confirmados por un segundo sondeo, publicado por MARPLAN. Una lucha de cierta amplitud bastaría para hundir a los *tories* en una crisis irresoluble y marcaría un avance decisivo para la lucha de clases en Gran Bretaña.

La aparición de una alternativa de izquierdas

La importancia de este congreso del Partido Laborista radica también en la aparición de una alternativa de izquierda a la orientación propuesta por Callaghan. Esta corriente se cristaliza en torno a Tony Benn.

Este había sido miembro del gobierno Callaghan, el último gobierno laborista, bajo el cual la cifra de parados había alcanzado un millón y medio, y que había impuesto recortes presupuestarios de 8.000 millones de libras esterlinas en el capítulo de gastos sociales. Sin embargo, después de encabezar la batalla por la modificación de los Estatutos, en el congreso del Partido Laborista de 1979, se distanció progresivamente de las orientaciones del último gobierno laborista.

En los debates preparatorios del congreso, de este año, Benn desarrolló una campaña pública a favor de los cambios que se han adoptado, así como por la AES (*Alternative Economic Strategy*— Estrategia Económica Alternativa). Los congresos del

Partido Laborista y del TUC de este año han adoptado lo fundamental de este programa. También fue Benn el que avanzó las propuestas sobre el Comité Ejecutivo Nacional que se han resumido al comienzo de este artículo.

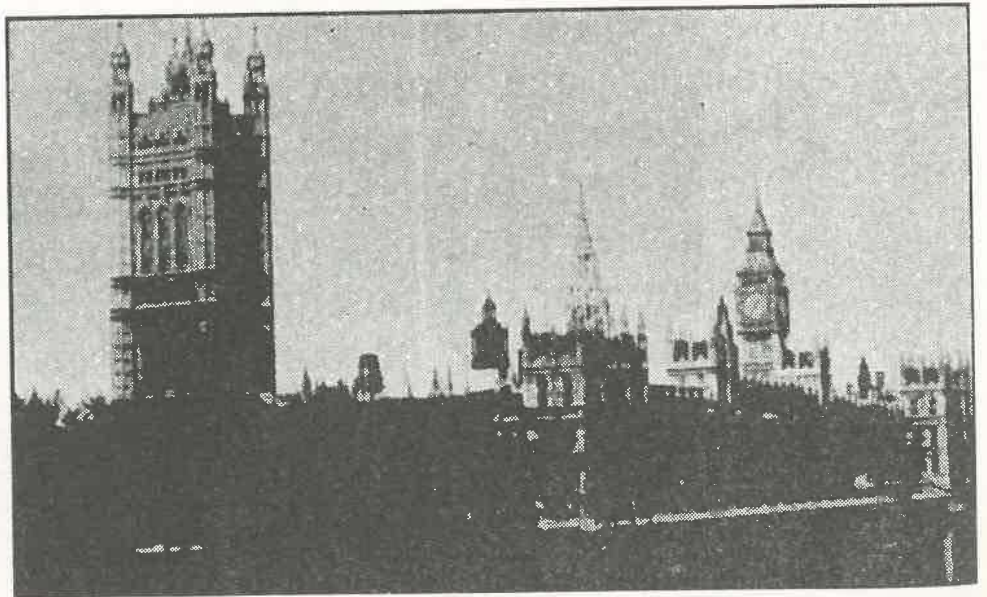
Además, ha estrechado lazos con los sindicatos. Uno de sus partidarios más entusiastas, Arthur Scargill, es dirigente de los mineros de Yorkshire, elegido recientemente como miembro del *TUC General Council* (Consejo General), y es prácticamente seguro que será el próximo secretario general del NUM (Sindicato Nacional de Mineros). Scargill acompañó a Benn en varios mítines importantes.

Benn se ha pasado este año reuniéndose con los comités sindicales regionales, los comités interprofesionales y los responsables sindicales a distintos niveles. Ha participado en muchos actos al lado del candidato de la izquierda laborista en las elecciones del presidente de la AUEW (Sindicato Unificado de Trabajadores del Metal), que cuenta con 1,2 millones de afiliados.

Benn es el candidato incontestable de los comités locales del Partido Laborista, donde la izquierda es hegemónica (2). Ha declarado su apoyo a la lucha por el derecho de las mujeres al aborto libre y ha desempeñado un papel de primer orden en la campaña que tuvo como resultado el rechazo en el Parlamento, de una legislación restrictiva en torno al aborto, a comienzos de año. Finalmente, Benn se ha pronunciado por el derecho del pueblo irlandés a la autodeterminación y por una "política de retirada" de las tropas británicas de Irlanda del Norte.



Los trabajadores frente al Parlamento.



Su estrategia parece consistir en ganarse a los militantes que intervienen en las luchas extraparlamentarias, además de sus esfuerzos por ganarse el apoyo de los sindicatos para su candidatura como secretario general del Partido Laborista. Con la ampliación del derecho de voto decidido por el último congreso de este partido, esta candidatura tiene hoy posibilidades de éxito.

Sin embargo, la orientación que propondrá Benn a la izquierda laborista vendrá determinada sobre todo por la evolución de la lucha de clases. En modo alguno impulsa acciones de masas y su único deseo es el de derribar el gobierno con métodos exclusivamente parlamentarios. Su única perspectiva es la de aplicar su programa en el próximo gobierno laborista —dejando, al mismo tiempo, que los *tories* sigan su evolución "natural". Pero la lógica real de la AES es la colaboración de clases, y en este contexto pretende resolver el problema del paro mediante el control de las importaciones. La orientación fundamental de este programa podría resumirse del modo siguiente: "Salvar la Gran Bretaña de los *malvados tories*". Evidentemente, es todo lo contrario de una orientación hacia la movilización independiente de la clase obrera.

Pero en el contexto actual, los militantes socialistas deben adoptar la orientación de luchar junto a los partidarios de Benn, pues la aplicación de las decisiones del Congreso del Partido Laborista constituye la mejor manera de hacer estallar las contradicciones de la estrategia de Benn.

La decisión sobre el desarme unilateral, en lo que se refiere al armamento nuclear, se adoptó en el contexto de una campaña de masas contra la instalación de los misiles *Cruise* en Gran Bretaña. Durante las deliberaciones del Comité Ejecutivo Nacional tuvieron lugar una manifestación y una concentración delante del congreso. Esta cuestión dividió a los sindicatos obreros y permitió que la izquierda laborista se destacara.

Frente al paro se organizan acciones de masas. Varios miles de sindicalistas se manifestaron delante del congreso del Partido Conservador, el 10 de octubre, con la consigna "derecho al trabajo". Los trabajadores de la construcción afiliados al TGWU (Sindicato de los Trabajadores del Transporte y Asimilados), que cuenta con dos millones de afiliados, llamó al mismo tiempo a una hora de huelga en los tajos. El Partido Laborista organiza una manifestación nacional en la principal ciudad industrial del norte de Inglaterra, Liverpool, para el 27 de noviembre. Se esperan decenas de miles de manifestantes.

Esta movilización de realizará paralelamente a una serie de conferencias regionales, organizadas por el TUC, en torno al tema del paro. La ocupación de

Gardner se inició precisamente en este contexto. La decisión del Partido Laborista y del TUC de lanzar una campaña por la semana de 35 horas, sin disminución del salario, se traducirá sin duda en acciones de masa.

Se desarrollan movilizaciones contra las restricciones presupuestarias que afectan a los servicios sociales. El Consejo de Lambeth, un barrio de Londres, donde los laboristas son mayoritarios, ha convocado una conferencia nacional para el 1º de noviembre; no cabe duda que reunirá a millares de delegados del Partido Laborista y del movimiento sindical. La convocatoria de esta conferencia propone organizar la resistencia frente a los ataques de los *tories*, incluyendo acciones a nivel de empresa.

Es un llamamiento a acciones ilegales. El principal dirigente de este movimiento es Ted Knight, secretario del Consejo de Lambeth. Cuando presentó este llamamiento en el congreso del Partido Laborista, fue ovacionado. Los delegados votaron una moción de apoyo a la conferencia de Lambeth, pese a los intentos de la Mesa del Congreso de aplazar el voto. Esto ha confirmado que cuando los delegados tenían la posibilidad de apoyar una acción de masas, pusieron de manifiesto su determinación y su combatividad.

Finalmente, el apoyo a las reivindicaciones de las mujeres es cada vez más fuerte en los sindicatos y en el Partido Laborista.

Después de decidir, por vez primera en la historia del TUC, luchar contra todo intento de limitar el derecho al aborto, el TUC ha decidido ahora organizar una conferencia, en noviembre, para discutir las posibles acciones a emprender.

Así, Benn ha lanzado su campaña en este contexto de movilizaciones conjuntas del Partido Laborista y del movimiento sindical. Esta situación abre inmensas posibilidades para los militantes revolucionarios que han luchado por el impulso de acciones unitarias de este tipo.

Es la mejor manera de que se organice la respuesta frente a los ataques de los *tories*, que se intensificarán en el próximo período, y de evitar pasos atrás que terminarían mermando la combatividad de la clase obrera. □

NOTAS

- (1) Hasta ahora, el secretario general del Partido Laborista era elegido por el *Parliamentary Labour Party*, es decir, por los diputados laboristas.
- (2) Los comités locales del Partido Laborista se forman sobre la base de la adhesión individual. La mayoría de los sindicatos británicos están afiliados al Partido Laborista; en este caso se trata de una adhesión colectiva.
- (3) *Gardner* es la segunda empresa británica del metal. Ocupa a 2.400 trabajadores y fabrica motores *Diesel*. Los trabajadores han ocupado la fábrica para oponerse al despido de 590 empleados.



Resoluciones XI Congreso Mundial

Precio: 500 Pesetas

Este nº especial de Inprecor no entra en la suscripción.

Solicitar a: Inprecor, Apartado de Correos 50.370, Madrid, y lo enviaremos contra reembolso.

inprecor
INTERCONTINENTAL PRESS
número especial

XIº Congreso de la
Cuarta Internacional



Aviso a nuestros lectores

Por razones que todos comprenderán, nos vemos obligados a aumentar el precio de venta de INPRECOR. A partir del nº 20, que saldrá en enero de 1981, cada ejemplar se venderá al precio de **100 Pesetas** en el Estado español, con aumentos equivalentes para América Latina. EL PRECIO DE SUSCRIPCIÓN SE MANTIENE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1980.

DESEO SUSCRIBIRME Rellena este boletín claramente.
Envíalo al Apto. / 50.370 Madrid

Giro postal / Transf. bancaria a: JOSE VICENTE IDOVAGA, cta. nº 1.184,
Banco Hispano Americano, Ag. Urbana Ntra. Sra. de Fátima, 13. Madrid-25.

Cheque nominal adjunto, por carta al Apartado de correos 50.370 (Cibeles) Madrid.

inprecor
correspondencia de prensa internacional / intercontinental press

ESPAÑA / EUROPA / AMÉRICA

12 números / 900 ptas. / 1.100 ptas. / 1.300 ptas.
 6 números / 450 ptas. / 550 ptas. / 650 ptas.

Apellidos Nombre

Domicilio

Ciudad

Provincia/Estado Distrito postal

No. del giro postal/transf. bancaria/cheque